



SECTOR PÚBLICO VERSUS **AUSTERIDAD**

POR QUÉ LAS RESTRICCIONES DEL GASTO SALARIAL EN
EL SECTOR PÚBLICO DEBEN TERMINAR



Education International
Internationale de l'Éducation
Internacional de la Educación
Bildungsinternationale



PUBLIC SERVICES
INTERNATIONAL

act:onaid

AGRADECIMIENTOS

Este informe fue compilado y escrito por David Archer y Roos Saalbrink, con base en una investigación llevada a cabo en diez países con el apoyo y la coordinación de Jo Walker, una investigación de 69 documentos del FMI de 15 países realizada por Emma Seery, una investigación bibliográfica de Mariska Meurs, un procesamiento de datos de Howard Reed y documentación proveniente de colaboradores de primera línea recopilada por Public Services International (PSI) y Education International (EI).

Nuestro mayor agradecimiento a los colegas de ActionAid y sus socios en diferentes países, incluyendo a: Hoang Phuong Thao, Chu Thi Ha, Ho Thu Phuong, Nguyen Phuong Anh, Nguyen Thi Thuy Van, Chu Thi Ha, Nguyen Thi Hoa, Dr Thanh, Emmanuel Ponte, Ana Paula Brandao, Renata Saavedra, Andressa Pellanda, Marina Deavelar, Vanessa Pipinis, Celestine Odo, Suwaiba Yakubu-Jubrin, Kenneth Okoineme, Adedeji Ademefun, Margaret Brew-Ward, John Nkaw, Prince Osei-Agyekum, Sumaila Rahman, Eric Osei-Assibey, Angelus Runji, Jovina Nawenzake, Karoli B. Kadegehe, Balizi Morwa, Zakaria Sambakhe, Nathaly Soumahoro, Yandura Chipeta, Chikumbutso Ngosi, Assan Golowa, Clement Ndiwo Banda, Andrew Chikowore, Kundai H. Chikoko, Rumbidzayi Makoni, Aminata K. Lamin, Mohamed Fofana, Foday Swaray, Devendra Pratap Singh, Saroj Pokhrel, Sujeeta Mathema, Ana Alcalde, Anders Dahlbeck, Asmara Figue, Julie Juma, Maria Ron Balsera, Kate Carroll, Sara Almer, Tetet, Neelanjana Mukhia, Wangari Kinoti, Niranjali Amerasinghe, Arianna Kandell, Lila Caballero, Fatimah Kelleher y Megha Kashypap.

También expresamos nuestro agradecimiento a nuestros investigadores externos que nos ofrecen su valiosa retroalimentación: Caroline Othim, Chris Hope, Danny Bertossa, Emma Burgisser, Isabel Ortiz, Jennifer Ulrick, Jessica Woodruff, Jon Sward, Kate Donald, Katie Malouf, Leo Baunach, Maria Jose Romero, Matti Kohonen, Nabil Abdo, Nela Porobic Isakovic, Oceane Blavot, Rick Rowden, Sarah Hewitt, Sonia Languille, Steve Klees y Thomas Stubbs.

Muchas gracias además a nuestros colegas de:

En Education International – Jennifer Ulrick, David Edwards, Haldis Holst, Antonia Wulff, Dennis Sinyolo, Louise Hoj Larsen, Cristina Banita, entre otros.

En Public Services International – Danny Bertossa, Marcelo Netto, Leo Hyde, Gianluigi Lopes, Sani Baba, Kate Lappin, entre otros.

DISEÑO POR: www.nickpurserdesign.com

FOTO DE PORTADA: Dado que son tan pocas y tienen tanta carga de trabajo, es increíble que enfermeras de primera línea como Mary, en el Upper West State del Norte de Ghana, siempre mantengan una sonrisa.

FOTO: ACTIONAID

CONTENIDO

Lista de cuadros	4
Acrónimos	4
HALLAZGOS Y MENSAJES CLAVES	5
1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES	
1.1 El culto de la austeridad	7
– Testimonios de primera línea en Nigeria	8
1.2 Retórica cambiante versus práctica inmutable	8
1.3 Justificaciones y alternativas	11
– Testimonio de primera línea en Nepal	13
1.4 Lo bueno, lo malo y el futuro de los empleados del sector público	15
– Testimonio de primera línea en Ghana	16
2. NUESTRA METODOLOGÍA	
– Testimonio de primera línea en Ghana	18
3. ÁMBITO FISCAL Y EL MITO DE LA ‘TEMPORALIDAD’	
3.1 ¿Estas medidas son temporales?	19
– Testimonio de primera línea en Zambia	20
3.2 ¿Qué porcentaje del PIB debe destinarse al gasto salarial en el sector público?	22
– Testimonio de primera línea en Nepal	22
3.3 ¿Se han tomado medidas para expandir el margen de maniobra fiscal? Por ejemplo, ¿aumentar los ingresos fiscales?	23
3.4 ¿Los países con ingresos crecientes tienen permitido destinar recursos al gasto salarial?	25
4. DATOS DUDOSOS Y COMPARACIONES INJUSTAS	
4.1 Comparaciones de países	27
4.2 La prima salarial del sector público	28
4.3 Datos faltantes: ¿cuántos trabajadores de salud y educación se necesitan?	30
5. IMPACTOS PREVISTOS E IMPREVISTOS	
5.1 ¿Crear un margen de maniobra fiscal para el ‘desarrollo’?	33
5.2 Impulsar el Fundamentalismo de Infraestructura	35
5.3 Abrir puertas al sector privado y cobrar tarifas por servicios públicos	37
5.4 Eliminar los sindicatos	39
5.5 Recortar con la herramienta más contundente	40
5.6 Menoscabar la salud, la educación, el género y otros objetivos de desarrollo	42
5.7 Minar la acción climática	44
– Testimonio de primera línea en Nepal	45
6. UN CULTO Y UNA IDEOLOGÍA EN RETROCESO	46
7. DE CARA AL FUTURO	49
8. RECOMENDACIONES	52
Referencias	54

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1:	Hay alternativas: ocho opciones de financiamiento para aumentar el gasto salarial en el sector público	10
Cuadro 2:	Enfrentar la crisis de la deuda	11
Cuadro 3:	El acuerdo fiscal del G7	11
Cuadro 4:	Reformas fiscales progresivas	12
Cuadro 5:	El compromiso de ActionAid por un futuro feminista, justo y verde	14
Cuadro 6:	Brasil y el culto de la austeridad	17
Cuadro 7:	Seis años de recortes y congelamientos en Sierra Leona	20
Cuadro 8:	Salarios de miseria en el sector público en Zimbabue	26
Cuadro 9:	Nepal – Impactos por género de las restricciones salariales en educación	27
Cuadro 10:	¿Quién y qué está incluido?	28
Cuadro 11:	Revertir la prima privada o planes de mejora de salarios en el sector público en Vietnam	29
Cuadro 12:	Referencias y quién debe establecerlas	31
Cuadro 13:	Nigeria: trabajadores de primera línea del sector público con salario mínimo	32
Cuadro 14:	Ghana: salud y educación en la línea de mira	35
Cuadro 15:	¿Señales de cambio en Senegal?	37
Cuadro 16:	La mayoría de los programas del FMI fracasan	40
Cuadro 17:	La alianza feminista macroeconómica de Malawi: otra economía es posible	48
Cuadro 18:	Alternativas económicas feministas	50

ACRÓNIMOS

CEDAW	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
ECF	Facilidad de Crédito Extendido
IFC	Corporación Financiera Internacional
OIT	Organización Internacional del Trabajo
FMI	Fondo Monetario Internacional
OCDE	Organización para Cooperación y Desarrollo Económico
PPP	Asociación Pública-Privada
PSI	Public Services International
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
IVA	Impuesto al Valor Agregado
OMS	Organización Mundial de la Salud



Sarah Chepkwemboi es una enfermera de primera línea que trabaja en un nuevo centro de salud ubicado en Mokoyon Parish, Uganda, donde creció. Cuando era niña y enfermó, su padre la llevaba en bicicleta al centro de salud más cercano, a dos horas de distancia. Llevar los servicios de salud a comunidades remotas puede transformar sus vidas. FOTO: ACTIONAID

HALLAZGOS Y MENSAJES CLAVES

Todo el mundo enfrenta una serie de crisis interconectadas, y para darles respuesta será necesario romper por completo las formas usuales de lidiar con la realidad. A la luz del Covid-19, la creciente crisis de la deuda, la desigualdad galopante, la injusticia de género y la crisis climática, existe una necesidad urgente de replantear el rol fundamentalmente distributivo de los Estados y reinventar el sector público.

Durante los últimos cuarenta años, las políticas de austeridad han conducido a recortes en la plantilla del sector público que han socavado la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios públicos de calidad. Una de las políticas de austeridad que ha afectado más profundamente los servicios públicos es la imposición de restricciones del gasto salarial en el sector público, lo cual impide una prestación de servicios con perspectiva de género. Dos son las consecuencias directas de esta política:

1. Bloqueos a la contratación de nuevos maestros, enfermeros y otros trabajadores esenciales.
2. Límites estrictos a los ya bajos salarios de maestros, enfermeras y otros trabajadores en nómina.

El neoliberalismo ha sido sobreestimado durante cuarenta años y ha frenado el crecimiento y desarrollo que supuestamente promovía¹. Es hora de renovar los fundamentos de la arquitectura económica y la política fiscal y crear un sistema económico justo y feminista, enfocado en el cuidado de las personas y el planeta.

Partiendo del trabajo realizado los últimos 15 años, en 2022 emprendimos una investigación exhaustiva en tres continentes, revisamos 69 documentos del FMI elaborados para 15 países, sostuvimos discusiones con economistas del FMI y realizamos una revisión bibliográfica del gasto salarial en el sector público. Nuestra investigación reveló que:

- Aunque el FMI afirma que el control del gasto salarial solo es temporal, a los 15 países del estudio se les instruyó **recortar y/o congelar el gasto salarial en el sector público** durante tres o más años, y ocho de esos países debían hacerlo hasta por seis años.
- Solo en esos 15 países, **los recortes recomendados por el FMI ascienden a unos US\$ 10 mil millones**: el equivalente a un recorte de más de 3 millones de empleados de primera línea en el sector público.
- Solo en esos 15 países, un **punto de aumento en el porcentaje del gasto salarial del PIB en el sector público permitiría contratar 8 millones de enfermeros, maestros y otros trabajadores**.
- No existe **ninguna lógica, racionamiento o evidencia clara que justifique cuándo es necesario recortar o cuánto dinero es suficiente**. A Zimbabue, con un gasto salarial de 17,1% del PIB, se le recomendó recortar, pero también a Liberia, cuyo gasto es de 10,1%; Ghana, con 8,7%; Senegal, con 6,5%; Brasil, con 4,6%; Nepal, con 3,7%; Uganda, con 3,5% e incluso Nigeria, cuyo gasto es de solo 1,9% de su PIB en trabajadores del sector público.
- La última recomendación de medio plazo del FMI es **llevar a cada país por debajo del promedio mundial** de gasto salarial en el sector público, como un porcentaje del PIB, lo que contribuye a formar una espiral descendente de largo plazo.
- Aunque se afirma que los recortes del gasto salarial en el sector público deben estar **acompañados de acciones para aumentar los ingresos fiscales**, la mayoría de los países experimentaron decrecimiento, estagnación y/o relaciones inadecuadas impuestos-PIB. Incluso a los pocos países que lograron un aumento de los ingresos fiscales, se les recomendó recortar el gasto salarial en el sector público.
- Las restricciones del gasto salarial en el sector público **afectan el progreso en salud, educación, género** y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- No se realizó **ninguna evaluación seria o sistemática previa o a posteriori de los déficits de trabajadores claves** en salud y educación que explique recortes o congelamientos y no se produjo ningún intento por prever el impacto de las restricciones del gasto salarial.
- Los recortes del gasto salarial en el sector público a menudo fueron denominados como esenciales para liberar fondos que serían destinados a gastos de inversión de capital, lo cual daba la impresión absurda de que gastar en los trabajadores del sector público no es una parte valiosa del gasto social. En la práctica, el **fundamentalismo de infraestructura desvía realmente el gasto hacia áreas no ligadas a la salud y la educación**.
- El **impacto se triplica en, y los sienten más profundamente, las mujeres y niñas**, puesto que estas tienen más probabilidades de ser excluidas del acceso a servicios básicos, de perder oportunidades de obtener un trabajo digno en el sector público y de asumir una carga desproporcionada de cuidado y trabajo doméstico no remunerado que aumenta cuando los servicios públicos fallan.
- Los documentos del FMI en general usaron **datos dudosos y comparaciones inadecuadas entre países** para disminuir el gasto salarial en el sector público.
- **El secretismo en las discusiones del FMI con los Ministerios de Finanzas ahora es un arma clave** en la lucha por perpetuar una ideología fracasada.

Todos estos hallazgos revelan una mentalidad profunda e irracionalmente arraigada en contra el sector público. La implementación de recortes del gasto salarial en el sector público es tanto brusca como desorientada. Además, revela un sesgo contra el sector público y se conecta con políticas anti trabajadores más amplias y ataques contra los sindicatos laborales. Estas medidas perjudican el respeto de los derechos humanos y el logro de los ODS y obstaculizan la acción climática.

Sin embargo, los movimientos orientados a frenar la austeridad están cobrando fuerza. Una reinversión radical del sector público y sus trabajadores es clave para dar respuesta a las diversas crisis del Covid-19, el clima y las desigualdades. **Es hora de reconocer y actuar en ciclos positivos de inversión en servicios públicos para crear economías y sociedades que cuiden de las personas y al planeta. Es hora de que el FMI y los ministerios de finanzas rechacen la austeridad y den prioridad al sector público.**

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.1 EL CULTO DE LA AUSTERIDAD

‘Austeridad’, ‘ajuste estructural’, ‘disciplina económica’, ‘marcos fiscales de medio-largo plazo’, ‘restricción financiera’ y ‘consolidación fiscal’. En los últimos cincuenta años se pudieron haber cambiado las palabras, pero el significado sigue siendo el mismo: recortes de presupuesto en el sector público. Ya sea una imposición externa del FMI o proveniente de los Ministerios de Finanzas, que han internalizado la ideología neoliberal², la política de austeridad que afecta más profundamente los servicios públicos es la imposición de restricciones al gasto salarial en el sector público. Es decir, imponer un límite global al gasto del gobierno en sus empleados.

Esta política viene disfrazada en diversas justificaciones, pero produce dos claras consecuencias:

- bloquea la contratación de nuevos maestros, enfermeros y otro tipo de personal, incluso donde existen déficits importantes; y
- impone límites estrictos a los ya bajos salarios, principalmente en salud, educación y otros trabajadores del sector público que afectan la contratación y la retención del personal calificado necesario para ofrecer servicios públicos de calidad.

La principal justificación para imponer medidas de austeridad es estabilizar o disminuir los niveles de deuda, prevenir impagos y asegurar que los países sigan honrando sus actuales compromisos de deuda, lo cual les permitirá acceder a préstamos en el futuro (ver Cuadro 19). El FMI considera fundamental mantener la inflación en un solo dígito bajo a fin de lograr esos objetivos³. Existen muchas medidas relacionadas que son ampliamente reconocidas como parte de un paquete estándar de austeridad, el cual incluye reformas del régimen de pensiones y seguridad social, reformas de flexibilización laboral, reducción o eliminación de subsidios, ‘racionalización’ y/u objetivos de protección social o redes de protección, fortalecimiento de asociaciones públicas-privadas (PPP)⁴ y privatización de bienes públicos o empresas estatales⁵. No obstante, una de las piedras angulares que sustentan y conectan todas esas medidas es la imposición de recortes y congelamientos del gasto salarial en el sector público.

Los efectos de esta política de austeridad son claros. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo existe un déficit de 5,9 millones de enfermeros⁶ y casi 90% de ese déficit se observa en países de ingresos bajos y medios⁷. Y para superar ese déficit se requiere hacer frente al problema de los bajos salarios de los profesionales de la enfermería, de los cuales 90% son mujeres⁸. Por otro lado, la UNESCO calcula que se necesitan otros 69 millones de maestros en los próximos diez años para lograr el objetivo de brindar acceso universal a educación primaria y secundaria para 2030⁹.

Cuando no se alcanzan los objetivos claves en educación y salud, las mujeres y niñas sufren tres veces más profundamente el impacto¹⁰, puesto que estas tienen más probabilidades de ser excluidas del acceso a servicios básicos, de perder oportunidades de obtener un trabajo digno en el sector público y de asumir una carga desproporcionada de cuidado y trabajo doméstico no remunerado que aumenta cuando los servicios públicos fallan¹¹. En muchos casos, esto ocurre en el marco de retrocesos mayores en los derechos humanos de las mujeres¹² y el incremento de las desigualdades. Por otro lado, las crecientes ganancias que pudieran financiar los servicios públicos desaparecen debido a sistemas fiscales débiles, vacíos legales, elusión y evasión¹³, lo cual permite que la riqueza se concentre en manos de empresas multinacionales y mil millonarios¹⁴.



Cuando los servicios de salud fallan, las mujeres están en triple desventaja.
FOTO: FLICKR

Nuestra investigación global exhaustiva realizada en quince países muestra que **la aplicación de restricciones a los salarios del sector público es tanto brusca como ineficaz y a menudo perjudica a los sectores que los gobiernos y el FMI dicen querer proteger**. El estudio también muestra que, a la luz de las crisis interrelacionadas, **urge un replanteamiento radical que ponga a los trabajadores de primera línea del sector público en el centro de la recuperación tras la pandemia del Covid-19 y dé las respuestas transformadoras necesarias para revertir la crisis climática**. Luego de cuarenta años de contracción y reducción, la gente está rechazando el culto de la austeridad¹⁵ y reinventando el rol del sector público para alcanzar un futuro más amable, feminista, verde y justo¹⁶.

TESTIMONIOS DE PRIMERA LÍNEA EN NIGERIA

Todos los nombres de las personas cuyos testimonios fueron recabados por Public Services International (PSI) han sido cambiados:



Abigail es madre de dos niños y una de las dos parteras que trabajan en un centro integral de salud en Nigeria. Esta trabajadora explica lo que implican los recortes para las condiciones caóticas del centro: *“De acuerdo con los estándares de la OMS, una enfermera debe atender a cuatro pacientes, pero si entras, verás la multitud de mujeres en el área de cuidados prenatales, que hoy llegan a 150. Y solo estamos dos enfermeras de guardia”*. Para Abigail, el hecho de recibir tan poco dinero a fin de mes empeora la situación: *“No podemos pagar la escuela de nuestros hijos, hemos tenido que retirar a algunos. Por eso, incluso si las cosas mejoran, tal como creemos y esperamos, ellos ya no se reincorporarán”*.



Folake es una enfermera de otro centro de salud integral en Nigeria. Ella está molesta por los efectos devastadores de los recortes presupuestarios en los trabajadores sanitarios: *‘Honestamente, esto nos ha afectado, hay mucho síndrome de agotamiento, tensión y presión entre nosotros debido a que durante la última década se ha mantenido trabajando la misma plantilla, no se ha contratado a nuevo personal’*. Folake lamenta que no se emplee a los nuevos graduados para aliviar la carga de quienes están envejeciendo y cuya productividad se reduce día a día en el sistema. Un colega, a quien se le pidió que enviara un mensaje al FMI, dijo lo siguiente: *“Caramba, el FMI está recortando costos; en lugar de crear un impacto positivo, está creando uno negativo. Lo que sea que organizaciones como el FMI estén aplicando, no está conduciendo hacia el desarrollo”*.

FOTOS: FLICKR

1.2 RETÓRICA CAMBIANTE VERSUS PRÁCTICA INMUTABLE

Hace más de 15 años, ActionAid ha venido documentando el impacto de los topes al gasto salarial en el sector público impuestos por el FMI como condición categórica para extender préstamos a países de bajos ingresos y mostrando cómo estos obstaculizan el progreso en educación¹⁷ y la lucha contra el VIH-SIDA¹⁸. Luego de tres años de investigación consistente y activismo de ActionAid y otras organizaciones¹⁹, el FMI dio marcha atrás y eliminó los topes al gasto salarial en el sector público como condición para el otorgamiento de préstamos en todo el mundo²⁰. La Junta Directiva del FMI para ese momento declaró que *‘admitimos la incidencia en declive de dichos topes en los programas financiados por el Fondo’* y esperamos prescindir de ellos totalmente; los usaremos solo *‘en casos excepcionales’* y prevemos *‘gastos de mayor escala en ayudas, particularmente en sectores prioritarios, como salud y educación’*²¹.

Este drástico cambio de política, que cuestiona uno de los pilares de la austeridad, ocurrió en un momento en que el FMI enfrentaba una crisis de influencia y legitimidad, justo antes de la crisis financiera de 2007-2008, la cual

dio nuevos aires a la institución y renovó su relevancia, finanzas y poder²². Desde entonces, el FMI ha retomado su confianza y olvidado su promesa de dejar de imponer restricciones al gasto salarial, que ahora vuelven a ser parte rutinaria de su asesoría coercitiva de políticas²³. El estudio realizado en abril de 2020 mostró que, durante los tres años previos, el FMI había recomendado a los gobiernos de 78% de los países (donde había datos disponibles) ya fuera recortar o congelar el gasto salarial en el sector público²⁴. Esta recomendación ascendió a casi 90% en octubre de 2020 al observar el impacto inicial del Covid-19²⁵.

Los préstamos de emergencia extendidos durante la pandemia del Covid-19 han fortalecido aún más el poder del FMI. A pesar de algunos cambios en la retórica de sus representantes, las reformas de políticas basadas en austeridad acordadas entre el FMI y algunos países, bien sea como condiciones o como asesoría coercitiva, siguen intactas²⁶. El reciente informe Global Austerity Alert sugiere que 154 países estaban aplicando políticas de austeridad en 2021, número que aumentó a 159 países en 2022²⁷. Los recortes del gasto salarial en el sector público destacan como una de las medidas de austeridad más extendidas, a pesar de sus resultados sociales negativos. Por su parte, el informe de Oxfam de agosto de 2021 titulado 'Adding Fuel to Fire' arrojó que 85% de los préstamos del FMI relacionados con la pandemia del Covid y otorgados entre marzo de 2020 y marzo de 2021 estipulan expectativas de un rápido retorno a la austeridad, incluyendo 'recortes y congelamientos del gasto salarial (31 países), incrementos o incorporación del impuesto al valor agregado (IVA) (14 países) y recortes generales de gastos públicos (55 países)'²⁸.

El nivel de austeridad estipulado en los préstamos extendidos por el FMI y relacionados con el Covid hace caso omiso de los hallazgos claves de la propia unidad de investigación interna del FMI. En 2016, esta unidad encontró que los beneficios de la austeridad habían sido "sobrestimados" y que la austeridad en realidad es contraproducente, prolonga las recesiones económicas y perjudica la productividad futura y el crecimiento del PIB²⁹. La Junta Directiva y los Economistas Principales del FMI deberían verse obligados a explicar por qué las nuevas condiciones de los préstamos contravienen directamente los hallazgos de su propia unidad de investigación interna (y muchos otros estudios económicos). Si la Junta considera que su propia investigación carece de errores, entonces debe explicar por qué sigue imponiendo políticas de austeridad en la actualidad.

Lamentablemente, la pandemia del Covid-19 ha exacerbado la crisis de la deuda que ya enfrentaban muchos países y que los hacen aún más dependientes del apoyo del FMI³⁰. Esta situación no hace sino reforzar las dinámicas de poder neocoloniales³¹: aunque las perspectivas del FMI pueden afectar significativamente los pronósticos económicos de un país, incluso los 'consejos' del FMI conllevan una carga coercitiva³². Sin embargo, no hace falta un gran esfuerzo para convencer a algunos Ministerios de Finanzas de países con ingresos bajos y medios, puesto que ya han comprado el culto de la austeridad y creen firmemente que no existen más alternativas. Otros ministerios luchan por conseguir apoyo para aplicar otras alternativas o simplemente han aceptado las limitaciones impuestas por el actual orden internacional. Muchos comparten la visión según la cual el Estado debe 'desplegarse para servir a los mercados mediante instituciones, normativas y leyes que protegen y facilitan las necesidades del sector privado a costa del sector público³³. De hecho, existen preocupaciones genuinas sobre las llamadas 'puertas giratorias' entre los ministerios nacionales y las instituciones financieras internacionales³⁴. Esto produce una convergencia de mentalidades que puede ser particularmente tóxica en la era post Covid y conducir a una austeridad más rigurosa y extrema que aquella aplicada a la generación precedente, lo cual obstaculizará aún más una recuperación justa y el financiamiento disponible para los servicios públicos.

Al aceptar un rápido retorno a la austeridad³⁵, con presupuestos públicos fuertemente restringidos y condicionantes salariales del sector público, los países de ingresos bajos y medios están haciendo lo opuesto a lo que hacen los países de ingresos altos en respuesta a la pandemia del Covid-19: disminuir el gasto público y el soporte estatal³⁶. En efecto, al rechazar la vuelta a la austeridad, los países de ingresos bajos y medios van contra las recomendaciones actuales de parte del liderazgo del FMI. En abril de 2021, el Director Ejecutivo del FMI exhortó a los gobiernos a 'gastar tanto como puedan'³⁷ y su Monitor Fiscal indicó que 'Los Gobiernos también deben adoptar políticas integrales, incluidas en un marco de mediano plazo, para combatir las desigualdades, especialmente en materia de acceso a servicios públicos básicos, que se exacerbaban con la pandemia del COVID-19'. Y añadieron que es necesario: 'invertir en educación, salud y desarrollo de la infancia y fortalecimiento de las redes de seguridad social financiadas mediante la mejora de la capacidad de recaudación fiscal y una mayor progresividad'.

El primer año de la pandemia de hecho produjo algún incremento del gasto en el Sur del planeta en 2020, pero solo durante un periodo muy limitado y la mayoría de esos fondos fueron destinados a grandes corporaciones (63%) o a pequeñas y medianas empresas (13%). Menos de un cuarto se gastó en protección social (23%) y casi nada en servicios públicos o los salarios del sector público³⁸. Sin embargo, algunas personas han visto estas declaraciones como una señal de alarma de que el FMI buscará implementar gasto expansivo y tributos progresivos, con el

argumento de que asistimos a la muerte de la austeridad y del Consenso de Washington³⁹. Mientras, otros siguen escépticos⁴⁰ y más de 500 organizaciones se movilizaron en 2020 para condenar lo que consideraron como un inminente y rápido retorno a la austeridad⁴¹. Entonces, ¿cómo interpretamos todo esto?

Lamentablemente, existe una creciente brecha (en verdad, un abismo) entre lo que dice el FMI desde Washington (generalmente dirigido a economías avanzadas)⁴² y lo que hace en la práctica a nivel nacional (especialmente en el Sur del planeta). Esta brecha se cierra por la capacidad de algunos países ricos de aplicar por sí mismos una política (incremento del gasto nacional facilitado por préstamos con bajas tasas de interés), mientras usan su poder desproporcionado en el FMI (con base en un arreglo geopolítico neocolonial tras la segunda guerra mundial)⁴³ para apoyar que se haga todo lo contrario en países de bajos ingresos, a los cuales se les señala que 'carecen de margen de maniobra fiscal'. Esta profunda disonancia podría tener consecuencias devastadoras en los próximos tres años, como imponer una década de declive⁴⁴, bloquear el progreso del cumplimiento de derechos humanos y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), impedir acciones para frenar el cambio climático y perpetuar el retroceso en los derechos de las mujeres.

Los Ministerios de Finanzas del Sur del planeta enfrentan retos importantes, en particular con respecto a cargas de deuda, pero deben recordar que siempre hay alternativas (ver Cuadro 1). Las oportunidades de adoptar otras alternativas aumentan cuando los países se unen, tal como deben hacerlo en este momento decisivo, para exigir cambios más amplios en el orden económico internacional.

Las instituciones financieras internacionales no han respondido adecuadamente a la crisis actual. El alcance y la duración de la suspensión de deuda han sido muy limitados (ver Cuadro 2), las reformas fiscales corporativas solo han beneficiado a los países más ricos (ver Cuadro 3) y otras intervenciones como la emisión de Derechos Especiales de Giro solo serán un paño de agua tibia, salvo que se asuma un compromiso firme de reasignación y redistribución⁴⁵. Existe la urgente necesidad de cancelar deudas no realistas, de crear un mecanismo de trabajo para deuda soberana y de reformar los tributos en todo el mundo para beneficiar realmente a los países del Sur, tal como lo han confirmado los Pandora Papers filtrados a la prensa. Esto solo ocurrirá cuando haya suficiente presión pública en cada país y cuando los Ministerios de Finanzas reevalúen sus prioridades y trabajen juntos por encontrar soluciones.

CUADRO 1: EXISTEN ALTERNATIVAS: OCHO OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA INCREMENTAR EL GASTO SALARIAL EN EL SECTOR PÚBLICO

Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNICEF y ONU Mujer muestra que los recortes de austeridad del gasto salarial en el sector público no son necesarios⁴⁶. Todos los gobiernos, incluso en los países más pobres, tienen diversas opciones de financiamiento. Esas opciones, respaldadas por declaraciones de política de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales, incluyen:

1. **Incremento de ingresos fiscales** (por ej., impuestos progresivos a ingresos personales y corporativos, incluyendo del sector financiero que no paga tributos en muchos países);
2. **Eliminación de flujos financieros ilícitos** (por ej., lavado de capitales, evasión fiscal, precios erróneos del comercio);
3. **Préstamo o reestructuración de deuda existente** (hay más de 60 casos exitosos en los últimos años);
4. **Reasignación del gasto público** (por ej., gastos militares o de defensa);
5. **Expansión de la cobertura de seguridad social** y oferta de trabajadores en el sector informal con buenos contratos;
6. **Búsqueda de ayuda y transferencias** para países de bajos ingresos;
7. **Uso de reservas fiscales y extranjeras** acumuladas en exceso en Bancos Centrales; y
8. **Adopción de un marco macroeconómico más acomodaticio.**

Una combinación adecuada de políticas permitiría aumentar el gasto salarial y las inversiones públicas para impulsar el empleo, mejorar los estándares de vida y reducir las desigualdades. Las decisiones sobre gastos son muy importantes como para que se tomen a puertas cerradas en los Ministerios de Finanzas: el diálogo social público nacional con el gobierno, los sindicatos, las organizaciones representativas de la sociedad civil y otros actores relevantes es la forma más eficaz de encontrar soluciones óptimas para aumentar el gasto salarial en el sector público.

CUADRO 2: ENFRENTAR LA CRISIS DE LA DEUDA

Priorizar los derechos de los acreedores frente a la salud y el bienestar de las personas limita significativamente el margen de maniobra fiscal y las respuestas de políticas de economías en desarrollo y mercados emergentes altamente endeudados. Esto los obliga a seguir pagando deudas denominadas en moneda extranjera, todo en medio de una reducción crítica de los flujos de divisas extranjeras. Además, aleja a los capitales que deberían destinarse a dar respuesta a la emergencia de salud y economía, incluyendo el acceso a vacunas.

La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20 fue instaurada en respuesta a las crecientes vulnerabilidades de deuda y culminó en diciembre de 2021. Dicha iniciativa oxigenó por un breve periodo a un limitado grupo de países, pero sin duda se queda corto en relación con el esfuerzo requerido para satisfacer la actual gama de necesidades de los países del Sur. El Marco Común para el tratamiento de deuda no ha sido capaz de garantizar la participación del sector privado, ignora la necesidad de aliviar la deuda multilateral y deja de lado a la mayoría de los países de ingresos medios endeudados. Hasta ahora, el único resultado que exhibe el Marco Común es la disminución de la calificación de la deuda soberana por parte de las Agencias de Calificación de Crédito a aquellos países que se atreven a solicitar una restructuración de la deuda con la participación del sector privado.

La comunidad internacional debe reconocer que la salud y el bienestar de millones de personas en países en desarrollo es una condición previa para lograr la sostenibilidad de la deuda. Es urgente adoptar un enfoque sistémico para resolver la crisis actual de la deuda, el cual debe incluir medidas para establecer un marco permanente multilateral de resolución de deuda soberana bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Lamentablemente, ni la Iniciativa ni el Marco Común logran ofrecer la resolución justa, oportuna, integral, transparente y duradera a la deuda que necesitan los países del Sur⁴⁷.

CUADRO 3: EL ACUERDO FISCAL DEL G7

Hoy existe una clara intención de aplicar impuestos corporativos, lo cual se evidencia con el acuerdo del G7 de junio de 2021 de establecer una tasa mínima fiscal corporativa mundial de 15%⁴⁸. Sin embargo, el diseño del esquema presenta fallas⁴⁹, pues aumentará los ingresos fiscales recaudados en los países del G7, pero no reportará ningún beneficio a los países en desarrollo. Es necesario que cada país acuerde y reporte una fórmula para distribuir las ganancias globales de forma equitativa, y lamentablemente la tasa establecida es muy baja (se solicitó ampliamente una tasa de 25%). Asegurar que los países en desarrollo reciban una parte justa de las ganancias de las grandes corporaciones es fundamental para que estos expandan el gasto en servicios públicos, y esto puede requerir acciones unilaterales hasta que se logre un trato global justo⁵⁰. No obstante, el trato del G7 constituye una señal de que la corriente de la historia finalmente está rechazando los paraísos fiscales y que las reformas fiscales extremas que enfrentan al poder corporativo están de nuevo en la agenda global. Y ahora que los Pandora Papers han puesto el foco en muchos negocios y políticos globales, habrá mucha más presión.

1.3 JUSTIFICACIONES Y ALTERNATIVAS

Aunque las dinámicas de poder neocolonial entre países siguen siendo una fuerza subyacente, a menudo se justifica la austeridad mediante la narrativa según la cual los países de ingresos bajos y medios tienen un ‘margen de maniobra fiscal limitado’.

No puedes gastar lo que no tienes ni pedir préstamos.

Debes equilibrar tus cuentas.

No puedes mantener un déficit.

El dinero no crece en los árboles

Estas simples afirmaciones se contradicen parcialmente por el hecho de que Estados Unidos tiene el mayor déficit del mundo⁵¹; de hecho, se encontró que vastas sumas fueron destinadas a rescatar a los bancos durante la crisis financiera⁵² y fondos inimaginables han sido movilizados para dar respuestas sociales y económicas integrales frente a la pandemia del Covid-19 en países ricos, muchos de los cuales imponían austeridad en el pasado⁵³. Quizás estas afirmaciones pueden cuestionarse más acertadamente por el hecho de que siempre *hay* opciones:

- Opciones sobre qué recortar. ¿Soldados o enfermeros?, ¿los altos salarios de ministros en la capital o los bajos salarios de los maestros locales?, ¿incentivos fiscales perjudiciales a corporaciones o a programas de protección social?, ¿subsidios a combustibles fósiles o alimentación escolar gratuita?
- Opciones entre recortar gastos o aumentar nuevos ingresos y sobre cómo se obtienen los ingresos: ¿mediante reformas fiscales progresivas que trasladarían la carga a los ricos o impuestos regresivos que exacerban la desigualdad⁵⁴?

El FMI estima que la mayoría de los países de ingresos bajos y medios pudieran aumentar sus relaciones impuestos-PIB⁵⁵ en cinco puntos porcentuales en la próxima década⁵⁶. Y alcanzar dicho crecimiento en ingresos fiscales permitiría a la mayoría de los países duplicar su gasto en salud y educación, y en algunos casos duplicar su gasto en agua y saneamiento y protección social⁵⁷. Esto puede y debe lograrse por medio de reformas fiscales que trasladen la carga a aquellos con mayor capacidad de pago (ver Cuadro 4)⁵⁸.

Los Ministerios de Finanzas enfrentan una decisión fundamental: imponer austeridad o aumentar el margen de maniobra fiscal mediante reformas de impuestos progresivas y otras medidas (ver Cuadro 1) (o un poco de ambas opciones). La mayoría de la gente ciertamente querría elegir una opción diferente a la ortodoxia neoliberal (lo que se evidencia por el apoyo popular al incremento del salario de los enfermeros⁵⁹, pero que normalmente es rechazado por la mayoría de los gobiernos). Las medidas nacionales sobre reformas fiscales deben complementarse con acciones globales; por ejemplo, recuperar el estimado de US\$427 mil millones perdidos cada año como consecuencia de la evasión fiscal, que cuesta a los países el equivalente a los salarios anuales de cerca de 34 millones de enfermeros⁶⁰.

La medida económica predominante – crecimiento del PIB – también contribuye a restar importancia al rol crucial de las inversiones de largo plazo en el sector público para impulsar el desarrollo. Desde la década de 1940, cuando se propuso por primera vez el crecimiento del PIB, la medida ha sido criticada por invisibilizar el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados de las mujeres⁶¹, y más recientemente por ignorar las restricciones de los recursos naturales y el planeta. Sin embargo, este indicador inadecuado aún dirige gran parte de la política económica.

CUADRO 4: REFORMAS FISCALES PROGRESIVAS

Se considera que los impuestos son progresivos si la mayor carga recae en los ricos, y regresivos si los pobres pagan una mayor parte de sus ingresos, o si los adinerados se las arreglan para evadir los impuestos que deben pagar, tal como lo subrayan los Pandora Papers filtrados a la prensa. Algunos impuestos tienen mayor probabilidad de ser regresivos (impuestos indirectos, como impuestos al consumo (IVA) y algunos más progresivos (impuestos directos, como impuestos a la herencia, impuesto sobre la renta personal, impuestos a las ganancias de capital e impuesto a los ingresos corporativos), pero es posible transformar cualquier impuesto en progresivo mediante un cuidadoso plan. ActionAid ha elaborado una serie de 12 instructivos sobre cómo hacer más progresivos y sensibles al género diferentes impuestos. Esos impuestos incluyen IVA, impuestos al consumo, al sector informal, a la propiedad, al comercio, al patrimonio, a las ganancias de capital, a las rentas personales y a los ingresos corporativos, digitales y a las emisiones de carbono⁶².

También existe un creciente número de obras sobre impuestos sensibles al género y la importancia de usar un marco feminista al diseñar sistemas fiscales⁶³. La capacidad de los países de ingresos bajos y medios de promulgar reformas fiscales progresivas y sensibles al género se ve, sin embargo, parcialmente restringida cuando las normas globales son establecidas por el club de las naciones ricas de la OCDE. En tal sentido, existe una presión creciente por crear un ente fiscal de la ONU representativo y empoderado⁶⁴.

Los cronogramas parecen ser un factor clave al momento de elegir la austeridad o aumentar los impuestos progresivos y las inversiones financiadas por el sector público. **La mayoría de los Ministerios de Finanzas son presas del pensamiento cortoplacista, en parte debido a la influencia del FMI** y su apego a los marcos de gastos de medio plazo⁶⁵, los cuales predominan en periodos de tres a cinco años (que, en realidad, son una mejora de los cronogramas previos, con periodos aún más cortos). Esto coincide con ciclos políticos de corto plazo, en que los políticos desean obtener victorias rápidas que les ayuden a asegurar su reelección, en lugar de realizar inversiones cuyos resultados tardarán años en manifestarse.

En el marco de este cronograma, la mayoría del gasto público recurrente es visto como un problema, algo que debe limitarse, puesto que rinde relativamente pocos retornos inmediatos sobre la inversión. El caso de la educación es el ejemplo más evidente, donde el gasto en maestros parece un costo enorme (hasta 30% de la fuerza laboral total del sector público⁶⁶) y que, para las medidas estándar, casi no genera beneficios para el desarrollo o retornos económicos en un periodo de cinco años⁶⁷. Por el contrario, si se toma en cuenta un periodo de diez a quince años (cuando los niños completan el ciclo escolar), el gasto en educación es una de las inversiones más sólidas que un país puede hacer para obtener resultados positivos para el desarrollo y el crecimiento económico⁶⁸. La mentalidad económica predominante en la actualidad no permite a los gobiernos, y en especial a los Ministerios de Finanzas, factorizar estos beneficios de largo plazo o incluso el valor inherente y la obligación legal de cumplir con el respeto de los derechos humanos. Así, en los más estrictos términos económicos, el gasto en educación es considerado como arar en el mar. Y gastar en los trabajadores de primera línea del sector público también es visto de forma similar: contratar y capacitar a cualquier profesional del servicio público toma tiempo y los beneficios no brindan un retorno inmediato que pueda calcularse fácilmente. Si echamos un vistazo solo a los costos recurrentes, sin tener en cuenta los beneficios, la expansión de la inversión en los trabajadores del sector público es difícil de justificar para los Ministerios de Finanzas y para los políticos que desean resultados inmediatos y victorias rápidas. Esta visión de corto plazo fomenta las inversiones de capital puntuales, como proyectos de infraestructura, los cuales muestran a menudo resultados más simples y visibles.

Es importante destacar que, si bien el FMI ha incluido normalmente Marcos de Gastos de Medio Plazo en su trabajo por décadas, es ahora que está mirando la otra cara de la moneda. Sin embargo, **las Estrategias de Ingresos de Medio Plazo** aún están en fase experimental y no se usan ampliamente⁶⁹. Si el objetivo es equilibrar las cuentas, la mayoría debería entonces asumir que hay que mirar de forma equitativa el ingreso disponible (y la forma de recaudarlo) y el gasto que debe hacerse. Si el ingreso es visto como un monto dado o un monto fijo (en lugar de evaluarlo adecuadamente para identificar quién paga qué y a quién beneficia⁷⁰), el alcance de incrementar el gasto siempre será limitado. Una vez más, es cierto que se perciben señales de que el FMI está tratando de cambiar, pero el nuevo enfoque solo se ha probado en un puñado de países y la participación en el proceso ha sido limitada.

Más allá de argumentos generales sobre el ‘margen de maniobra fiscal’, el FMI y los Ministerios de Finanzas a veces esgrimen otros argumentos para imponer congelamientos o recortes del gasto salarial en el sector público. Por ejemplo, un argumento muy común es que es necesario ‘recortar la burocracia’, ‘reducir costos de gobernanza’ o ‘impulsar una reforma del servicio público’. Todo ello se añade a la falsa narrativa según la cual el gasto salarial en el sector público se usa para pagar la ‘burocracia’ de las oficinas⁷¹, cuando la realidad es que en casi todos los países se usa para pagar principalmente a los trabajadores de primera línea de salud, educación y otros servicios públicos.

TESTIMONIO DE PRIMERA LÍNEA EN NEPAL

Tulsi Neupane: *soy profesor de inglés y director de la Escuela Lalit Bikas Adharvud. Además, soy miembro de la Asociación de Profesores de Nepal. Nuestros salarios se han estancado en los últimos cuatro años. Tras el COVID, conocí a muchos maestros de escuelas públicas que no recibieron sus salarios y/o perdieron sus empleos. Pienso que es una pérdida para el sistema educativo, puesto que muchos maestros experimentados quizá no vuelvan más, por lo que deberemos contratar maestros sin experiencia ni capacitación.*

Testimonio recabado por Education International

CUADRO 5: EL COMPROMISO DE ACTIONAID CON UN FUTURO FEMINISTA, JUSTO Y VERDE

ActionAid está comprometido con poner el cuidado en el centro de la economía, la sociedad y la política. Reconocemos que el cuidado y el bienestar son cruciales para mantener sociedades y economías, así como el medio ambiente, y que es necesario que se valore y redistribuya. **La economía del cuidado revalorará el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, organizará una redistribución justa del trabajo entre países, géneros y generaciones y ofrecerá trabajos dignos y 'verdes' para todos en la era digital.** En esencia, el cuidado incluye velar por el medio ambiente y los ecosistemas, los cuales dependen más frecuentemente de las mujeres y los pueblos indígenas quienes, en muchos casos, son sus guardianes fundamentales. Esto los convierte en antagonistas directos de la economía capitalista y los pone a la vanguardia de la lucha contra la crisis climática y humanitaria.

La economía del cuidado será una alternativa frente la economía neocolonial, dependiente de los combustibles fósiles, extractivista, con grandes emisiones de carbono y plagada de crisis humanitarias.

Esta economía del cuidado permite transformaciones profundas en nuestra alimentación, energía y sistema económico que cortan radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, promueven la agroecología y aseguran la soberanía alimentaria, el acceso a la energía y los medios de vida resilientes. Poner el cuidado en el centro de nuestra economía, política y sociedad también implicaría la restitución del contrato social entre instituciones internacionales, Estados y pueblos, seguida de una escalada monumental de la inversión en servicios públicos, incluyendo salud, educación, cuidado infantil y geriátrico, alimentación, transporte, sanidad, servicios de atención para víctimas de violencia basada en género, vivienda y espacios públicos verdes y seguros.

A escala internacional, una transición feminista, justa y verde, con una visión descolonial, **transformaría las normas de gobernanza global, los sistemas y las instituciones para así restaurar el equilibrio en las desiguales relaciones de poder históricas y vigentes entre el Norte y el Sur del planeta.** Una transición feminista, justa y verde también fortalecerá el Estado para proteger no solo a sus ciudadanos, sino también a todos los migrantes, personas desplazadas internamente y refugiados, con lo cual se reavivará la noción de bienes públicos y servicios públicos de calidad. Es necesario reevaluar el rol central del Estado como un redistribuidor⁷².



Una segunda línea argumental de justificación es que existe una necesidad urgente de ‘reducir las ineficiencias y la corrupción’; por ejemplo, eliminar ‘trabajadores fantasmas’. Transparency International señala tres tipos básicos de corrupción⁷³:

1. Servidores públicos corruptos que solicitan o roban dinero: esto debe tomarse en serio, pero no queda claro cómo los recortes generales de salarios ayudarían a solventar esta situación (y, de hecho, eso podría empeorar las cosas, tal como lo advirtió el Banco Mundial⁷⁴).
2. Políticos o funcionarios que malversan fondos públicos otorgando puestos de la administración pública o contratos a sus padrinos, amigos o familiares. Este es justamente el origen de la mayoría de los trabajadores fantasmas, pues el clientelismo se usa para incluir personas en la nómina gubernamental o permitirles recibir los salarios de trabajadores fallecidos o que nunca existieron. Y aunque el problema fueran los políticos o los funcionarios, el daño a la reputación de las profesiones ya está hecho, como si los maestros y enfermeros fueran responsables de los fantasmas en el sector público. Sin embargo, contraer el gasto salarial general no es una forma eficaz y objetiva de atender ese problema. Después de 30 años de esfuerzo continuo, el FMI y el Banco Mundial parecen cazafantasmas fracasados, puesto que en sus reportes siguen apareciendo espectros, a pesar de que su reputación sigue intacta.
3. Menor atención a corporaciones que sobornan a funcionarios para obtener tratos lucrativos, lo cual puede expandirse aún más dado el apoyo del FMI y el Banco Mundial a la privatización y las Asociaciones Públicas-Privadas (PPP) (ver sección 5.3)⁷⁵. A veces las corporaciones usan su dinero y acceden al poder para ir más allá del otorgamiento de contratos específicos e influir más ampliamente en las políticas que defiendan sus intereses, los cuales frecuentemente atentan contra el interés público. Las corporaciones poderosas tienen un interés siempre presente en reclamar fondos públicos y reducir el poder del sector público.

Las acusaciones sobre gasto ineficiente de un país en servicios públicos a veces son respaldadas por los datos del Banco Mundial, los cuales muestran mayores gastos que sus pares en un sector sin alcanzar los mismos resultados. Esto puede obedecer a razones complejas, cuyas evidencias a menudo se cuestionan, pero **en cualquier caso no queda claro cómo recortar o congelar el gasto salarial en el sector público ayudará a superar las ineficiencias identificadas, cuando de hecho se ha afirmado que podrían empeorarlas**. Por ejemplo, si un país hace inversiones relativamente altas en educación y sus resultados de aprendizaje son relativamente pobres, la respuesta pudiera ser invertir en mejores capacitaciones para maestros o en un rango más amplio de otras intervenciones. Reducir el número de maestros o sus salarios muy probablemente no ayude en nada. Esto subraya la necesidad de realizar evaluaciones de impacto antes de proceder a recortes del gasto salarial como parte de una reforma de política, pero esto rara vez ocurre.

1.4 LO BUENO, LO MALO Y EL FUTURO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO

A veces los Ministerios de Finanzas o el FMI prometen proteger a los trabajadores de la salud y la educación del impacto de recortes o congelamientos, incluso prometen hacer excepciones para proteger grupos específicos como maestros de primaria o enfermeros de primera línea. No obstante, nuestra investigación revela que eso no es fácil. **Las restricciones del gasto salarial general son difíciles de aplicar cuando se intenta hacer excepciones con los grupos más grandes, que en general son maestros y enfermeros⁷⁶**. Si estos ‘buenos’ trabajadores (que constituyen entre un tercio y la mitad de todos los trabajadores del sector público) deben ser protegidos, entonces los recortes deben ser más profundos en otros sectores ‘menos esenciales’ (¿‘malos’?).

Pero, **¿cuáles son exactamente esos trabajadores ‘no esenciales’ del sector público?**⁷⁷ Además de los obvios ‘fantasmas’ malos que asechan los informes del FMI, esto rara vez lo especifican los actores que claman recortes de austeridad. ¿Quizá los trabajadores del aseo son un desperdicio o hay que sofocar a los bomberos? ¿O tal vez los conductores del transporte público solo nos llevan a todos de paseo? ¿Acaso hay que retirar las muletas de apoyo a las personas con discapacidad y enseñar a los niños de los jardines a cuidar de sí mismos? En todos los niveles de gobierno, los servicios ya disminuidos que brindan apoyo a discapacitados, mujeres vulnerables, niños, agricultores y muchos otros grupos están en la línea de mira.

En la práctica, hay mucha **interdependencia entre los diferentes servicios públicos**. Los recortes en un área afectan los servicios en otra. La atención sanitaria sufre cuando se limita el acceso al agua potable de las poblaciones. La educación sufre cuando no hay hogares de cuidado de infantes, educación y desarrollo. La violencia con base en género tiende a aumentar cuando no hay alumbrado público en las calles, cuando el transporte público está abarrotado⁷⁸ y cuando los bajos salarios disparan la dependencia económica.

Las fallas en un servicio aumentan la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados de las mujeres e impiden su acceso a otros servicios y su capacidad de participar en la vida pública. Las protecciones selectivas no son una solución sostenible y es tiempo de redefinir más holísticamente el valor de los trabajadores del sector público.

El Covid-19 ha revelado, más claramente que nunca, nuestra dependencia de los trabajadores esenciales.

Muchos son empleados del sector público con bajos salarios, que siguen trabajando incluso en momentos de alto riesgo para su salud. En muchos países, la pandemia desató un mayor aprecio por la 'ética del sector público': el compromiso de servir a otros en lugar de solo velar por el bienestar personal. No pudo haber mejor ocasión para reevaluar la contribución de los trabajadores del sector público y replantear radicalmente una ideología que ha mermado a sus miembros, sus salarios y sus condiciones por casi 50 años, mientras permite la acumulación de vastas riquezas en pocas manos.

La crisis climática ejerce mayor presión por lograr una reinversión radical del sector público y así ayudar a llevar una transición justa que vele por la gente y el planeta. La resiliencia climática se debilita cuando la mayoría de las mujeres a cargo de pequeñas granjas no pueden acceder a servicios de extensión relevantes o cuando los servicios eléctricos son privatizados, lo cual disminuye potencialmente la capacidad de acción de los gobiernos para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Si queremos crear Estados resilientes, capaces de adaptarse radicalmente al clima cambiante, se requerirán una fuerte intervención gubernamental y acción pública. Y la gente resiliente capaz de adaptarse a los cambios requerirá acceso a servicios públicos con perspectiva de género y protección social universal. Los sistemas educativos deben transformarse si pensamos que cada generación tendrá a su cargo el desarrollo del conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para vivir de forma sostenible. Los Estados deberán adelantar acciones ambiciosas para pasar de un paradigma de desarrollo en declive y basado en la extracción de combustibles fósiles a una economía sostenible con emisiones bajas, o cero, de carbono. Esto requerirá además inversiones estratégicas y marcos regulatorios eficaces que 'minimicen los Estados' con un sector público débil que carezca de los medios para obtener resultados.

¿Los Ministerios de Finanzas y el FMI están listos para la **reevaluación fundamental de las políticas fiscales y los trabajadores del sector público** que ahora se necesitan? ¿O el pueblo tendrá que exigir dicha transformación? En las instituciones financieras internacionales y en la mayoría de los ministerios de finanzas reina una mentalidad muy arraigada que debe cambiarse, un dogma que debe dismantelarse⁷⁹, un sesgo inconsciente que considera al sector público como inherentemente ineficaz y al sector privado como eficaz. Esta es una mentalidad que normalmente ve a los empleados del sector público como un costo que debe reducirse, en lugar de como una inversión que debe apoyarse. El sesgo pinta a la inversión en los trabajadores como algo inútil, mientras que la inversión en infraestructura es venerada como la ruta segura hacia el desarrollo (este informe podría fácilmente haberse titulado 'la gente versus las cosas').

Las apuestas nunca han sido tan altas, porque una nueva era de la más austera austeridad se aplicará a 85% de la población mundial en el próximo año, a menos que cambiemos la mentalidad de los Ministerios de Finanzas⁸⁰. Estamos frente a una lucha contra el fundamentalismo fiscal y el culto de la austeridad⁸¹ que debe escalar urgentemente en cada país del planeta, con el fin de encontrar respuestas sostenibles a la crisis económica disparada por el Covid-19, la crisis climática y la crisis de desigualdad.

TESTIMONIO DE PRIMERA LÍNEA EN GHANA



Enfermera desempleada: *"...nuestro trabajo no es un trabajo fácil, es muy sacrificado y riesgoso. Por eso, hago un llamado al gobierno y a quien sea que esté involucrado o tenga algo que ver con nuestra carrera para que nos ayude. Especialmente en cuanto a contratación, lo más pronto posible, porque mucha gente pasa por muchas cosas antes de siquiera conseguir algo de comida... No puedes haber recibido capacitación y estar en casa. No puedes ejercer o practicar lo aprendido estando en casa... Así que llamamos a quien tenga conexión con esta situación para que realmente haga algo al respecto".*

Testimonios recabados por PSI

FOTOS: FLICKR

CUADRO 6: BRASIL Y EL CULTO DE LA AUSTERIDAD

Brasil ha progresado en su lucha contra la histórica desigualdad gracias, en parte, a los derechos sociales que fueron incorporados en la Constitución Federal de 1988, lo cual condujo a la adopción de una serie de políticas sociales: el programa Bolsa Familia, por ejemplo, redujo drásticamente la pobreza⁸²; la educación se tornó más equitativa y se tomaron medidas para asegurar mejores salarios⁸³ y reducir el desempleo.

Este progreso se vio frenado bruscamente desde el año 2015, dado que el Gobierno brasileño ha venido recortando el gasto público, erosionando los servicios públicos y desregulando el mercado laboral⁸⁴. En diciembre de 2016, la ‘Enmienda Constitucional 95’ entró en vigor con el apoyo del FMI. La enmienda promulga una norma de crecimiento real cero de 20 años -o ‘techo de gasto’- en los gastos primarios federales. Esta norma ya produjo una caída del gasto de 17% en educación y de 12% en salud. Por otro lado, la ley de reforma laboral de 2017 condujo a una precarización creciente de los trabajadores de los sectores público y privado y a un debilitamiento de los derechos laborales, las condiciones de trabajo y los salarios. Las reformas también abrieron la puerta a una mayor tercerización, a la contratación sin licitación pública y a contratos de empleo temporales con menos derechos, lo cual despejó la vía para una mayor privatización.

Los ataques al financiamiento de los trabajadores del sector público encuentran apoyo en una narrativa según la cual una fuerza laboral pública hinchada está sofocando al Estado, la cual actúa como un desagadero fiscal, conduce a una inflación excesiva general de salarios (debido a altos salarios en el sector público) y frena el crecimiento del empleo en el sector privado. Sin embargo, ese discurso se basa en falacias sin fundamento. Por ejemplo, solo 12,5% de los trabajadores brasileños pertenece al sector público, en comparación con 21% en los países de la OCDE. Los países miembros de la OCDE también gastan más del doble que Brasil en los trabajadores del sector público.

Asimismo, el crecimiento del servicio público en Brasil entre 1986 y 2017 no obedeció a un servicio civil abultado y “sobrepagado”, como se sugiere a menudo, sino a la expansión de servicios esenciales a nivel municipal. Cerca de 60% de los empleados públicos en Brasil participan en la prestación de servicios públicos claves, como salud y educación, a nivel municipal. Finalmente, el crecimiento de la plantilla pública se ha visto acompañado del crecimiento del empleo privado, lo cual desmiente el argumento de que el sector público estrangula el empleo en el sector privado.

El FMI es obviamente cómplice de la agenda del Gobierno y ha defendido activamente las medidas de austeridad y las restricciones del gasto salarial en Brasil (sin contar su apoyo al techo de gasto). El FMI ha exhortado al congelamiento de salarios y contrataciones y a la imposición de topes a los salarios en el sector público como parte de su asesoría general de recortar y congelar el gasto salarial del sector público en años recientes⁸⁵. En 2020, recomendó ‘eliminar requisitos mínimos para el gasto estatal en educación y salud’ como una medida prioritaria⁸⁶. En un artículo de 2018 orientado a “Reajustar el gasto salarial en el sector público de Brasil”, el FMI instó a la aplicación de reformas extendidas para reducir los salarios y los niveles de empleo público a largo plazo⁸⁷.

No es una crisis, es un proyecto: los efectos de las reformas estatales en la educación brasileña entre 2016 y 2021. Brazilian Campaign for the Right to Education www.campanha.org.br

2. NUESTRA METODOLOGÍA

ActionAid y sus pares fueron los primeros en cuestionar al FMI sobre su uso de los topes al gasto salarial en el sector público durante tres años (2005-2007) y alcanzaron lo que, para ese momento, se sintió como una victoria sin precedentes: el FMI dio marcha atrás⁸⁸. Nuestra investigación de 2019 y 2020 sobre el financiamiento de servicios públicos mostró que, si bien se habían eliminado las condiciones de préstamos que exigían topes al gasto salarial, el FMI seguía recomendando políticas coercitivas, por lo que las prácticas relacionadas con el gasto salarial de los países eran tan malas como siempre⁸⁹. Una vez más, las restricciones del gasto salarial en el sector público estaban enarbolándose como una bandera de austeridad. Así, durante el último año hemos investigado mucho más exhaustivamente lo que los gobiernos, Ministerios de Finanzas y el FMI han estado aplicando a los gastos salariales en el sector público, mediante lo siguiente:

- Apoyo a la investigación nacional detallada y al trabajo de defensa sobre tendencias del gasto salarial en el sector público en diez países: Ghana, Malawi, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Uganda, Zambia, Nepal, Vietnam y Brasil, incluyendo pesquisas primarias y secundarias, análisis con expertos y aliados y diálogo con ministerios gubernamentales.
- Revisión de 69 Artículos IV⁹⁰ y documentos de préstamo⁹¹ del FMI para 15 países en los últimos cinco años, observando todas las referencias y conexiones con el gasto salarial del sector público (los diez países anteriores más Liberia, Sudáfrica, Kenia, Mozambique y Bangladesh). Una nota metodológica más completa sobre esto está disponible [AQUÍ](#).
- Discusión de temas claves sobre el gasto salarial en el sector público con economistas senior del FMI para entender mejor cómo estos justifican y usan las restricciones del gasto salarial en el sector público⁹².
- Análisis de la amplia literatura disponible sobre el gasto salarial en el sector público y el porcentaje del PIB destinado al gasto salarial en diferentes contextos.
- Estudio de la política y documentos de investigación relevantes del FMI, documentos de la Junta Directiva y discursos, incluyendo sobre temas relacionados como Revisión de Supervisión Integral y lo que el FMI llama 'temas macro estructurales', a saber: género, desigualdad y cambio climático.
- Apoyo a Public Services International (*Nigeria, Ghana y Nepal*) y Education International (*Nepal, Senegal, Zambia y Malawi*) para recopilar documentación de los trabajadores de primera línea del sector público en sobre las implicaciones de las restricciones salariales para los empleados públicos con una carga excesiva de trabajo y una nómina reducida.
- Establecimiento de un diálogo continuo y de un proceso de aprendizaje con otras organizaciones que buscan cuestionar la austeridad y promover una reinversión del sector público con base en los derechos.

In the following sections we summarise our findings and analysis from across all this research.

TESTIMONIO DE PRIMERA LÍNEA EN GHANA

Siguiendo los consejos del FMI, más de 41.000 enfermeras, parteras y otros profesionales no pudieron ingresar a los centros de salud luego de completar su capacitación entre 2017 y 2018. Esto llevó a la creación de la Asociación de Enfermeras y Parteras Graduadas Desempleadas.



Perpetual Ofori-Ampofo (miembro activo): *"...no podemos tener un sistema educativo en que se forma a las personas en universidades y, una vez que culminan sus estudios, no consiguen empleo porque así lo dicta el FMI. En especial si se trata de la salud, esto no basta...debemos ampliar nuestra perspectiva. Si el mundo no ha aprendido nada de esta pandemia, debemos aprender y saber que cuando todos crecemos y nos desarrollamos, es cuando todos florecemos. Las enfermedades pueden viajar a cualquier parte, ya sea un virus ordinario, el Covid-19, el Ébola o cualquier otro, debido a la gente que se desplaza por todo el mundo. Las enfermedades y las infecciones también pueden llegar donde sea y por ello, cuando todos crecemos, cuando todos nos desarrollamos, es cuando podemos contar con sistemas capaces de proteger a la raza humana".*

FOTOS: FLICKR

3. MARGEN DE MANIOBRA FISCAL Y EL MITO DE LA 'TEMPORALIDAD'

3.1 ¿ESTAS MEDIDAS SON TEMPORALES?

De acuerdo con nuestras entrevistas con el FMI, la principal razón para contener el gasto salarial en el sector público es la necesidad de lograr la 'consolidación fiscal'. **Siempre nos dijeron que estas medidas eran temporales**⁹³. Además, afirmaron que las restricciones al gasto salarial ni siquiera estarían sobre la mesa si no existiera la necesidad de lograr la consolidación fiscal y que estas medidas eran de muy 'corto plazo'. Un recorte, o congelamiento, del gasto salarial NO se consideraría si ya se hubieran aplicado por unos años. De hecho, el más reciente artículo de política del FMI, titulado '*Issues when cutting government pay to help reshuffle spending in a crisis*' (FMI, abril de 2020) subraya la naturaleza de corto plazo de los recortes o congelamientos del gasto salarial en el sector público. El informe afirma además que siempre considerarían '*allanar el camino para revertirlos*'.

Nuestros hallazgos (ver Tabla 1) sugieren que la contención del gasto salarial en el sector público es cualquier cosa menos temporal, pues la asesoría de política del FMI a los Ministerios de Finanzas a menudo presiona por que se hagan reducciones persistentes año tras año. Nuestra revisión del Artículo IV y los documentos de préstamo (2016-2021) encontró que a los **15 países se les recomendó recortar y/o congelar el gasto salarial en el sector público por tres o más años consecutivos, y a ocho de ellos por cinco años o más**⁹⁴. Es decir, no encontramos evidencia de recortes de corto plazo ni de estrategias explícitas de salida o asesorías destinadas a 'allanar el camino' para revertir los recortes o congelamientos del gasto salarial.

Tabla 1. Asesoría del FMI sobre el gasto salarial en el sector público de países seleccionados (2016-2021) y las implicaciones de los recortes para empleados públicos

	Años para CONGELAR o RECORTAR gasto salarial en el sector público como % del PIB	Impacto de lograr el último objetivo de medio plazo de gasto salarial en el sector público (puntos porcentuales) [Año fiscal]	Objetivo de Gasto salarial en el sector público como % del PIB (%)	Pérdidas (en millones de US\$) por gasto en trabajadores del sector público	Número de maestros perdidos (20% de pérdidas) según estándares de la UNESCO	Número de enfermeros perdidos (15% de pérdida) según la Declaración de Abuja	Número de otros empleados públicos perdidos (saldo de 65%)
Bangladesh	3	Recorte 0,2% [AF16-25]	2,1	605,1	33.821	19.895	115.389
Nigeria	6	Recorte 0,4 [AF 15-25]	2,2	1792,5	329.431	137.148	1.315.933
Nepal	3	Recorte 1,1 [AF 15-24]	2,9	376	18.066	37.388	34.877
Uganda	4	Recorte 0,1 [AF 16-25]	3,6	35,2	746	3.803	0
Kenia	6	Recorte 1,4 [AF 14-24]	3,8	1337	51.230	45.101	159.820
Zimbabue	5	Recorte 11,1 [AF 15-23]	4,9	1879,5	49.289	40.649	156.511
Tanzania	3	Recorte 0,5 [AF 15-20]	5,3	305,7	12.222	7.283	41.614
Senegal	5	No claro	6				
Sierra Leona	6	Recorte 1,4 [AF 15-26]	6	57,7	1.664	1.746	4.912
Ghana	3	Recorte 1,8 [AF 16-24]	6,9	1210,2	41.519	34.158	131.919
Malawi	4	Aumento 1,2 [FY16-23]	7,5				
Zambia	3	Recorte 1,0 [AF 16-24]	7,7	279,7	12.060	15.356	32.882
Liberia	6	Recorte 5,0 [AF 15-25]	7,8	153,5	5.756	5.727	17.299
Vietnam	6	No claro	8,9				
Brasil	5	Recorte 0,1(AF federal 16-25]	4,0	1877,8	27.552	39.360	70.848
				9.909,9	583.356	387.614	2.082.004

Fuente – análisis de datos de documentos del FMI por Emma Seery, tabla completa detallada disponible [AQUÍ](#). Equivalentes en US\$ y empleados públicos por Howard Reed (table completa [AQUÍ](#))

Además, la mayoría de los países evaluados pronto experimentarán un recorte de gasto salarial en el mediano plazo. Tal como lo muestra la Tabla 1, si se respeta la más reciente directriz presupuestaria del FMI (estipulada en el último Artículo IV y documentos de préstamo que revisamos) para 12⁹⁵ de los 13 países donde fue posible⁹⁶ realizar el análisis, esto constituirá un recorte del gasto salarial por un periodo de 5 a 11 años. En algunos casos, los recortes son significativos; Zimbabue vería un recorte de 11,1 puntos porcentuales en ocho años; Liberia (uno de los cuatro países de bajos ingresos incluidos en nuestro análisis) vería un recorte de 5,0 puntos en 10 años y Nepal, Kenia, Sierra Leona, Ghana y Zambia experimentarían un recorte de más de 1 punto porcentual en comparación con mediados de la década de 2010. En Malawi, cuyo recorte, de obedecer la última directriz presupuestaria, constituiría 1,2 punto porcentual de incremento en siete años, es la única excepción de esta espiral descendente.

Algunos de estos cambios en los puntos porcentuales pueden parecer menores, pero tienen efectos perjudiciales muy reales. **Solo en estos 15 países, los recortes recomendados por el FMI suman cerca de US\$ 10 mil millones. Esto equivale a recortar:**

- 583.356 maestros y
- 387.614 enfermeros y
- 2.082.004 trabajadores del sector público.

En suma, más de tres millones de empleados públicos perdidos efectivamente como consecuencia de un objetivo establecido por el FMI de contraer el gasto salarial en el sector público solo en 15 países. Este consejo coercitivo tiene impactos muy reales en las vidas de las personas y afecta la capacidad de los países de brindar servicios públicos básicos y lograr las metas de desarrollo.

TESTIMONIO DE PRIMERA LÍNEA EN ZAMBIA

“Mi nombre es Judith Chikonde. Soy maestra de la Escuela Primaria St Patrick’s, en Lusaka, Zambia. Las condiciones de trabajo de los maestros son patéticas. Soy maestra de educación especial, pero no me pagan ninguna asignación conforme a las estipulaciones de las condiciones de servicio. Ahora me ocupo de dos cursos...y eso me parece injusto. Estar al frente de varias clases aumenta la carga de los maestros y afecta el foco. Obtuve mi título de maestría, pero no me pagan conforme a esa calificación. Mi salario es demasiado bajo y no me permite arrendar una casa decente, es muy duro. Siento que el gobierno ha dado por sentado nuestro compromiso profesional. Como muchos maestros, hago otras actividades para generar ingresos suficientes y cubrir las necesidades de mi familia. Esto también afecta mi nivel de atención en la escuela, pues mi mente está distraída, pensando en que tengo que hacer algo para llegar a fin de mes”.

Testimonio recabado por Education International

CUADRO 7: SEIS AÑOS DE RECORTES Y CONGELAMIENTOS EN SIERRA LEONA

La guerra civil en Sierra Leona, que culminó en 2002, dejó al país con servicios públicos en ruinas, escasez crónica de personal y algunos de los peores resultados del mundo en salud y educación. Desde entonces, se han aplicado un número ambicioso de iniciativas para paliar la situación. En 2010, se anunció la Free Health Care Initiative, con el fin de reducir los pagos de caja chica a madres embarazadas y en periodo de lactancia y a niños menores de cinco años. El Gobierno actual está impulsando la recaudación de ingresos fiscales para mejorar el gasto público y ha anunciado su compromiso de hacer la educación primaria y secundaria gratuita. Estos compromisos se han visto acompañados de un mayor gasto en educación (de 15% del presupuesto en 2017 a 22% en 2021) y salud (aumento de 8% a 11%).

A pesar de estos ambiciosos objetivos (y muchos retos), entre 2016 y 2021 Sierra Leona ha recibido directrices presupuestarias consistentes en el Artículo IV y los documentos de préstamo de la Facilidad de Crédito Extendido (ECF) del FMI de recortar el gasto salarial en el sector público a un 6% del PIB. Este objetivo establecido ‘en consulta con el FMI’⁹⁷ no guarda relación con la realidad del país y no toma en cuenta los compromisos nacionales de desarrollo. En este periodo, los gobiernos progresistas han buscado dar prioridad al desarrollo nacional, pero el progreso ha sido obstaculizado por directrices presupuestarias de medio plazo orientadas a recortar significativamente el gasto salarial en el sector público entre 0,5 y 1,9 puntos porcentuales.

Existe alguna evidencia de que el Gobierno ha sido capaz de negociar algún margen sobre este punto. Por ejemplo, la solicitud de préstamo ECF de 2018⁹⁸ muestra un congelamiento de nuevas contrataciones para cumplir el objetivo de 6% del gasto salarial, pero hace la excepción con la educación⁹⁹ debido a la nueva política de educación gratuita del Gobierno¹⁰⁰. También hay indicios de que se hicieron algunas concesiones con respecto al aumento del gasto en nuevas contrataciones para solventar la grave escasez frente a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, estas concesiones siempre se producen en el contexto de directrices presupuestarias de recortar y/o congelar significativamente el gasto salarial total del sector público¹⁰¹.

Nuestro informe nacional de Sierra Leona encontró que, aunque el gasto salarial de trabajadores de la salud aumentó en términos nominales de 2017 a 2021, en términos reales disminuyó en 15%. Esto constituye un reto enorme en un país que aún se recuperaba del impacto del Ébola cuando sobrevino la pandemia del Covid-19. El Gobierno ha tratado de expandir y reconstruir la fuerza de trabajo del sector sanitario tras el Ébola (que acabó con las vidas de 257 trabajadores sanitarios). En 2020, con la crisis del Covid-19 y sus efectos en el país, el Gobierno aumentó el número de trabajadores de la salud en 5.000 profesionales y anunció un incremento de 30% en sus salarios, con el objetivo de dar un pequeño impulso a un sector ya diezmado y sobrecargado. Y dadas las restricciones actuales al gasto salarial, es muy probable que se produzcan recortes más profundos en otras áreas.

Si bien el gasto salarial en el sector educativo parece, a primera vista, incrementarse (en términos nominales, un 65% desde 2017), en términos reales ha disminuido en 5%. Además, como las inscripciones escolares se han abultado como resultado del nuevo compromiso de brindar educación gratuita, la relación alumno-maestro ha pasado de 60:1 en 2017 a 75:1 en 2021; y el análisis de este informe arroja que el déficit de educadores ha aumentado de 51.524 a 69.074. Los maestros adicionales que se requieren para reducir este déficit y llevarlo al nivel internacional recomendado de 40:1 provocarán un aumento en el gasto salarial actual en educadores de 20%. Nuestro informe nacional encontró que los salarios actuales de los maestros se encuentran por debajo de la ‘canasta básica alimentaria’¹⁰² mínima nacional y como la inflación hace estragos en los salarios de los maestros, muchos están renunciando.

Existen importantes motivos para preocuparse de cara al futuro. El documento más reciente del FMI que revisamos (la Solicitud de Desembolso bajo la Facilidad de Crédito Rápido de 2021) dio instrucciones presupuestarias de recortar el gasto salarial en el sector público en 1,9 punto porcentual para alcanzar el objetivo de 6% y de congelarlo a ese nivel por dos años¹⁰³. Además, identificó la ‘contención del gasto actual’ y la ‘racionalización del gasto salarial’ como claves para garantizar la sostenibilidad de la deuda¹⁰⁴. Si el Gobierno respeta esta nueva directriz presupuestaria, el gasto salarial habrá sido recortado en un significativo 1,4 punto porcentual entre los Años Fiscales 2015 y 2016. En un país con un déficit grave de trabajadores, esta medida seguirá disminuyendo la capacidad del gobierno de cumplir sus responsabilidades y aspiraciones de desarrollo. Dados los efectos de la crisis del Covid-19, que ha sobrecargado el sistema sanitario del país y afectado la educación de muchos niños, en especial de los más pobres. Esto es particularmente preocupante.

Basado en el informe de ActionAid para Sierra Leona y Budget Advocacy Network titulado ‘The Public Versus Austerity: Trends in Public Sector Wage Bills in health and education in Sierra Leone’ 2021

3.2 ¿QUÉ PORCENTAJE DEL PIB DEBE DESTINARSE AL GASTO SALARIAL EN EL SECTOR PÚBLICO?

Un factor esencial que debe considerarse es si estos 15 países muestran un gasto salarial en el sector público inusualmente alto. La forma más simple de hacerlo es observar el monto destinado al gasto salarial como un porcentaje del PIB cuando se les aconsejó recientemente que lo recortaran (ver Tabla 2, columna 2). Los resultados son claros. Solo un país se ubicaba muy por encima del promedio global (Zimbabue) y otros tres también lo hacían, pero marginalmente (Liberia, Zambia y Vietnam), mientras que a 10 países que ya se encontraban por debajo del promedio también se les aconsejó recortar gasto. Si observamos nuevamente la Tabla 1 donde está la directriz de medio plazo del FMI, cada país fue conminado a ubicarse por debajo del promedio global. La orientación del consejo del FMI es inequívoca y no parece estar basada en la necesidad de alinear a los países con los promedios regionales o globales. **De hecho, incluso a países con un gasto excepcionalmente bajo en el sector público se les aconsejó aplicar recortes, en lugar de incrementar el gasto.**

Tal como lo muestra la Tabla 2, Zimbabue, con un gasto salarial de 17,1% del PIB, también debía recortarlo, al igual que Nigeria, que destina solo 1,9% de su PIB a los trabajadores del sector público. En el medio se encuentran Liberia, con 10,1% del PIB destinado al gasto salarial en el sector público; Zambia (9,1%); Ghana (8,7%), Malawi (7,7%); Senegal (6,5%); Tanzania (5,4%); Brasil Federal (4,6%); Kenia (4,4%); Nepal (3,7%) y Uganda (3,5%), todos los cuales recibieron la instrucción de hacer recortes del gasto.

Esta situación nos hace preguntarnos si debe existir algún indicador de referencia para guiar las decisiones sobre el porcentaje del PIB que un país debe destinar al gasto salarial en el sector público en diferentes contextos. En nuestras discusiones con el FMI, notamos un énfasis constante sobre la especificidad de cada país: no debería haber indicadores de referencia con respecto al PIB sobre el gasto salarial, incluso para grupos de países de la misma región o que comparten ciertas características. Sin embargo, siguen usando esto como un indicador clave para comparar países, a menudo de forma aleatoria (ver sección 4.1). En ausencia de cualquier otro punto de referencia objetivo o evaluación sistemática, usar promedios globales y regionales parece la forma más justa de proceder. Con base en esto, resulta evidente la inclinación del FMI a reducir aún más el gasto en los trabajadores del sector público sin puntos de referencia claros.

El otro indicador que puede usarse para medir razonablemente el gasto salarial nacional en el sector público es la proporción del gasto total del gobierno (ver columna 3 de la Tabla 2). En 2019, solo cuatro de los países (Ghana, Zambia, Zimbabue y Brasil) se ubicaban por encima del promedio global o regional. Algunos países (en particular Uganda, Kenia, Nepal y Bangladesh) estaban muy por debajo del promedio de gasto salarial en el sector público como un porcentaje del gasto total e *igualmente* el FMI les indicó que debían hacer recortes o congelamientos. El deseo del FMI (y la voluntad de los Ministerios de Finanzas) de reducir el gasto en los trabajadores del sector público parece injustificado, de conformidad con lo que demuestran los hechos.

El impacto de aumentar el porcentaje del PIB destinado al gasto salarial en el sector público en solo 1% en esos 15 países sería significativo y permitiría la contratación de cerca de 8 millones de enfermeros, maestros y otros empleados públicos (ver Tabla 2). E incluso haciendo eso, seguirían por debajo del promedio global. Esto nos describe un poco la magnitud del impacto de las restricciones presentes y su efecto acumulativo a lo largo del tiempo. De hecho, muchos países pudieran aumentar razonablemente en más de 1% su gasto, lo cual tendría un impacto transformador en todos los servicios públicos.

TESTIMONIO DE PRIMERA LÍNEA EN NEPAL

Prakash Thapa: *he sido profesor de inglés por 37 años, 22 de los cuales en la Escuela Secundaria Shramjit Kishor. Los recortes salariales no son un fenómeno nuevo. Antes recibía asignaciones por dictar clases, por vigilar exámenes y por revisar exámenes de estudiantes, etc. Durante los últimos 10 años he perdido todas esas asignaciones. Nuestros ingresos se han deteriorado paulatinamente con los años.*

Testimonio recabado por Education International

Tabla 2. Gasto salarial en el sector público como un porcentaje del PIB y gasto público total

País	Gasto salarial en el sector público como % del PIB cuando el FMI recomendó recientemente un recorte (año del consejo del FMI)	Gasto salarial en el sector público como % del gasto público	1 punto porcentual de aumento del gasto salarial en el sector público como % del PIB en términos de número de trabajadores públicos de primera línea (usando el salario promedio de maestros)
Promedio global	9%	28%	
Promedio de África subsahariana	7%	29%	
Ghana	RECORTE desde 8,7% (2017)	30%	115.331
Kenia	RECORTE desde 4,4% (2021)	18%	182.965
Liberia	RECORTE desde 10,1% (2021)	24%	5.756
Malawi	RECORTE desde 7,7% (2020)	26%	572.292
Nigeria	RECORTE desde 1,9% (2018)	n/a	4.117.893
Senegal	RECORTE desde 6,5% (2017)	23%	29.229
Sierra Leona	RECORTE desde 7,9% (2021)	28%	5.944
Tanzania	RECORTE desde 5,4% (2017)	27%	122.221
Uganda	RECORTE desde 3,5% (2017)	18%	37.296
Zambia	RECORTE desde 9,1% (2019)	32%	50.248
Zimbabue	RECORTE desde 17,1% (2017)	45%	22.202
Promedio del Sur de Asia	6%	21%	
Bangladesh	CONGELAMIENTO a 2,1% (2020)	15%	845.526
Nepal	RECORTE desde 3,7% (2018)	12%	82.119
Vietnam	RECORTE desde 9,1% (2019)	n/a	384.619
Promedio de América Latina	9%	31%	
Brasil (nivel federal)	RECORTE desde 4,6% (2020)	36%	1.377.603
TOTAL			7.951.244

Fuente – columna 2 – Revisión de Emma Seery de los documentos del Artículo IV del FMI; columna 3 y columna 2 promedios del Banco Mundial: Worldwide Bureaucracy Indicators Dashboard – mayormente de 2019 (observamos que hay preocupaciones importantes sobre la confiabilidad y comparabilidad de estos datos); columna 4 análisis de Howard Reed.

3.3 ¿SE HAN TOMADO MEDIDAS PARA EXPANDIR EL MARGEN DE MANIOBRA FISCAL?, POR EJEMPLO, ¿AUMENTAR LOS INGRESOS FISCALES?

Para poner aún más a prueba el argumento del FMI de que las restricciones del gasto salarial en el sector público son solo temporales, buscamos evidencia de que los países estaban recibiendo apoyo para expandir su margen de maniobra fiscal. Explorar alternativas menos perjudiciales que la austeridad es un estándar clave de la ley internacional de los derechos humanos. Entonces, si el FMI no ayuda a los Ministerios de Finanzas y los gobiernos a explorar otras medidas, se convierte en cómplice de la violación del respeto de los derechos humanos¹⁰⁵.

La forma más obvia de que un país transite por una vía alternativa es aumentar la relación impuestos-PIB, pues así se recaudarían más ingresos para invertir en servicios públicos. Esto se esperaría normalmente en países de bajos ingresos, donde el FMI ha reconocido *‘el reto clave de mejorar la prestación de servicios y de expandir el empleo en servicios claves, incluyendo en educación, atención sanitaria y seguridad. En estos casos, es importante establecer salarios que atraigan y motiven al personal, mientras se mejora la eficiencia del gasto y se movilizan ingresos adicionales para crear el margen de maniobra fiscal necesario para asumir un mayor gasto salarial’*¹⁰⁶.

Las acciones en materia fiscal pueden ser claves para prevenir una espiral descendente¹⁰⁷. Se ha demostrado que la austeridad inhibe el crecimiento, aumenta el desempleo y contrae los ingresos fiscales, lo cual puede provocar mayores niveles de déficit, mayor restricción del margen de maniobra fiscal y hacer que los países que ya gastan mucho más en repagos de deuda que en el sector social deban seguir pidiendo préstamos solo para cumplir con el servicio de su deuda¹⁰⁸. La propia investigación del FMI ha mostrado que un régimen fiscal más robusto y progresivo no es perjudicial, sino fundamental para el financiamiento público en momentos de estrés económico¹⁰⁹ y que los países deben equilibrar cuidadosamente los recortes en el gasto social y los incrementos del ingreso¹¹⁰.

La Tabla 3 muestra nuestro análisis de la relación impuestos-PIB donde había datos disponibles para el periodo 2016-2018. Los datos del Banco Mundial usados aquí son claramente poco confiables, pero nos permiten trazar un patrón general de aspectos significativos¹¹¹.

El FMI ha sugerido que la mayoría de los países podrían expandir sus relaciones impuestos-PIB en 5% para finales de la década¹¹². Sin embargo, cinco de los países que revisamos muestran un descenso de la relación impuestos-PIB durante el periodo 2016-2018¹¹³, y en otros cinco países esos niveles aumentaron modestamente¹¹⁴. En nueve de esos países (con Bangladesh como la única excepción), el consejo del FMI para el periodo 2016-2018 fue recortar y/o congelar el gasto salarial en el sector público.

Tabla 3. Relaciones impuestos-PIB en países estudiados

País	Relación impuestos-PIB (2018)	Movimiento impuestos-PIB 2016-2018 (%)	Relativo a 15% del umbral mínimo del FMI ¹¹⁵
Bangladesh	7,40%	Descenso 0,8	Debajo
Nepal	21,10%	Ascenso 2,4	Encima
Vietnam	14,30%	Ascenso 0,4	Debajo
Ghana	13,10%	Ascenso 0,6	Debajo
Kenia	15,10%	Descenso 1,1	Nivelado
Liberia	11,60%	Descenso 0,6	Debajo
Malawi	17,40%	Ascenso 2,1	Encima
Senegal	15,10%	Descenso 0,8 (2016-17)	Nivelado
Sierra Leona	11,80%	Ascenso 0,6	Debajo
Tanzania	11,80%	Ascenso 0,4 (2016-17)	Debajo
Uganda	11,40%	Ascenso 0,4	Debajo
Zambia	15,80%	Ascenso 2,8	Encima
Zimbabue	11,70%	Descenso 3,9	Debajo
Brasil	24,20%	Ascenso 1,4	Encima

Fuente: World Bank: Worldwide Bureaucracy Indicators Dashboard – mayormente de 2019.

El FMI también recomienda a los países con bajos niveles bajos de impuestos-PIB que apunten a un umbral mínimo de 15%, con base en evidencia de que esto habilita una ruta más amplia de crecimiento y que las relaciones bajas de impuestos producen niveles inadecuadamente bajos de gasto social¹¹⁶. En 2018, ocho de los países que revisamos se ubicaban por debajo de este umbral¹¹⁷ y dos más (Kenia y Senegal) ligeramente por encima. Nuevamente, en nueve de estos países (Bangladesh siendo la única excepción), el FMI aconsejó recortar y/o congelar el gasto salarial en el sector público durante el periodo 2016-2018.

En otras palabras, **a pesar de que la relación impuestos-PIB estaba por debajo del mínimo recomendado por el propio FMI, la mayoría de los países que revisamos habían experimentado decrecimiento, estagnación y/o niveles inadecuados de impuestos-PIB y tenían sistemas fiscales cada vez más regresivos**, lo cual era parte de la instrucción clara y consistente de recortar o congelar los salarios en el sector público. Este panorama siembra dudas sobre la afirmación del FMI de que las restricciones del gasto salarial irían acompañadas de acciones para movilizar ingresos adicionales y crear un margen de maniobra fiscal para dar paso a un mayor gasto en el futuro.

3.4 ¿LOS PAÍSES CON INGRESOS CRECIENTES TIENEN PERMITIDO DESTINAR RECURSOS AL GASTO SALARIAL?

Otra forma de analizar estos datos es explorar si existen incentivos para aumentar el gasto salarial en el sector público en países que están obteniendo progresos en la expansión del margen de maniobra fiscal. Cuatro de los países que revisamos tenían una relación impuestos-PIB por encima del umbral mínimo de 15% en 2018¹¹⁸ y experimentaron aumentos significativos en la relación impuestos-PIB en el periodo 2016-2018. Malawi, Nepal y Zambia observaron incrementos de más de un punto porcentual anual y en Brasil la relación impuestos-PIB aumentó en 1,4 punto porcentual en el curso de dos años.

A pesar de esto, según los documentos que revisamos, a esos países se les recomendó cortar y/o congelar el gasto salarial en el sector público en un periodo de tres, cuatro o cinco años entre 2016 y 2021. El caso de Nepal es particularmente extremo, ya que la relación impuestos-PIB aumentó en 2,4 puntos porcentuales entre 2016 y 2018, para alcanzar un 21,1% en 2018. Sin embargo, el FMI le recomendó hacer recortes y/o congelamientos del gasto salarial en el sector público entre 2018 y 2020. Asimismo, si el Gobierno de Nepal respeta las últimas directrices del FMI, el país experimentará un recorte de 1,1 punto porcentual entre los Años Fiscales 2015 y 2024 que disminuirá el gasto salarial en el sector público al absurdo bajo nivel de solo 2,9% del PIB.

Esto nos revela una historia mucho más preocupante. **Pareciera que el FMI prescribe estas medidas de austeridad que reducen el gasto en trabajadores esenciales de primera línea, independientemente de la relación impuesto-PIB de un país o de las tendencias recientes en materia de movilización de ingresos fiscales y nacionales.** Su asesoría está divorciada así del nivel del margen de maniobra fiscal que indica la relación impuestos-PIB¹¹⁹.

Los 15 países estudiados aquí no son casos excepcionales: estos representan un patrón más amplio de austeridad donde los recortes del gasto salarial en el sector público prevalecen. Por otro lado, estos países constituyen solo el 10% de los 159 países que probablemente enfrenten austeridad en 2022, conforme al informe de Global Austerity Alert, un informe que advierte que los recortes del gasto salarial en el sector público son unas de las medidas de austeridad más rutinarias y prevalecientes y que generan resultados sociales negativos¹²⁰. Estas afirmaciones son confirmadas por el más reciente hallazgo hecho por la Oxfam de que el FMI ha recomendado la consolidación fiscal en 73 países durante el periodo de recuperación tras la pandemia del Covid-19 como una solución para los déficits fiscales y para el aumento de los niveles de deuda¹²¹. Lamentablemente, esta es una historia de vieja data en muchos de los países del Sur del planeta: la “austeridad” ha sido el *status quo* por décadas, plagada de condiciones para reducir aún más el margen de maniobra política y prevenir una prestación de servicios sociales por parte del Estado más fortalecida¹²².

Cualquiera sea la forma en que se observen los datos del propio FMI¹²³, su narrativa no encaja. Los recortes y congelamientos de los salarios de los trabajadores públicos se basan en objetivos fiscales restrictivos y en el rechazo a contemplar alternativas para aumentar el margen de maniobra fiscal. Estas medidas se imponen incluso a países con ingresos fiscales en expansión y no son temporales, pues son la recomendación por defecto año tras año. Los países ubicados por debajo de los promedios globales y regionales de gasto salarial en el sector público aún son obligados a hacer más recortes. Y en los países donde se les recomiendan hacer recortes no existe evidencia de que esas acciones estén orientadas a expandir el margen de maniobra fiscal, incluso cuando esto es posible. En suma, no existe una lógica, un razonamiento o una evidencia que justifique la aplicación rutinaria de restricciones al gasto salarial en el sector público, y por ello nos preguntamos por qué siguen estando tan presentes y extendidas.

CUADRO 8: SALARIOS DE MISERIA EN EL SECTOR PÚBLICO EN ZIMBABUE

Maestros, enfermeros y médicos están asumiendo la carga de recortes agresivos de los salarios en el sector público en Zimbabwe. Esto ha hecho que los trabajadores esenciales de primera línea tengan que salir adelante con salarios de miseria. Los niveles salariales recibieron un duro golpe en 2019, en particular cuando los ingresos promedios de maestros y trabajadores sanitarios ni siquiera alcanzaban para costear la canasta alimentaria de la línea de pobreza; es decir, la capacidad de alimentar una familia promedio de cinco integrantes con esos salarios¹²⁴. Los ajustes salariales de los maestros en 2020 les permitieron superar temporalmente ese umbral, pero con una inflación de 350% a principios de 2020, esto no duró mucho. En junio de 2021, el Gobierno decretó un nuevo aumento salarial para los maestros y enfermeros: aquellos con la menor calificación ahora ganan entre US\$ 239 y 335 mensuales¹²⁵, lo justo para alimentar a una familia de cinco, pero no suficiente para llegar a la “línea de consumo de la pobreza”¹²⁶. Nuestros hallazgos también muestran que una maestra promedio ganó cerca de un tercio de su equivalente salarial en 2010¹²⁷. Y los trabajadores de la salud viven una situación similar, aunque menos dramática¹²⁸.

El Artículo IV para 2016 y 2017 instruyó a Zimbabwe recortar significativamente el gasto salarial en el sector público, en 1,7 y 3,6 puntos porcentuales, respectivamente. Y el más reciente Artículo IV recomendó un congelamiento neto en 4,9% del PIB entre los Años Fiscales 2019 y 2023. Es importante destacar que este objetivo de medio plazo de gasto salarial es 11,6 puntos porcentuales más bajos que el objetivo establecido en el documento de 2016 (16,5% del PIB). Los drásticos recortes consecuentes del gasto y las revisiones sustanciales descendentes al gasto salarial en el tiempo se han hecho sentir con gran fuerza en el sector de la educación (el sector más amplio del gobierno en términos de empleados), que pasó de 22,8% a 5,6%. Y ahora estos recortes impactan el día a día del maestro promedio en Zimbabwe:

“Las dificultades que enfrentan los maestros como resultado de los salarios de esclavos no necesitan mayor presentación. Además del estrés relacionado con la alimentación y las muertes, los maestros sobrevivientes se convirtieron prácticamente en mendigos y pordioseros. La moral está en su punto más bajo. Los maestros son ahora el hazmerreír de muchas sociedades, pues viven al día, asisten a clases en harapos y sin comer, y están desnutridos. Los maestros viven en condiciones precarias, la mayoría de hechos sin techo, y aun así luchan por no faltar al trabajo. En el peor de los casos, han sido forzados a robar para comer. Los matrimonios se desmoronan sin cesar. En resumen, los maestros están subsidiando al empleador en el cumplimiento de sus deberes; luchan por llegar a fin de mes y, en consecuencia, la mayoría se ve forzada a trabajar en cualquier actividad menor. Si miras alrededor, te darás cuenta de que los maestros están manteniendo a sus familias con la venta de todo tipo de mercancías, recargas, ropa usada, etc. Algunos se han dedicado a la agricultura de subsistencia, la minería aluvial, el comercio transfronterizo e incluso la prostitución para alimentar a sus familias. La mayoría ha renunciado mentalmente, aunque siguen presentes físicamente en la escuela”.

Maestro anónimo de Zimbabwe

Los salarios de miseria de los empleados públicos ya han producido a una fuga masiva de trabajadores altamente formados y calificados del sector público. Zimbabwe está entre los países con menores salarios del mundo para maestros. Solo al cruzar la frontera con Sudáfrica o Namibia, un maestro puede aumentar sus ingresos en más de 260% y 172%, respectivamente. Más de 10.000 maestros renunciaron solo en 2020¹²⁹. Lo mismo ocurre con los enfermeros, millones de los cuales están yéndose al Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Un estudio de 2010 de Naciones Unidas encontró enfermeros trabajando en restaurantes, como servicio doméstico y viviendo en refugios en otros países. Otros son forzados a dejar sus carreras para ganar mejores salarios¹³⁰. De los enfermeros formados en Zimbabwe, solo un cuarto es empleado del Ministerio de Salud; el resto trabaja en otros roles y sectores, o se han ido a trabajar al extranjero. Las últimas tendencias vaticinan mayores problemas para retener a los empleados públicos de Zimbabwe.

Fuente: ActionAid Zimbabwe 2021 “The trends leading to public sector low wages and constraints on the wage bills in Zimbabwe”

4. DATOS DUDOSOS Y COMPARACIONES INJUSTAS

El FMI se enorgullece de ser autoritario en su uso de evidencia y el Banco Mundial de ser una fuente confiable de conocimientos, pero ambas instituciones han sido sacudidas por la revelación de que los datos del informe 'Doing Business' de 2018 fueron explícitamente manipulados a favor de China. La actual Directora Ejecutiva del FMI y otrora Directora Ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, estuvo personalmente involucrada y el escándalo debilitó al Presidente del Banco Mundial, David Malpass, y sacó de circulación el informe Doing Business¹³¹. Muchos críticos consideran que esto es solo la punta del iceberg y que la manipulación y tergiversación de los datos por el FMI y el Banco Mundial fueron mucho peores. Ya hemos alertado sobre algunas áreas en que los datos del Banco Mundial se consideran no confiables (por ejemplo, las relaciones impuestos-PIB) y esta sección expone algunos ejemplos preocupantes de manipulación y uso indebido de datos con respecto al gasto salarial del sector público.

4.1 COMPARACIONES ENTRE PAÍSES

El fracaso del FMI en brindar un análisis de niveles aceptables sobre el gasto en los trabajadores del sector público o incluso un rango adaptado a diferentes países o contextos regionales le lleva a recomendar reducciones en casi todos los casos.

CUADRO 9: NEPAL – IMPACTOS POR GÉNERO DE LAS RESTRICCIONES SALARIALES EN EDUCACIÓN

Nuestra revisión de los documentos del FMI muestra que Nepal ha sufrido presiones para recortar y congelar el gasto salarial público, aun cuando este es increíblemente bajo (ver Tabla 2). Con solo 11% del presupuesto nacional destinado a la educación, esto crea una situación grave para el sector. Actualmente, Nepal necesita emplear a 67.000 maestros permanentes para cumplir los planes gubernamentales, mientras que existen 40.000 maestros con contratos temporales, ya sean contratados por gobiernos locales con salarios comparativamente bajos o maestros suplentes con contratos temporales pagados por la comunidad¹³². Debido a los cierres de escuelas por el Covid-19, muchos maestros temporales en escuelas privadas han sido despedidos, lo cual genera preocupaciones sobre el bienestar y el impacto más amplio en las escuelas cuando todo regrese a la normalidad.

También existe una fuerte dimensión de género ligada a esta situación, pues la mayoría de los maestros contratados con bajos salarios son mujeres, lo cual es un reflejo de las tendencias generales en Nepal, donde las mujeres ganan 30% menos que los hombres¹³³. Esto lleva a que las mujeres asuman la carga de los recortes del gasto salarial. Además, esas restricciones limitan las aspiraciones y los compromisos políticos de extender la educación pública. El compromiso de expandir la educación preescolar, por ejemplo, ha sido perjudicado por el hecho de que, en este momento, la fuerza laboral está conformada principalmente por mujeres¹³⁴ que trabajan a cambio de salarios de miseria (US\$ 70-130 mensuales¹³⁵). Existe una lucha permanente por mejorar esto, pero ahora se ve restringida por los recortes salariales. Abarcar otras nuevas áreas es difícil cuando los salarios del sector público ya fueron reducidos a su mínima expresión.

Fuente: ActionAid Nepal (2021) Research on Trends on Public Sector Teacher's Wage Bills

En nuestra revisión de documentos del FMI encontramos pocos ejemplos de países que se comparan con promedios regionales o globales referente al gasto salarial como un porcentaje del PIB. En su lugar, hallamos varios casos de comparaciones de países bastante azarosas, lo cual siempre ha provocado que el país estudiado parezca una excepción en cuanto a su gasto¹³⁶. El ejemplo más inaudito de esto es el Artículo IV para Vietnam (publicado en 2021), el cual compara el gasto salarial de Vietnam como un porcentaje del PIB con '*Países en Desarrollo de Bajos Ingresos*'. Esto muestra a Vietnam muy por encima del promedio, a unos 90 puntos porcentuales. El problema es que Vietnam es un país de ingresos medios, por lo que la comparación es irrelevante, aunque muy destacada como punto de referencia.

Cuando el FMI hace comparaciones selectivas de países en sus documentos, en general no se incluyen datos de fuentes autorizadas o fechas, y muchas veces dicen que los datos provienen de '*Cálculos del Personal del Fondo*'. Por ejemplo, el Artículo IV¹³⁷ de 2019 para Liberia incluye un gráfico de barras titulado '*El gasto salarial público en Liberia es comparativamente más alto que en países pares*', el cual compara el gasto salarial como un porcentaje del PIB, el ingreso nacional y el gasto en Sierra Leona, Cote d'Ivoire y Guinea y el promedio de África subsahariana. Sin embargo, no se proporciona ningún año o fuente de los datos y no se ofrecen los porcentajes específicos en el gráfico. Este tipo de 'comparaciones' vagas hace imposible refutar las cifras o los análisis, lo que es muy importante cuando se usan para justificar recortes significativos. En ese mismo documento, la instrucción presupuestaria del FMI era hacer recortes netos del gasto salarial en el sector público de 1,1 punto porcentual en seis años.

En ausencia de evaluaciones del impacto de su asesoría de políticas sobre el gasto salarial en el sector público, no existe forma de que el FMI se asegure de que su recomendación no produce daños a corto y largo plazo. Quizá lo más alarmante sea el efecto acumulativo de que el FMI recomiende estas medidas en todos los países a lo largo del tiempo. Si, en 2020, se recomendó a 78% de los países recortar o congelar el gasto salarial en los tres años previos¹³⁸ y esto ha sido una recomendación consistente del FMI por décadas (previamente considerada como una condición rutinaria adjunta a los préstamos hasta 2007), entonces los promedios de todos los países habrían sido empujados a mayores reducciones. **Esto termina siendo una espiral hacia el fondo y los países son obligados a hacer recortes para mantener el ritmo de recortes impuestos a otros países.** Esta espiral descendente es un problema que aspiramos volver a abordar en una futura investigación.

4.2 LA PRIMA SALARIAL EN EL SECTOR PÚBLICO

Los documentos de políticas del FMI sugieren que es un problema que los salarios del sector público sean más altos que los del sector privado. La llamada 'prima del salario público' supuestamente 'distorsiona' el mercado laboral y los informes del Artículo IV advierten regularmente a los países que hagan comparaciones entre los salarios del sector privado y el sector público. El efecto buscado a menudo es justificar los recortes salariales (o pagos por debajo de la tasa de inflación) a los trabajadores del sector público.

La lógica de este enfoque parece no ser cuestionada por el FMI o la mayoría de los Ministerios de Finanzas, a pesar de ser un área plagada de dificultades. ¿Cuáles son las equivalencias usadas y cómo se hacen comparaciones eficaces? ¿Cómo calcular la capacitación, el desarrollo profesional, las horas y las condiciones de trabajo, los tipos de contrato, los beneficios, los bonos y las gratificaciones? Esto no puede hacerse de forma puramente técnica y neutral. ¿Es posible comparar a un maestro de escuela pública o a un enfermero del sector público con sus homólogos del sector privado? Rara vez puede hacerse una comparación directa y siempre hay distorsiones. Por ejemplo, ¿es posible comparar a un maestro de una escuela estatal con un maestro de una escuela privada de élite o a un 'maestro' no calificado de una escuela privada de bajo salario? En términos generales, probablemente existen esfuerzos consistentes por disminuir los salarios del sector privado con el fin de maximizar las ganancias. Así, si se reducen los salarios del sector público, lo mismo ocurrirá en el sector privado y todo terminará en otra espiral descendente. Esto es parte de las razones por las cuales observamos que la parte general del ingreso con respecto al trabajo (comparada con los dueños del capital) ha disminuido desde la década de 1970¹³⁹. Con el tiempo, esto afecta inevitablemente la calidad de los servicios públicos y por ende crece la demanda de servicios privados (para aquellos que pueden costearlos).

CUADRO 10: ¿QUIÉN Y QUÉ ESTÁ INCLUIDO?

Una de las áreas más grises es lo que está incluido en el gasto salarial del sector público, lo cual hace las comparaciones estándar entre países particularmente problemáticas. Los países tienen diferentes métodos contables y estadísticos. Algunos incluirán los salarios y no los beneficios, pero no todos incluirán al personal de las empresas estatales. Algunos han usado contabilidad creativa por años para tratar de eliminar de los libros a empleados del Estado y otros están aprendiendo cómo hacerlo. Donde hay datos, generalmente no son actualizados. La diversidad de convenciones sobre qué incluir o no hace casi insignificante el establecimiento de objetivos generales basados en comparaciones.

CUADRO 11: REVERTIR LA PRIMA PRIVADA O PLANES DE MEJORA DE LOS SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN VIETNAM

Vietnam ha dado grandes pasos por mejorar los resultados en materia de salud los últimos años. El índice de cobertura universal de salud en Vietnam se ubica en 73, más alto que los promedios regional y global, con cerca de 89% de la población asegurada en 2019¹⁴⁰. Esto ha sido posible gracias a mejoras continuas de los servicios públicos de salud, impulsadas por unos trabajadores sanitarios públicos fuertes que se ha beneficiado de inversiones consistentes del gobierno. Sin embargo, mientras el Gobierno ha dado pasos por mejorar gradualmente, esto no ha sido suficiente para mantenerse al paso de las necesidades y los crecientes estándares de vida, especialmente en grandes ciudades como Hanoi o Ho Chi Minh¹⁴¹. Los salarios del sector público tampoco han estado a la altura de los del sector privado (que puede ofrecer hasta el doble de los salarios en el sector público¹⁴²).

Por ende, el Gobierno se ha comprometido a resolver esto mediante un programa de reformas de amplio espectro que entrará en vigor en 2022. Este compromiso prevé que, para finales de 2021, el salario más bajo de los trabajadores del sector público debería ser igual al salario promedio más bajo del sector privado. Cada dos a tres años, los salarios aumentarán en línea con el índice de precios al consumidor, el crecimiento económico y la capacidad presupuestaria del Estado, con un compromiso global de que para 2030, los salarios más bajos de los trabajadores del sector público serán iguales, o mayores, que los salarios más bajos de los trabajadores del sector privado del país¹⁴³. La reforma también describe cómo se financiará esto, haciendo de ella un punto permanente en el presupuesto y asignando un aumento de 50% del ingreso estimado y de 70% del ingreso presupuestario local alcanzado para la reforma de los salarios.

Estas reformas de amplio espectro deben ser apoyadas como parte de los progresos constantes para asegurar un sistema de salud pública equitativo y de calidad en Vietnam. Esto no puede verse perjudicado por la asesoría del FMI, que previamente incluía recortes del gasto salarial¹⁴⁴.

Fuente: ActionAid Vietnam (2021) Public sector wages for frontline healthcare workers

Una dimensión interesante de esto es que la prima del salario público a menudo es más alta para mujeres y trabajos de menor calificación que para hombres y trabajos de alta calificación¹⁴⁵. Esto significa que las mujeres tienen mayores probabilidades de obtener un trabajo y salario dignos en el sector público, mientras que el sector privado parece explotar a las mujeres y a los trabajadores con bajas calificaciones en particular. De hecho, la brecha salarial entre géneros es diez puntos porcentuales más baja en el sector público que en el sector privado formal¹⁴⁶. **El efecto de estas comparaciones se siente así más intensamente entre las mujeres que trabajan en roles de primera línea del sector público, que también serán las primeras en sufrir las consecuencias de los recortes salariales.** Esto implica que cuando el FMI recomienda aplicar restricciones del gasto salarial, esto afecta directamente su propio compromiso de aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral¹⁴⁷. Existen, por supuesto, alternativas. En lugar de comparar los roles entre los sectores público y privado, los niveles salariales podrían ser comparados con el costo de vida o un sueldo digno. Pero esos análisis no parecen contar con mucho apoyo¹⁴⁸.

El uso del conmovedor término ‘distorsión’ también justifica otros análisis. Normalmente se sugiere que los sueldos en el sector privado están ‘distorsionados’ por salarios ligeramente más altos en el sector público. De igual forma, esto se hace sin tomar mucho en cuenta el valor del trabajo realizado o los beneficios relativos de una estrategia de salario/calificación baja o un salario/calificación alta en países en desarrollo, o si un salario más alto es un elemento necesario para la contratación y retención de los escasos trabajadores calificados. De hecho, un salario decente en el sector público puede prevenir niveles de explotación de los trabajadores del sector privado, especialmente en la economía altamente competitiva impulsada por exportaciones, al establecer una referencia razonable. Un salario más alto en el sector público puede servir para levantar el salario mínimo y las condiciones de los trabajadores del sector privado, y en lugar de ‘distorsión’, esto puede denominarse como un ‘efecto de faro’.

La ideología neoliberal dominante se asegura de que la percepción opuesta predomine, es decir, que no hay presión por recortar los salarios del sector público. Pero esto **es contraproducente, porque mientras el salario del sector público se contrae y los servicios se deterioran, el entorno favorable para que estos aumenten en el sector privado se ve comprometido**. Los trabajadores del sector privado terminan doblemente perjudicados por la presión hacia el descenso, tanto en sus salarios como en el acceso reducido a servicios públicos. En lugar de ver que el sector público sangra al sector privado, es necesario reconocer el círculo virtuoso, por el cual los servicios públicos de calidad son un requisito previo y un acelerador de un sector público próspero. La creación de empleos y el desarrollo económico dependen tanto del sector público como del privado y no hay que confrontarlos o presentar al sector público como una amenaza para el privado¹⁴⁹.

Existen contraargumentos significativos ante la paridad simplista atribuida a los sectores público y privado. El sector público debe pagar más que el sector privado si lo está regulando, de lo contrario los mejores trabajadores irán al sector privado y los supervisores del sector público no tendrán el personal necesario para regularlo. Y esto se convierte en un problema grave con las adquisiciones y las licitaciones, donde el sector público puede perder millones si no puede equipararse a los contratistas y abogados litigantes del sector privado.

Si bien la prima del sector público ejerce la mayor presión sobre los trabajadores peor pagados, existe poca evidencia de que ocurra lo contrario con los mejor pagados. A menudo se ofrece una 'prima del sector privado' a los trabajadores altamente calificados de los puestos más importantes, gerentes y jefes ejecutivos que pueden producir vastas sumas de dinero en el sector privado pero cuyos ingresos se ven generalmente limitados en el sector público. Los Ministerios de Finanzas rara vez aplican políticas orientadas a corregir este desequilibrio, y aun así es un área en que las políticas fiscales progresivas podrían contribuir significativamente para controlar ingresos excesivos, mientras se recaudan ingresos vitales para ayudar a impulsar las relaciones impuestos-PIB.

4.3 DATOS FALTANTES: ¿CUÁNTOS TRABAJADORES DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN SON NECESARIOS?

Los recortes o congelamientos del gasto salarial en el sector público afectarán el pago de los trabajadores, pero quizás impactarán aún más drásticamente la posibilidad de contratar nuevos trabajadores en el sector público. Muchos países exhiben una escasez dramática de trabajadores públicos, incluyendo en salud y educación, especialmente a la luz de la creciente necesidad de los mismos por la pandemia del Covid-19 (por ejemplo, para administrar vacunas, prevenir que los hospitales se vean sobrecargados o para reducir las aulas abarrotadas). Por lo tanto, los gobiernos, los Ministerios de Finanzas y el FMI deberían considerar como un punto sensible la necesidad de cubrir sistemáticamente los déficits graves, usando datos objetivos para guiar la discusión sobre qué acciones tomar para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, referencias internacionales confiables, estándares mínimos o los ODS.

El Artículo IV 2019 para Liberia es un ejemplo positivo de esta situación, el cual incluye un anexo sobre el gasto salarial en el sector público con cálculos del FMI y el gobierno sobre las relaciones adecuadas alumno-maestro y compara el número de profesionales de la salud capacitados con los objetivos de la OMS. El documento estipula que *'Los recursos humanos existentes en el sector público son inadecuados: i) las relaciones maestro-alumno para las escuelas primarias debe ser de 27, pero, si todos los niños de 6 a 9 años fueran a la escuela, esta relación sería de 70 estudiantes por maestro; ii) el número de profesionales de la salud calificados por 10.000 personas es solo de 4,79, mientras que el objetivo de la OMS es 41'*.

Esta información sirve de base fundamental para entablar una discusión informada y esperamos que este tipo de datos sean una referencia de rutina para las discusiones sobre el gasto salarial en el sector público de cada país. Lamentablemente, este fue el único de los 69 documentos que revisamos que hizo referencia a un estándar reconocido internacionalmente. Aún más decepcionante es el hecho de que, a pesar de este análisis, en el mismo documento para Liberia se recomendaba hacer un recorte neto de 1,1 punto del gasto salarial en el sector público como un porcentaje del PIB en los próximos seis años, lo cual probablemente tenga impactos sociales negativos, especialmente para las mujeres¹⁵⁰.

También encontramos algunos análisis de relaciones inadecuadas alumno-maestro y de profesionales de la salud en otros tres documentos de países¹⁵¹. En todos los casos, los mismos documentos del FMI daban directrices presupuestarias de medio plazo de implementar un congelamiento o recorte neto del gasto salarial.

CUADRO 12: REFERENCIAS Y QUIÉN DEBE ESTABLECERLAS

Siempre hay retos a la hora de determinar referencias globales en cualquier área y en teoría siempre deberían hacer asignaciones para diversos contextos nacionales y usarse en conjunción con evaluaciones de impacto. Sin embargo, hay organizaciones que han dedicado mucho tiempo a superar este reto.

- En el área de la **salud**, la OMS es claramente la autoridad y ha asignado un punto de referencia clave para progresar en materia de ODS en salud: una densidad mínima de trabajadores sanitarios (médicos, enfermeros y parteras) de 4,45 por cada 1.000 personas¹⁵².
- En el área de la **educación**, el informe de supervisión de la UNESCO y Education For All es el punto de referencia de autoridad y ha recopilado datos importantes sobre la escasez de maestros en todo el mundo. El indicador clave es el número de maestros y, si bien no hay objetivos globales, la UNESCO observó que en las escuelas primarias (como mínimo) 'la referencia más usada internacionalmente es 40:1'¹⁵³. La misma relación era usada por Education Fast Track Initiative, la cual ha evolucionado para convertirse en Global Partnership for Education¹⁵⁴. El reto es que un promedio nacional puede esconder profundas disparidades entre escuelas urbanas y rurales o entre regiones ricas y pobres de un país. Sin embargo, esto es un excelente punto de partida para comenzar una discusión informada al respecto.
- En términos de seguimiento del impacto de la asesoría del FMI en los **derechos de las mujeres**, ONU Mujer o el comité sobre el Convenio sobre la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)¹⁵⁵ podría establecer puntos de referencia que vayan más allá del número de profesionales necesarios y asegurar que el impacto social sea evaluado con una perspectiva interseccional de género. El diálogo sostenido con organizaciones de mujeres también podría ayudar a asegurar que el FMI no instrumentalice más a las mujeres para lograr el crecimiento económico, tal como ha ocurrido en el pasado mediante su foco en la participación de las mujeres en la fuerza laboral que en realidad esconde un trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres no remunerado, mientras ignora el impacto de sus recomendaciones en servicios públicos sensibles al género y la protección social¹⁵⁶.

La Revisión ECF 2019 para Ghana usa un tono casi apologetico para explicar por qué se han contratado más maestros y enfermeros: *'El Gobierno debió absorber unos cuantos maestros y enfermeros que habían terminado su formación hace unos dos años y necesitaban ser empleados para mejorar la relación estudiante-maestro y enfermero-paciente, las cuales están ahora por debajo del promedio de países pares'*. A pesar de esto, las directrices presupuestarias eran aplicar un congelamiento neto del gasto salarial en los próximos tres años. El Artículo IV 2018 para Nigeria incluye un esquema que muestra la infraestructura de la educación pública, medida como maestros de escuela secundaria por cada 1.000 personas, menor a un tercio del nivel de los mercados emergentes y solo un poco más de la mitad del África subsahariana. Igualmente, las directrices presupuestarias del FMI indican hacer recortes netos al gasto salarial del sector público de 0,1 punto porcentual en tres años y luego congelarlo por otros tres años.

Durante algunas discusiones sobre la crisis del Covid-19, las notas de solicitud de facilidad de Crédito Rápido para Uganda en 2020 indican que: **'El sistema de salud de Uganda no cuenta con los recursos adecuados para enfrentar esta emergencia sanitaria. Hay menos de siete profesionales de la salud por cada 10.000 ciudadanos'** y continúa justificando la urgente necesidad de contratar personal sanitario adicional. A pesar de esto, las directrices presupuestarias del FMI en este documento eran aplicar un congelamiento neto del gasto salarial en el sector público en los próximos cinco años.

En nuestras discusiones con el FMI, estos enfatizaban constantemente que llevan a cabo un 'análisis granular' de cada servicio público antes de dar cualquier recomendación, aunque este **análisis nacional nunca se publica, por lo que es difícil saber qué datos usan para tomar decisiones informadas**. Esto dificulta que la sociedad civil pueda cuestionarlo. El FMI no hace referencia a la OMS, UNESCO o incluso ONU Mujer en ninguno de sus documentos publicados o aparentemente busca que su asesoría determine los déficits de trabajadores de la salud y educación, impactos por género o cualquier otro¹⁵⁷. En general, parece que no se hacen suficientes esfuerzos sistemáticos por determinar cuáles pueden ser los déficits, a pesar del hecho de que las restricciones del gasto salarial pudieran tener un impacto dramático en los esfuerzos por superarlos.

Si el FMI considera adecuado hacer recomendaciones a los gobiernos sobre el tamaño del gasto salarial en su sector público, debería incluir normalmente en sus análisis evidencias de déficits de trabajadores en servicios públicos claves. Esto debe hacerse preferiblemente usando fuentes de autoridad internacionales y referencias y mencionando lo que es necesario para alcanzar los ODS, cumplir las obligaciones de derechos humanos y progresar hacia la igualdad sustancial de género. Por supuesto, el análisis debe ir más allá de lo cuantitativo y considerar el impacto de las restricciones del gasto salarial en la *calidad* de la fuerza laboral del sector público, si los niveles de salario y condiciones pueden atraer a los profesionales adecuados y concuerdan con la educación y la formación requeridas.

BOX 13: NIGERIA: TRABAJADORES DE PRIMERA LÍNEA DEL SECTOR PÚBLICO CON SALARIO MÍNIMO

En 2019, el presidente Muhammadu Buhari aprobó una ley para aumentar el sueldo mínimo mensual de Nigeria de 18.000 a 30.000 nairas (\$US79), luego de años de lucha de sindicatos laborales que culminaron en huelgas y protestas a finales de 2018. Dado que más de 80% de los trabajadores pertenece al sector informal¹⁵⁸ y el cumplimiento ha sido débil en el sector privado, el sueldo mínimo nacional corresponde principalmente a los empleados públicos. En 2021, este decreto sufrió ataques, pues la Cámara de Representantes inició la discusión de una ley para permitir a los 36 estados del país establecer su propio salario mínimo¹⁵⁹. En vista de que una inflación de dos dígitos y el alto costo de la vida ya han erosionado el salario mínimo en términos reales, nuestra investigación muestra que los trabajadores nigerianos ahora están peor que cuando se decretó el salario mínimo. Además, la lucha por congelarlo, en lugar de aumentarlo, claramente está llevando las cosas en la dirección opuesta.

Gran parte del argumento esgrimido para dismantelar el nivel del salario mínimo se basa en una narrativa según la cual es necesario reducir el gasto recurrente descontrolado, como resultado de una fuerza laboral “inflada” que debe contenerse o restringirse para dar cabida a una mayor inversión en infraestructura. Sin embargo, la escisión de capital recurrente se ubica en el promedio de los países pares¹⁶⁰. Además, el gasto en salario mínimo está evitando que los trabajadores peor pagados del sector público se hundan aún más en la pobreza.

Esta narrativa es ampliamente resaltada por la asesoría del FMI que pretende reducir salarios como parte de las medidas de consolidación fiscal. Los documentos que revisamos entre 2016 y 2018 incluyen la recomendación de cortar y/o congelar el gasto salarial. El Artículo IV de 2017 y 2018 especificaba que esto debía incluir la reducción o contención de los costos salariales e indirectos, mientras que en el Artículo IV de 2018 el FMI también recomendó al Gobierno “resistir a las presiones” de incrementar los salarios mínimos. Desde entonces, el FMI ha seguido aconsejando tener cuidado con el gasto recurrente y el gasto salarial en el sector público, y si el Gobierno se adhiere al más reciente objetivo presupuestario de medio plazo de 2,2% del PIB, esto representará un recorte de 0,4 punto porcentual en la década entre los Años Fiscales 2015 y 2025. En los documentos del Artículo IV de 2018 y 2019, un sólido argumento que busca justificar el gasto recurrente (del cual hace parte el gasto salarial) es aumentar la inversión pública en gasto de capital y cerrar la “brecha de infraestructura”. Esto a menudo se traduce en proyectos de construcción para apoyar el modelo de crecimiento dominado principalmente por la exportación y la extracción.

En un país con unos resultados tan malos en educación y salud, producto de la insuficiencia y sobrecarga de empleados públicos con salarios de miseria, esta narrativa es peligrosa. Nigeria tiene el número más alto de niños no escolarizados del mundo. En las escuelas más desfavorecidas de Nigeria, que alcanzan un 25%, la relación alumno-maestro es de al menos 150:¹⁶¹. El Consejo Nacional de Educación ha estimado un déficit de 1,3 millones de maestros solo en la educación básica,¹⁶² y es muy probable que esto empeore para 2030¹⁶³. Cuando surgió la pandemia del Covid-19, el gasto en salud (a solo 5% de acuerdo con BudgetIT) estaba por debajo de lo recomendado por el compromiso de Abuja: 15% del presupuesto gubernamental. Además, el país carecía de los recursos fundamentales necesarios para invertir en servicios públicos, debido a una de las relaciones impuestos-PIB más bajas del mundo (solo 3,6% en 2019)¹⁶⁴. Los ataques a los salarios de los trabajadores del sector público son inaceptables en tal contexto; ahora es necesario enfocarse en aumentar los ingresos mediante reformas fiscales para invertir en los empleados públicos.

Fuente: ActionAid Nigeria y Nigeria Labour Congress (agosto de 2021) Trends in Public Sector Wage Bills in Nigeria and Effects on Public Service Delivery

5. IMPACTOS PREVISTOS E IMPREVISTOS

Existe la creencia generalizada, y su uso rutinario, de que los objetivos de recortar o congelar a los empleados públicos tienen la clara intención de ayudar a los países a estabilizarse o desarrollarse de alguna forma. Si la visión de ‘desarrollo’ del FMI es deseable o si tiene éxito en esos objetivos ya es harina de otro costal¹⁶⁵. Y junto con los impactos previstos cuestionables también vienen (lo que asumimos son) los impactos imprevistos en la práctica.

5.1 ¿CREAR UN MARGEN DE MANIOBRA FISCAL PARA EL ‘DESARROLLO’?

La lógica predominante usada para recortar el gasto salarial en el sector público es solventar la ausencia de margen de maniobra fiscal o, en términos más positivos, crear un mayor margen de maniobra fiscal para el desarrollo. Nuestra revisión de varios documentos encontró diversas formulaciones de este argumento, pero en esencia **el mantra más común es: los países deben recortar su gasto en servicios públicos para aumentar su gasto en servicios públicos. ¡Qué cosa tan extraña!**

Por supuesto, esto no es tan simple y circular. El verdadero mensaje es que se debe recortar el gasto recurrente en los salarios del sector público para liberar fondos para la inversión de capital en servicios públicos. En algunos casos, esto se afirma explícitamente y en otros casos queda implícito. En casi todos los casos, la justificación es que el gasto de capital beneficia más a los pobres que el gasto en los salarios de los empleados públicos:

- En el Artículo IV de 2018 para **Bangladesh**, encontramos la recomendación de aplicar políticas fiscales que aseguren que *‘el gasto social en los pobres [sea] protegido a través de restricciones’* en el gasto recurrente.
- En la revisión ECF 2012 para **Kenia**, encontramos la siguiente afirmación: *‘Controlar el gasto salarial del Gobierno puede también rendir ahorros significativos... para crear el tan necesario margen de maniobra fiscal para el gasto social y de desarrollo prioritarios’*.
- El Artículo IV de 2018 para **Liberia** muestra que las autoridades *‘contendrán los costos recurrentes, incluyendo el enorme gasto salarial, para ayudar a crear el margen de maniobra fiscal tan necesario para la inversión en proyectos que promuevan el crecimiento y el gasto objetivo orientado a los pobres’*. Esto se ve reafirmado por el Artículo IV de 2019 que estipula: *‘El creciente gasto salarial se financia a costa del gasto de capital y el gasto social tan necesarios’*.
- La revisión ECF de 2017 para **Malawi** incluye la recomendación de *‘fortalecer el control sobre el gasto salarial y otros gastos corrientes y cambiar la composición del presupuesto a favor de un mayor gasto de capital y social’*. El Artículo IV de 2018 refleja esto cuando aconseja *‘contener el gasto salarial para ayudar a financiar las necesidades de gasto social’*. El ECF de 2020 muestra que *‘el personal está preocupado sobre la reciente decisión de otorgar un gran incremento en los salarios del sector público que probablemente sea permanente y pudiera limitar el margen de maniobra fiscal disponible para avanzar en importantes iniciativas de desarrollo’*.
- El Artículo IV de 2016 para **Nigeria** advierte que *‘Racionalizar el gasto recurrente es clave para asegurar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos’*. También se repite un mantra continuo en los cinco documentos del Artículo IV para Nigeria que revisamos (2016-2020) sobre la necesidad de *‘contener el gasto recurrente para conservar los escasos recursos para la inversión pública’*.
- El Artículo IV de 2016 para **Sierra Leona** *‘exhorta a las autoridades a congelar el gasto salarial nominal en 2017... mientras abre el paso al gasto prioritario en áreas como protección social, energía, educación y salud’*.
- En el documento de 2016 para **Zimbabue** encontramos: *‘los costos de empleo del sector público se mantienen en un nivel insostenible, lo cual restringe el gasto social y en infraestructura’*.
- El Artículo IV de 2020 para **Brasil** estipula que *‘Reducir el gasto obligatorio [incluyendo costos de personal] ... es esencial para liberar espacio para un gasto más productivo’*.

Los ejemplos de esta narrativa son casi infinitos y todos sugieren que existe un trueque entre el gasto social y los salarios del sector público. Esto es aún más evidente en el Artículo IV de 2016 para Bolivia que observa *‘ineficiencias en el gasto en educación’* como *‘el gran gasto en salarios e inversión en educación primaria que deja un mínimo para el gasto recurrente no salarial como libros para bibliotecas y equipo de laboratorio’*. El gasto del sector público es presentado como un obstáculo para el desarrollo, algo que bloquea el verdadero gasto prioritario, incluyendo en educación y salud.

La falta de lógica de esto es evidente. La inversión en los salarios del sector público es gasto social y en muchos casos el gasto más importante en sectores prioritarios para el desarrollo, incluso en los propios términos del FMI.

En general, 48% de los salarios del sector público corresponde a trabajadores de la educación y la salud. La Tabla 4 ilustra claramente como el gasto en los trabajadores de la salud es particularmente desigual y sorprendentemente bajo en África y el Sur de Asia. Es difícil hacer un desglose, pero podemos asumir razonablemente que los otros trabajadores incluyen a personas que trabajan en gobiernos locales, municipales o distritales, recolectores de desechos, trabajadores de agua y saneamiento, policías y funcionarios de tribunales, aquellos involucrados en el funcionamiento de programas de protección social y aquellos que se ocupan del cuidado de jóvenes y ancianos¹⁶⁶. Las anécdotas ocasionales de trabajadores fantasmas y funcionarios burocráticos perezosos se usan para sugerir que los empleados públicos no están involucrados como un todo en el desarrollo o que no son una prioridad del gasto social, lo cual pone al descubierto la naturaleza del argumento.

Tabla 4. Porcentaje de personal del gasto salarial en el sector público por PIB por región

	Educación	Salud	Administración pública	Otros
Global	30%	18%	34%	18%
África subsahariana	25%	9%	29%	36%
Sur de Asia	26%	9%	37%	28%
América latina	32%	13%	41%	13%
Europa y Asia central	32%	30%	31%	8%

Fuente: World Bank: Worldwide Bureaucracy Indicators Dashboard – mayormente 2019

En algunos sectores esto es más claro que en otros. **La sugerencia de que es necesario recortar el gasto en maestros para mejorar la educación no tiene sentido para nadie que trabaje en la educación.** Nada es más importante para la calidad del aprendizaje que un maestro de calidad, y los salarios de los maestros a menudo representan 90% del presupuesto educativo en todo el mundo. Los maestros son el gasto social necesario en la educación. Una revisión realizada por un Grupo de evaluación independiente de las inversiones del Banco Mundial de miles de millones de dólares en educación durante 14 años encontró que casi la mayoría del gasto del Banco Mundial estaba destinado a infraestructura escolar y todos los proyectos fueron declarados un éxito para ese momento. Sin embargo, solo unos años más tarde, 50% de los edificios estaban abandonados y eran usados como almacenes o corrales porque no se había hecho una inversión equivalente en los maestros¹⁶⁷. El más reciente análisis hecho por Oxfam de la respuesta del Banco Mundial a la crisis del Covid-19 encontró que *‘Solo 35% de los proyectos (25 de 71) incluyen apoyo para movilizar trabajadores sanitarios adicionales’*¹⁶⁸, lo cual sugiere que, a pesar de la evidente necesidad de dar prioridad a los trabajadores de la salud en este momento, las inversiones en infraestructura siguen dictando la pauta.

El argumento de que invertir en los trabajadores del sector público no es gasto social también subestima la enorme contribución que los servicios públicos con perspectiva de género y la protección social pueden ofrecer para solventar la actual carga desproporcionada del trabajo doméstico y el cuidado no remunerado de las mujeres (estimado en 13% del PIB global y \$US 10,8 billones anuales) e ignora el hecho de que las mujeres tienen más probabilidades de encontrar un trabajo digno en el sector público¹⁶⁹. **Sugerir que la pobreza y la desigualdad de género se resolverán recortando los trabajos de los que dependen las mujeres no tiene ningún sentido.**

Quizá no deba sorprendernos que cuando el FMI establece ‘pisos de gasto social’ en sus programas de préstamo, supuestamente para defender la salud y la educación, **no se incluyan** los salarios de los trabajadores de la salud y la educación.

CUADRO 14: GHANA, SALUD Y EDUCACIÓN EN EL PUNTO DE MIRA

Desde el programa de rescate de 2015, el FMI impuso medidas de austeridad en Ghana, y reducir el gasto salarial público ha sido la medida principal para recortar el gasto gubernamental. Esto ha producido un congelamiento de las contrataciones en la mayoría de las agencias del Gobierno y estableció un techo de los incrementos del salario nominal¹⁷⁰. Tras unas protestas generalizadas, se acordó un aumento por debajo del índice de inflación en 2021¹⁷¹, pero se espera que los salarios reales se mantengan congelados por algún tiempo¹⁷². Esta situación contraviene un contexto en que Ghana ya tiene uno de los niveles más bajos de salarios en el sector público de la región de África occidental¹⁷³. Esta crisis financiera es exacerbada por la baja (y en franco deterioro) relación impuestos-PIB de Ghana, que se mantuvo en un 12,8% del PIB, en comparación con el promedio subsahariano de 15% en 2019.

La porción del gasto salarial en el sector público en el gasto total ha disminuido en los últimos años, dado que un aumento en el servicio de la deuda ha erosionado aún más los presupuestos gubernamentales. Esta situación se ha tornado cada vez más insostenible, ya que el porcentaje del ingreso gubernamental que se destina al servicio de la deuda se ubicó por encima del 40% entre 2016 y 2019 y en más de 55% en 2020. Esto es cuatro veces el umbral de sostenibilidad del FMI, de 12%¹⁷⁴. Para ilustrar mejor esto, entre 2016 y 2020 el Gobierno ha gastado dos veces el monto que debería destinar a todos los empleados del sector público de la educación y la salud en servicio de la deuda.

La asesoría del FMI también ha desempeñado un rol al reducir el gasto salarial público, el cual sufrió un recorte sustancial de 2,9 puntos porcentuales entre los Años Fiscales 2015 y 2018, de acuerdo con las últimas cifras disponibles en el Artículo IV y los documentos de préstamo revisados. En el Artículo IV de 2017, el FMI señaló al 'alto gasto salarial' como una de las 'mayores deficiencias estructurales en el manejo de la economía' de Ghana. Y por ello le instruyó recortar el gasto salarial de su presupuesto en 0,9 punto porcentual durante dos años, para llegar a 7,8% del PIB. La Revisión ECF de 2019 recomendó alcanzar el 'objetivo de crecimiento del gasto salarial' y dio una directriz presupuestaria de congelarlo a un nivel aún más bajo de 66% para el periodo de los Años Fiscales 2018-2021. Asimismo, aunque los documentos de 2019 y 2020 que revisamos permitían algunos aumentos del gasto salarial, adherirse a los más recientes objetivos aún generaría un recorte de 1,8 punto porcentual entre los Años Fiscales 2016 y 2024.

Quizá lo más preocupante es que hay evidencia de que los trabajadores de la salud y la educación han sufrido los impactos más brutales. Los aumentos de salarios en educación han caído de forma consistente por debajo de la tasa de inflación desde 2016 y nadie se ha ocupado de los déficits de maestros. Ghana debe contratar un 15% más de maestros de primaria cada año para 2030, lo cual luce casi imposible mientras persistan las restricciones del gasto salarial en el sector público.

El gasto en salud también está en franco declive: de 9,6% del presupuesto en 2016 a 5% en 2020. Igualmente, existe una necesidad urgente de expandir el gasto público para atender déficits graves de trabajadores de la salud y ofrecer una respuesta integral a la pandemia del Covid-19. Por ejemplo, el promedio médico-paciente es de 1:8.132, lo cual excede ampliamente el umbral global de la OMS de 1:1000. A pesar de dichos déficits graves, el estudio encontró una tasa de vacantes de 41% o 47.758 puestos vacantes en los servicios de salud¹⁷⁵, mientras un gran número de profesionales de la salud graduados (más de 41.000¹⁷⁶), la mayoría de los cuales son mujeres, aún esperan encontrar un empleo.

Fuente: ActionAid Ghana (2021) Trends in Public Sector Wage Bill (Education and Health) and the Forces Behind Wage Freezes

5.2 PROGRESO DEL FUNDAMENTALISMO DE INFRAESTRUCTURA

Tal como hemos comprobado, una poderosa intención detrás de la imposición de restricciones salariales es liberar fondos para invertirlos en infraestructura. La lógica del FMI (y de demasiados Ministerios de Finanzas) pone a *las cosas por delante de la gente*: privilegio de las inversiones sobre los costos recurrentes. El desarrollo real significa construir cosas. La inversión de capital equivale a inversión social.

La gran preferencia de la infraestructura física por encima de la gente es el fundamentalismo que contribuye a imponer la contracción sin fin del gasto salarial en el sector público. Y esta preferencia afecta enormemente según el género,

puesto que la mayoría de los trabajadores de los sectores sociales de los servicios públicos son mujeres, aunque los hombres predominan en la construcción. De acuerdo con el Women's Budget Group basado en el Reino Unido, **invertir 1% del PIB en cuidado infantil en lugar de en la construcción crearía 2,7 veces más trabajos, más de un tercio de los que crearía en industrias ajenas al cuidado infantil**¹⁷⁷.

A veces, esta intención se hace aún más evidente. Los documentos del FMI sobre Malawi, Nigeria, Sierra Leona y Zimbabue mostraban una conexión directa entre recortar el gasto salarial e incrementar el gasto en infraestructura.

- El Artículo IV de 2018 para **Liberia** observa que *'los directores saludaron los esfuerzos de las autoridades por contener el gasto salarial público y los exhortó a redirigir el gasto presupuestario hacia el gasto de capital, especialmente hacia la renovación de infraestructura'*. El documento se enfoca mayormente en carreteras y electricidad.
- El Artículo IV de 2018 para **Malawi** recomienda *'contener el gasto salarial para ayudar a financiar las 'enormes necesidades en infraestructura y gasto social ... especialmente electricidad, carreteras, telecomunicaciones, agua y riego'*. La principal justificación es que esto ayudará a apoyar el crecimiento, un mejor entorno de negocios y la diversificación económica.
- El Artículo IV de 2018 para **Nigeria** advierte *'seguir racionalizando los gastos actuales para abrir paso al tan necesario gasto de capital para cerrar la brecha en infraestructura', mientras que el Artículo IV de 2019 subrayó que: 'el gasto presupuestado seguirá relativamente plano, con un gasto recurrente más bajo compensado por un gasto de capital más alto'*. En esos documentos, la infraestructura se refiere principalmente a electricidad, energía, carreteras e infraestructura portuaria, bajo el argumento de que estos *'mejorarán los resultados de desarrollo humano'*.
- Las Solicitudes ECF 2017- 2018 de **Sierra Leona** comprometen al Gobierno a *'reorientar el gasto hacia la infraestructura y la protección social'* y el último documento también destaca que la estrategia fiscal de medio plazo incluye *'reformas para contener el gasto salarial y dar prioridad al gasto de capital'*.
- El Artículo IV de 2016 para **Zimbabue** recomendó *'una reducción significativa del gasto salarial, mientras se reequilibra el presupuesto hacia la tan necesaria inversión en infraestructura y gasto social para estimular el crecimiento'*.

En muy pocos casos, las referencias a infraestructura incluyen camas de hospitales o edificios escolares o incluso cualquier gasto de capital significativo en salud y educación. Dado que los grupos más afectados por las restricciones del gasto salarial en el sector público son los maestros y los trabajadores sanitarios, y que el fundamentalismo de infraestructura desvía por ende los recursos lejos de ese sector, **se da un golpe doble a la salud y a la educación: menos dinero para contratar personal y muy poco en camino para el aumento del gasto de capital**. Sin embargo, la educación y la salud son vistos generalmente como sectores claves para cumplir con los derechos humanos y lograr la tan ansiada igualdad de género, y la mayoría de la gente esperaría, en consecuencia, que esos dos sectores se incluyan como un gasto prioritario para el desarrollo.

El Artículo IV de 2019 para Brasil es quizás el más explícito de todos en vender esta narrativa, y recomienda que debe recortarse el gasto en salud y educación para financiar la inversión en infraestructura: *'Reducir la brecha en infraestructura requerirá una inversión significativa. Dado que el margen de maniobra fiscal se encuentra ahora en riesgo, el personal ha identificado a la educación y la salud como áreas potenciales para aumentar los ahorros en eficiencia'*. Ignora además los impactos negativos que esto tendrá especialmente en las mujeres y el documento prosigue diciendo que: *'las autoridades deben considerar establecer revisiones formales del gasto para contribuir con el ajuste fiscal'*¹⁷⁸. Igualmente, el Artículo IV de 2020 para Brasil recomienda como acción prioritaria *'Eliminar los requisitos mínimos para el gasto estatal en educación y salud'*. Puesto que estos compromisos de gastos fueron garantizados por la constitución brasileña, las directrices del FMI son alarmantemente anti democráticas, así como anti desarrollo (ver Cuadro 6).

Esto se está convirtiendo en un tema crucial no menor porque *'en todo el mundo los gobiernos están usando la pandemia y la crisis climática para justificar un nuevo derroche del gasto en infraestructura'*¹⁷⁹. Evidentemente, algunas inversiones en infraestructura pueden ser transformadoras, como inversión en transporte público, vivienda, agua y saneamiento, escuelas, hospitales y parques. Pero estas normalmente no son los proyectos de infraestructura prioritarios para el FMI, **muchos de los cuales exhiben problemas serios, ya sea un mayor enriquecimiento para los constructores y no para los usuarios, mala relación inversión-calidad, exageración de los beneficios ambientales o subestimación de la gran huella de carbono del concreto**. Al final, *'ya no podemos forjar nuestra ruta de salida de la crisis climática sin pasar por el consumo con el mismo objetivo'*¹⁸⁰.

CUADRO 15: ¿SEÑALES DE CAMBIO EN SENEGAL?

ActionAid exhorta a que se considere a los trabajadores del sector público como parte esencial de la infraestructura de un país, una parte que debe protegerse y en la que se debe invertir, incluso en el punto más álgido de una recesión. Esto requiere valorar a la fuerza laboral como elemento crucial en la construcción y el desarrollo de una nación. Reconocer los salarios del sector público como una inversión y no solo como un costo operativo es un primer paso fundamental. Proteger esas inversiones vitales en tiempos de restricción fiscal es el siguiente paso, especialmente porque el capital y los trabajadores son vistos a menudo como rivales en tiempos de restricciones fiscales.

Actualmente, Senegal ofrece una perspectiva interesante. Conforme al plan nacional de desarrollo, *Plan Sénégal Emergent*, el Gobierno ha redefinido la 'inversión pública' para incluir al 'capital humano', el cual es una infraestructura esencial¹⁸¹. En tal sentido, ha reclasificado a los trabajadores de la salud y la educación como 'inversión pública' en su planificación fiscal y presupuestaria. Este estatus elevado brinda a estos sectores una mayor seguridad frente a recortes en discusiones con el FMI. De hecho, el Artículo IV de 2017 del FMI observa que, aun cuando se hicieron esfuerzos por lograr la consolidación fiscal, debe hacerse esfuerzos por "abrir espacio para mayores inversiones en capital humano e infraestructura pública". Esta idea está ganando apoyo entre la sociedad civil senegalesa, incluyendo de movimientos laborales y del movimiento educativo confederado¹⁸². Estos pasos iniciales en Senegal sientan un ejemplo para otros países sobre cómo ver a los trabajadores públicos según lo que son: un motor de crecimiento y desarrollo.

5.3 ABRIR PUERTAS AL SECTOR PRIVADO Y COBRAR TARIFAS POR SERVICIOS PÚBLICOS

Una de las consecuencias esperadas de restringir los salarios del sector público es fortalecer al sector privado, tanto nacional como internacionalmente, y esto resuena con la agenda del Banco Mundial de Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo¹⁸³. Nuestro análisis de la 'prima del sector público' (ver sección 4.2) explica cómo la presión por reducir los pagos en el sector público está orientada a hacer al sector privado más competitivo, pero puede producir una eterna espiral descendente. Esto es casi seguramente un factor que inclina la preferencia del FMI por la infraestructura, pues la obra puede ser licitada a proveedores privados, a diferencia de los trabajadores de primera línea. Cada vez resulta más claro que uno de los objetivos de expandir la disponibilidad de financiamiento público para la infraestructura es reducir los riesgos de los inversionistas privados, ofreciéndoles *'incentivos que incluyan varios tipos de subsidios y garantías'*¹⁸⁴. Mientras asfixia al sector público, el FMI sigue convencido de que África en particular *'necesita movilizar más financiamiento de y para el sector privado'*¹⁸⁵.

En nuestra revisión, encontramos algunos ejemplos directos de documentos del FMI que apoyan la privatización y asociación con el sector privado y la aplicación de tarifas a usuarios por servicios públicos para ayudar a lograr la consolidación fiscal:

- En **Zimbabue**, que ha enfrentado cinco años de recortes o congelamientos del gasto salarial en el sector público [ver Tabla 1], el Artículo IV de 2017 instó a: *'Avanzar hacia una reevaluación más fundamental del rol del estado en la economía que podría abrir posibilidades para una racionalización más profunda del sector público, con el fin de conseguir un gobierno más pequeño, pero más eficaz'*¹⁸⁶. Esto se evidencia aún más en el Artículo IV de 2019: *'Reducir la huella de carbono del gobierno en la economía apalancando al sector privado'*.
- En **Vietnam**, que ha enfrentado seis años de recortes o congelamientos del gasto salarial en el sector público, el Artículo IV de 2016 destacó que: *'las autoridades... esperan restringir el gasto social aumentando las tarifas de la educación y la salud pública para incentivar un mayor uso de servicios privados'* y *'las autoridades... observaron planes de incrementar la participación de actores no estatales en educación y salud y reducir costos en el presupuesto'*. Esto fue aplaudido en el Artículo IV de 2018 que observó *'mayores tarifas en salud y educación mantuvieron el gasto corriente bajo control'*. No obstante, hubo algún reconocimiento de los riesgos potenciales involucrados: *'las reformas para aumentar la recuperación de costos y dar cabida a la educación y la salud privada deben diseñarse cuidadosamente para asegurar acceso a todos y proteger a los pobres,*

mientras se eleva la calidad del servicio’. Esta ligera advertencia no muestra realmente ninguna evidencia de que la privatización casi siempre aumenta las desigualdades y perjudica sustancialmente el acceso a los pobres. Tampoco explica por qué la gente debe pagar el doble por acceder a servicios públicos: primero, mediante sus impuestos, y segundo, mediante tarifas de acceso (la forma fiscal más regresiva).

- En **Kenia**, que también ha enfrentado seis años de restricciones del gasto salarial en el sector público, el Artículo IV de 2016 menciona que es necesario legislar para *‘aclarar los poderes de los condados para establecer impuestos / tarifas de usuarios’*, y el Artículo IV de 2018 destacó que: *‘las autoridades son conscientes del limitado margen de maniobra fiscal y por ende impulsarán las asociaciones con el sector privado’*. No queda claro qué sectores cubre esto, pero parece extraño que un país que logró tan notable éxito al eliminar las matrículas de estudiantes de la educación primaria en 2002, lo cual permitió la inscripción en la escuela por primera vez de 2 millones de niños¹⁸⁷ (y de un hombre de 84 años¹⁸⁸). Sin embargo, el consejo se sigue dando y el informe ECF de 2021 sugirió que las PPP ayudarán a reducir el gasto gubernamental mediante *‘la expansión eficiente y sostenible de nuestro programa de PPP’*. Esto indica que el objetivo principal es reducir el gasto gubernamental como un fin en sí mismo y no una vía para alcanzar el desarrollo.
- En **Malawi**, que enfrentó cuatro años de recortes o congelamientos del gasto salarial en el sector público, el Artículo IV de 2018 afirmó: *‘Asociarse con el sector privado y socios de desarrollo brindaría soporte adicional’* y además observó planes para *‘incrementar las tarifas y cargos a los usuarios...y mejorar su ejecución’*, (aunque, nuevamente, no se especifica en qué sectores). No se reconoce la forma en que las tarifas al usuario exacerban las desigualdades económicas, sociales y de género y empeoran los resultados de desarrollo.
- En **Senegal**, que ha enfrentado cinco años de recortes y/o congelamientos del gasto salarial, recientes documentos (la Solicitud de Instrumento de Coordinación de Política de 2020 y su Revisión de 2021) muestran que el Gobierno planea *‘depender de las PPP’* para el desarrollo y la recuperación de la pandemia del Covid-19. No hay mención de la creciente evidencia sobre los efectos perjudiciales de las PPP en la salud, mucho menos de los costos adicionales que pueden generar a los gobiernos¹⁸⁹.
- En **Brasil**, con cinco años de restricciones salariales, el Artículo IV de 2016 y 2017 menciona a las PPP respaldadas por la Corporación Financiera Internacional (IFC) – el brazo en el sector privado del Banco Mundial – y afirma que *‘la IFC ha proporcionado... servicios de asesoría, incluyendo para proyectos de PPP (carreteras, salud, educación)’*. El Artículo IV de 2020 celebra *‘74 proyectos [PPP y privatización] que están siendo estructurados...en algunos sectores como agua y saneamiento, puertos, autopistas, alumbrado público, distribución de energía, entre otros’*.

Existen casos de documentos del FMI que recomiendan a los gobiernos reforzar la supervisión de las PPP para reducir riesgos, pero esto está muy generalizado y en la práctica los mayores riesgos y costos para los gobiernos son considerables en casi todas las PPP¹⁹⁰. Eurodad ha documentado el doble discurso del FMI sobre las PPP¹⁹¹, y su revisión de las PPP en 2018 encontró altos costos para el erario público, altos riesgos para el Estado y el sector público, y que además carecían de transparencia, eran interlocutores complejos para negociar, a menudo su acción afectaba negativamente a los pobres o dañaba el medio ambiente y deben, por ende, combatirse¹⁹². Los impactos de género de las PPP también han sido ampliamente documentados por la Red de Género y Desarrollo¹⁹³, entre otros. Además, existen pruebas contundentes de que la privatización incrementa notablemente la corrupción¹⁹⁴. Las alternativas progresivas son claras: invertir en servicios públicos de alta calidad, financiados por el sector público, controlados democráticamente, responsables, sostenibles y con perspectiva de género¹⁹⁵.

A pesar de que algunos actores del FMI expresan preocupaciones sobre la privatización, la recomendación a nivel de país parece muy consistente y pinta al sector público como el problema y a la mayor participación del sector privado como la solución¹⁹⁶. Esto parece ser una mentalidad arraigada muy profundamente en el FMI que fue sacada a colación en una de nuestras conversaciones con un economista senior del FMI, quien comentó: ***‘El sector público solo debe prestar servicios en áreas en que el sector privado no pueda producir ganancias’***.

Esta es quizá la definición más débil y minimalista del sector público que se pueda encontrar. **En tan solo una frase arrasa con los marcos de derechos humanos, acaba con cualquier indicio de un contrato social entre el pueblo y sus gobiernos y presupone que el objetivo principal del gobierno debe ser maximizar las ganancias de un accionista**, en lugar de expandir el bienestar público. Esta quizá sea una posición mucho más fundamentalista que las que defienden otros actores del FMI, pero el hecho de que haya sido expresada por un economista senior en una conversación con otros economistas senior del FMI sugiere que no carece de representatividad. Afortunadamente, esa visión se aleja del creciente consenso que se observa en otras instituciones como la OMS, que cada vez más enfatiza la importancia del sector público para lograr una cobertura universal de salud¹⁹⁷.

5.4 ELIMINAR LOS SINDICATOS

En muchos países de ingresos bajos y medios, ser miembro de un sindicato en el sector privado es muy raro, mientras que los sindicatos más fuertes son los del sector público. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) da seguimiento general a las membresías de los sindicatos, las cuales varían ampliamente de país en país¹⁹⁸, y los datos de los países recabados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) muestran un descenso generalizado en la adhesión a sindicatos desde inicios de 1980¹⁹⁹.

En las últimas décadas ha habido una carrera a la baja en materia de derechos laborales y esa reducción se corresponde con el reclamo de los trabajadores por una mayor asignación del ingreso nacional y la disminución de la desigualdad de los ingresos. Incluso el FMI concuerda con que *‘El declive de los sindicatos en las últimas décadas ha alimentado la acumulación de recursos en las clases más altas’*²⁰⁰. Aunque los datos de los países de ingresos bajos y medios son menos exhaustivos, parece evidente que la existencia de sindicatos en el sector privado es más cuesta arriba y que los sindicatos que aún ejercen mayor presión política son aquellos que representan al sector público. Y como los maestros son el segmento más amplio de los trabajadores del sector público en la mayoría de los países, no sorprende que los sindicatos de maestros sean a menudo los más fuertes.

Restringir el gasto salarial en el sector público permite a los gobiernos resistir frente a las exigencias de los sindicatos y les facilita culpar de la situación a fuerzas externas: el FMI. Además, los gobiernos pueden resistir las presiones por aumentos de salarios enfrentando entre sí a diversos sectores e incluso enfrentando entre sí a otros sindicatos en el sector público cuando luchan por obtener una mayor parte de un presupuesto decreciente a costa de otros actores.

Nuestra revisión del Artículo IV y nuestra investigación de país arrojaron que, en algunos casos, los incrementos del gasto salarial en el sector público o la resistencia a recortes de salarios han sido posibles gracias a la actuación de sindicatos o a protestas de calle:

- En **Ghana**, tras una reducción del gasto salarial como un porcentaje del PIB de 2,9 entre los Años Fiscales 2015 y 2018, el Artículo IV de 2019 muestra que *‘El presupuesto incluye un incremento del gasto salarial de 15 por ciento luego de negociaciones con sindicatos’*. La Revisión ECF de abril de 2019 (publicada ocho meses antes) también mostró que los criterios de rendimiento del gasto salarial se han perdido porque el *‘gobierno fue exhortado a implementar una acción única de absorber enfermeros y maestros adicionales en la nómina para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en cuanto a las relaciones estudiante-maestro y paciente-enfermero’*.
- **Malawi** es el único país que espera un incremento del gasto salarial en el sector público (ver Tabla 1 – un porcentaje de 1,2 punto durante un periodo de siete años, en los Años Fiscales de 2016 a 2023) y parece que esto se logró tras presiones considerable de los sindicatos y la sociedad civil, apoyados por el Ministerio de Educación, el cual estaba frustrado por no poder contratar y desplegar a los maestros que habían capacitado. Es importante destacar que el FMI recomendó abiertamente no hacer este aumento²⁰¹.
- En **Senegal**, el Artículo IV de 2018 incluye una revisión de progreso desde el Artículo IV de 2016, donde se observó que: *‘Se han hecho esfuerzos por contener el consumo público, tal como lo evidencia una caída en los gastos corrientes con respecto al PIB en 2017. Sin embargo, las protestas de calle de estudiantes y trabajadores de la salud y la educación a principios de 2018 y la falla en no aumentar los precios de la energía en el país de cara al aumento global de los precios del petróleo han producido un aumento de salarios y transferencias en 2018’*.
- En **Zimbabue**, el Artículo IV de 2017 establece que *‘la sugerencia de pagar el 13vo salario en tierras y no en moneda fracasó debido a una huelga de maestros y trabajadores sanitario’*.

El tono de estas declaraciones sugiere que la presión de los sindicatos o las protestas de calle fueron elementos perturbadores que impidieron la ejecución de una política sólida. **Los sindicatos y las protestas son vistas por el FMI como un obstáculo, en lugar de como un barómetro de lo que es inaceptable al aplicar los recortes.** No sería entonces descabellado sugerir que parte del texto subyacente de las restricciones del gasto salarial en el sector público dicta disminuir activamente el poder del movimiento sindical²⁰². Esto puede lograrse de muchas formas: reduciendo su número total de miembros, limitando directamente el derecho a la huelga o la protesta, acabando con la sindicalización al privatizar o tercerizar o llevando a los nuevos trabajadores del sector público a firmar contratos temporales que pueden rescindirse fácilmente, lo cual enfrenta a los trabajadores al temor constante de perder sus empleos. También hay muchas otras formas en que los gobiernos están eliminando los derechos de trabajadores

y sindicatos²⁰³ y muchas otras formas en que *‘las medidas de política de mercado laboral del FMI reducen los derechos individuales y colectivos’*²⁰⁴, pero las restricciones generales del gasto salarial en el sector público ofrecen una base y un entorno conducentes²⁰⁵.

Una pregunta seria para aquellos interesados en el gasto salarial en el sector público es la siguiente: ¿es mejor establecer niveles con base en las recomendaciones de los economistas del FMI o mediante un proceso de participación de contratación colectiva con órganos de representación nacionales como los sindicatos? ¿Cuál de los dos es la verdadera distorsión?

CUADRO 16: LA MAYORÍA DE LOS PROGRAMAS DEL FMI FRACASAN

Una reciente investigación de Reinsberg y Stubbs sugiere que la mayoría de los programas del FMI fracasan, en parte debido a sus políticas relacionadas con el sector público²⁰⁶. Los investigadores evaluaron datos detallados de cumplimiento de todos los 763 programas del FMI entre 1980 y 2015 para probar si las condiciones estaban relacionadas con la interrupción del programa. Así, encontraron que cada condición adicional aumenta la probabilidad de que se interrumpa un programa en al menos 1,1%: un efecto moderado dada la tasa promedio de fracaso de 58,6%. Sin embargo, los programas normalmente incluyen 22 condiciones como esas, lo cual aumenta la probabilidad de fracaso. Las condiciones de privatizar empresas estatales, liberar precios y reformar el sector público tendían especialmente a provocar el fracaso de la implementación. Esto se debe a que las condiciones generan una resistencia interna que puede obstaculizar la implementación del programa. Aunque las restricciones del gasto salarial en el sector público no se han usado [abiertamente] como una condición de rutina adjunta a los préstamos desde 2007, probablemente hayan sido una causa de los 27 años de fracasos previos.

5.5 RECORTAR CON LA HERRAMIENTA MÁS CONTUNDENTE

En 2007, la Junta Directiva del FMI se distanció de la imposición de límites al gasto salarial en el sector público como condición para los préstamos, en parte porque se arriesgaban a bloquear un aumento del gasto proveniente de ayudas y en parte porque eran muy ineficaces. **Un límite, recorte o congelamiento generalizado del gasto salarial total en el sector público puede desencadenar un amplio abanico de acciones de los gobiernos, algunas de los cuales contravienen los resultados que desea ver el FMI.** Hasta la fecha, los límites son una herramienta contundente que conduce a un comportamiento incoherente y no deberían tener cabida en la planificación de los Ministerios de Finanzas o el FMI.

Asumiendo que no existe más orientación, un gobierno que pretenda realizar un recorte o congelamiento generalizado del gasto salarial en el sector público deberá tomar decisiones como:

- pagar a los trabajadores menos o pagar por menos trabajadores;
- hacer despidos en un sector y pagar los recortes en otro;
- ofrecer aumentos de sueldo en un sector, equilibrado con recortes importantes de pagos en otro;
- recortar servicios de primera línea o defensa;
- reducir las pensiones del sector público o forzar retiros prematuros;
- reformar las leyes laborales para mantener a los empleados con contratos precarios de corto plazo o renombrar los cargos como consultores, reenmarcar contratos, direccionar el pago mediante un contratista privado o llevar una contabilidad creativa en otras formas;
- vender empresas estatales o licitar ciertos servicios;
- privatizar servicios completos o contratar ciertos roles;
- enfrentar un legado de clientelismo en el servicio público o impulsar una nueva era de castigo al personal ligado con partidos de oposición;
- perseguir sindicatos o empleados fantasmas.

El punto es que un recorte o congelamiento general no es en sí mismo un objetivo o dirección, pues **puede crear toda clase de presiones y distorsiones inesperadas. Es una ametralladora, no un rifle de precisión. Ni siquiera es**

una política significativa, sino el indicador de una mentalidad. Además, traiciona e ilustra una ideología, un sesgo, un prejuicio profundo e injustificado. Tal como ocurre con todos los prejuicios, alimenta una imagen y se alimenta de una imagen fijada en el inconsciente de la gente: un burócrata sobrepagado y obeso sentado en un escritorio dictando normativas innecesarias. En realidad, se trata a todos los empleados públicos como si fueran iguales, agrupándolos en una sola identidad. Esta imagen construida tan a la ligera podría ser la falacia sobre la cual la política ha estado asentada por décadas.

El objetivo más fácil siempre es el ‘burócrata’, pero es necesario reevaluar nuestros prejuicios²⁰⁷. La coordinación y la administración son la columna vertebral de la capacidad del Estado y crucial para que cualquier servicio funcione de forma eficiente. Existe mucha evidencia de que los sistemas nacionales de salud son más eficientes que los sistemas privatizados y fragmentarios de los Estados Unidos²⁰⁸. Concebir una buena política, en respuesta, por ejemplo, al Covid-19, puede salvar vidas. Si queremos crear políticas basadas en evidencia, necesitamos funcionarios que tomen esto en serio y puedan recopilar y analizar datos complejos para implementar intervenciones bien sustentadas²⁰⁹.

La preparación eficaz ante desastres y la planificación para emergencias sanitarias son difíciles de justificar cuando los presupuestos sufren presiones y, muy frecuentemente, cuando la burocracia se ve asfixiada por la austeridad, aparecen las brechas tan lamentadas, como ocurrió con el Covid-19²¹⁰. La respuesta a la crisis climática y a las implicaciones de adaptarse a ella requerirán una planificación meticulosa y una transformación de los servicios públicos, y eso dependerá de un personal administrativo capaz y comprometido²¹¹. La capacidad de regular mercados para asegurar que sean eficientes y no explotadores o extractivos depende de una sólida capacidad del gobierno. La política de tercerización al sector privado es una receta para socavar la democracia. El administrador fiscal en una oficina gubernamental es quizá visto como el epítome del burócrata público: y aun así el monto de impuestos recaudado por los gobiernos nacionales está estrechamente relacionado con las inversiones hechas en la administración fiscal²¹². ¿Acaso es más útil no retener impuesto sobre la renta de las empresas y personas más ricas que invertir en unos cuantos administradores más? De hecho, podemos aprender mucho de la colorida imagen ofrecida por el ex ministro de finanzas de India: *‘Nuestros recaudadores de impuestos son como abejas chupando néctar de las flores sin distribuirla, pero que riegan su polen para que todas las flores puedan crecer y dar frutos’*²¹³. Tal vez es tiempo de deshacerse de los viejos mitos, respaldar a los burócratas y levantar la voz en nombre de los trabajadores silenciados del sector público.

Los economistas senior del FMI mostraron empatía al ofrecer directrices a países para los cuales los empleados públicos eran importantes y subrayaron cómo, en la mayoría de los casos, los profesionales de la salud y la educación quedaban exentos de los recortes. Sin embargo, esto no era la regla en la mayoría de los documentos que revisamos. Solo en pocos ejemplos hallamos amplias referencias a los salarios o a la contratación de enfermeros y maestros que estaban exentos o protegidos en algún grado. **No obstante, en 10 de los 15 países, los documentos incluían la recomendación del FMI de recortar, congelar o limitar salarios y/o contratación de trabajadores del sector público, sin ninguna salvedad que especificara exenciones o protección para la contratación o compensación de trabajadores de la salud y la educación**²¹⁴. Esto pone a los trabajadores esenciales en la línea de mira de las medidas de recorte y austeridad. Nuestra investigación en países tan diversos como Ghana, Nepal, Zimbabue y Brasil documentaron el claro impacto de las restricciones del gasto salarial en los trabajadores de primera línea de la salud y la educación.

Incluso cuando se hacen excepciones, la orientación para ‘protegerlos’ de los recortes puede interpretarse como un ‘congelamiento’ del pago o la contratación. Y el resultado de la protección de enfermeros o maestros puede ser perjudicial para otros trabajadores esenciales del sector público, como bomberos, recolectores de desechos y cuidadores. En total, maestros y enfermeros son los roles que el público puede reconocer fácilmente por no ser burócratas perezosos, especialmente ahora que la pandemia ha resaltado la importancia de ambos en nuestras vidas. Apartarlos del montón facilita generalizar a todo el resto de trabajadores. Los enfermeros y maestros son vistos como los ‘buenos trabajadores’ o ‘trabajadores esenciales’, lo cual implica que los demás son ‘malos’ o ‘innecesarios’ o incluso burócratas fantasmas que salen sobrando. Esto ayuda a reunir apoyo popular para una política que casi seguramente no favorece el interés público.

Evidentemente, no queremos criticar que se valore y proteja a los trabajadores de la salud y la educación, pero debemos ser cautelosos sobre los recortes en otros sectores claves. Algunos de los documentos que revisamos

mencionan a otros trabajadores específicos que deben recibir algún nivel de protección o exención de recortes o congelamientos. Liberia, Kenia y Senegal incluyen una referencia a los empleados de la seguridad y Zambia menciona a la policía. Sin embargo, no existe explicación o análisis en los documentos del FMI sobre el impacto real o esperado de las recomendaciones del FMI en los diferentes sectores cubiertos por el gasto salarial. A veces, encontramos una modesta directriz en los documentos del FMI sobre las formas en que los gobiernos aplican el recorte o congelamiento general, por ejemplo, recortando pagos existentes o bloqueando nuevas contrataciones, pero estas son muy generalizadas:

- **Brasil:** *‘Medidas de rendimiento rápido... podrían incluir un congelamiento de la contratación’* (2017); *‘contener los gastos requiere ... contener los salarios y las contrataciones’* y *‘congelar la remuneración en términos nominales’* (2018); *‘limitar los incrementos del salario mínimo a los ajustes del costo de vida’* (2018 y 2019); *‘congelamiento de salario, contratación y promoción, con un techo sólido de la remuneración total por empleado’* y *‘alinear la compensación pública con el sector privado’* (2020).
- **Nigeria:** debería [resistir] *‘presiones para aumentar los salarios mínimos’* (2028); *‘se espera que el aumento de los salarios mínimos afecte el margen de maniobra fiscal...incrementando así el riesgo de acumulación de pasivos’* (2019) (ver Cuadro 13).
- **Senegal:** *‘limitar el monto de becas y la contratación (tanto en términos de empleados como de salarios) [en educación]’* (Artículo IV de 2017) e *‘implementar techos al empleo en el servicio público en 2019 debería ayudar a contener el gasto salarial’*. (Artículo IV de 2018).
- **Tanzania:** *‘el gasto corriente debe contenerse mediante un congelamiento de la contratación y el salario nominal con esfuerzos por reducir gastos generales en el sector público’*. (Artículo IV de 2016)
- **Zimbabue:** *‘[el personal] sugirió medidas más contundentes, como suspender el 13vo salario ... y comprimir el paquete de remuneración’*. (Artículo IV de 2017)
- **Vietnam:** *‘El gran gasto salarial debe racionalizarse recortando el número de empleados a un ritmo más rápido y vinculando los salarios al desempeño’*. (Artículo IV de 2018).

De algún modo, el hecho más sorprendente es que se ofrecen muy pocos detalles, lo cual refuerza la impresión de que se trata de un instrumento muy contundente que pudiera manejarse de muchas formas no previstas y que perjudican a los servicios públicos y a sus trabajadores. En tal sentido, es inconcebible que las evaluaciones de impacto previas y posteriores no sean un requisito de rutina.

5.6 MENOSCABAR LA SALUD, LA EDUCACIÓN, EL GÉNERO Y OTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO

A pesar de las afirmaciones del FMI de que la educación y la salud están ‘protegidas’ o exentas de los recortes del gasto salarial, no encontramos pruebas de ello en dos tercios de los países que estudiamos²¹⁵. Incluso cuando existen exenciones para proteger a maestros y enfermeros, el efecto puede ser la congelación de sus salarios, lo que con el tiempo constituye un recorte salarial en términos reales. En la mayoría de los países en los que no se prevén exenciones, sería muy difícil que los gobiernos consigan recortes sin reducir el personal educativo o sanitario, ya que éstos representan entre un tercio y la mitad del total de los trabajadores del sector público (ver Tabla 4 anterior). La evidencia proveniente de muchos países es que las restricciones generales del gasto salarial en el sector público han obstaculizado el progreso en materia de derechos humanos y los ODS de la salud y educación.

Los Gobiernos tienen la obligación, en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos, de ‘cumplir progresivamente los derechos económicos y sociales utilizando el ‘máximo de los recursos de que dispongan’ y evitando un ‘retroceso’ injustificado²¹⁶. Por lo tanto, es probable que los recortes generalizados del gasto salarial en el sector público contravengan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y quizá lo sean especialmente tras el impacto de Covid-19²¹⁷. Lamentablemente, el FMI sigue negando obstinadamente (y de forma errónea)²¹⁸ que los derechos humanos sean parte de su mandato, mientras que ha reivindicado públicamente su papel en la implementación de los ODS²¹⁹. **El FMI, los gobiernos y los Ministerios de Finanzas podrían y deberían, por tanto, documentar el impacto de sus políticas (ya sea inesperado o no) sobre los ODS.** Lo ideal sería que examinaran todos los objetivos y sus metas e indicadores asociados, pero especialmente el ODS 1 (sobre la pobreza), el ODS 3 (sobre la salud), el ODS 4 (sobre la educación), el ODS 5 (sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer), el ODS 8 (sobre el trabajo decente), el ODS 10 (sobre la desigualdad)

y el ODS 13 (sobre la acción climática). El impacto de la congelación del gasto salarial en el progreso hacia la consecución de estos objetivos debe proyectarse (por adelantado) y analizarse (en retrospectiva). Incluso plantearse sistemáticamente la pregunta sería un punto de partida y, a la luz del consenso mundial para dar prioridad a los ODS y la obligación de promover los derechos humanos, debería ser un requisito para responder sistemáticamente a este cuestionamiento.

El FMI ha identificado la igualdad de género como una cuestión macrocítica, que debería ocupar un lugar más destacado en su agenda. De hecho, han nombrado a un nuevo asesor senior en cuestiones de género y el Director Ejecutivo se ha atrevido a hacer los siguientes compromisos para avanzar en la igualdad de género. Es importante destacar que la Nota del FMI de 2018 sobre la Operacionalización del género en el trabajo de país²²⁰ insta a que *“Los equipos de país también piensen en el impacto de otras políticas macroeconómicas sobre el género. Por ejemplo, los recortes presupuestarios de subsidios y programas sociales, los **recortes del gasto salarial en el sector público** o el aumento de las tarifas de transporte podrían tener un mayor impacto en las mujeres. En estos casos, el personal podría considerar una combinación alternativa de políticas para evitar estos factores externos negativos o, si lo primero no es factible, sugerir algunas medidas paliativas”*.

No encontramos pruebas de que se haya analizado el impacto de género de las restricciones del gasto salarial en el sector público, ni de que el FMI haya buscado alternativas o propuesto medidas paliativas. Las mujeres son mayoría entre los trabajadores del sector público: 70% del sector sanitario y de servicios sociales, 90% de los enfermeros y una clara mayoría de los maestros de primaria. Y para muchas mujeres, las funciones del sector público ofrecen la mejor oportunidad de conseguir un trabajo digno. Las mujeres también son las más perjudicadas por los recortes en los servicios públicos, ya que tienen que hacerse cargo de las tareas de cuidados no remuneradas, como han demostrado una y otra vez tras las medidas de austeridad²²¹, que las redes de seguridad social paliativas y los programas de género específicos no pueden aliviar por sí solos²²². La pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto similar, ya que las mujeres han tenido que asumir aún más tareas domésticas y de cuidados no remuneradas y muchas no han podido volver a trabajar, lo que ha provocado un retroceso muy preocupante en los recientes avances en materia de igualdad de género²²³.

Como han puesto de manifiesto las economistas feministas, ONU Mujeres y otras organizaciones, las políticas económicas sin perspectiva de género menoscaban los derechos y la igualdad de las mujeres, por lo que **la evaluación sistemática de las repercusiones de género de las limitaciones del gasto salarial en el sector público debería tener en cuenta:**

- Cómo las limitaciones del gasto salarial en el sector público afectan a las mujeres de forma desproporcionada, pues las mujeres que trabajan en el sector público tienen más probabilidades de tener salarios más bajos y contratos precarios de corto plazo. Por ejemplo, las restricciones salariales generales del gasto salarial en el sector público impuestas a lo largo de muchos años implican casi con toda seguridad que las mujeres que han accedido a la profesión docente poco probablemente hayan sido contratadas como “maestras del sector público” (como parte de la profesión permanente) y es más probable que hayan recibido contratos eventuales o de corto plazo. Esto significa que tienen más probabilidades de ser despedidas cuando se imponen recortes²²⁴.
- Cómo las limitaciones del gasto salarial en el sector público afectan al **trabajo digno** disponible para las mujeres (utilizando indicadores de la OIT)²²⁵, a la participación de las mujeres en el mercado laboral en general (que se supone que es una prioridad del FMI) y a la participación de las mujeres en la vida pública, incluida la política.
- Cómo restringir al sector público y apoyar al privado repercute negativamente en la **diferencia salarial entre hombres y mujeres**. Esa brecha puede no ser tan marcada en el sector público, pero es mucho peor en el privado (ver Tabla 5). El Banco Mundial explica: *“Esta mayor igualdad salarial para las mujeres refleja probablemente el alcance más limitado de la discriminación salarial en el sector público, dado que los salarios del sector público suelen estar muy regulados”*²²⁶.
- Cómo la contracción del sector público y el apoyo a la privatización y al cobro de tasas afectan el **acceso de las mujeres y niñas a los servicios básicos**, en comparación con los hombres y los niños. Hay pruebas contundentes de que, cuando hay que pagar para acceder a la salud o la educación, las mujeres y las niñas son las primeras excluidas²²⁷.
- Cómo la limitación de los servicios públicos conduce a un aumento de la ya **injusta carga de los cuidados y del trabajo doméstico no remunerados** que asumen las mujeres debido a su papel socialmente asignado como cuidadoras.

Tabla 5. Porcentajes salariales mujeres/hombres en 2019 por región

	Sector privado	Salud
Global	Las mujeres ganan el 75% de lo que ganan los hombres	Las mujeres ganan el 88% de lo que ganan los hombres
África	Las mujeres ganan el 69% de lo que ganan los hombres	Las mujeres ganan el 91% de lo que ganan los hombres
Sur de Asia	Las mujeres ganan el 58% de lo que ganan los hombres	Las mujeres ganan el 86% de lo que ganan los hombres
América Latina	Las mujeres ganan el 85% de lo que ganan los hombres	Las mujeres ganan el 96% de lo que ganan los hombres

Source: World Bank: Worldwide Bureaucracy Indicators Dashboard

5.7 MINAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Los resultados de nuestro análisis de las restricciones del gasto salarial en el sector público también revelaron cómo repercuten en la acción climática. En algunos casos (dependiendo de la contabilidad nacional o de los métodos estadísticos), una de las formas relativamente más sencillas de que un país reduzca su gasto salarial en el sector público puede ser privatizar las empresas estatales. Muchos países en desarrollo conservan actualmente una participación significativa en las industrias de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón, y consideran que el sector energético es uno de los que conviene nacionalizar de una forma u otra. Se trata de recursos naturales finitos que deben aprovecharse (si es que se aprovechan) por el bien del país y de su población, en lugar de extraerlos para beneficiar al sector privado. Sin embargo, la crisis climática y la realidad de que la mayoría de estos recursos deben dejarse bajo tierra hacen que esto sea aún más complejo.

En los próximos años habrá que tomar decisiones muy difíciles para equilibrar los diversos intereses. Aunque sufran presiones a corto plazo, los gobiernos son los más indicados para tomar esas decisiones pensando en los intereses de largo plazo, en lugar de dejarlas en manos de empresas multinacionales cuya principal preocupación será siempre maximizar los beneficios a corto y mediano plazo. Durante muchos años se ha presionado a los gobiernos para que privaticen las empresas estatales, sobre todo en el sector energético, a menudo vendiéndolas a empresas extranjeras cuya regulación será difícil o imposible sin enfrentarse a acuerdos potencialmente ruinosos entre los inversores y los Estados. **Ahora nos encontramos en un punto de inflexión en el que perseguir la privatización dificultará aún más la acción gubernamental y la acción intergubernamental coordinada para resolver la crisis climática.**

Una investigación reciente sugiere que el FMI ya está desempeñando un papel problemático con respecto a la industria de los combustibles fósiles. A pesar de los llamados de la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, sobre la necesidad de renovar la recuperación del Covid-19, una nueva investigación de ActionAid-USA y Bretton Woods Project (*IMF Surveillance and Climate Change Transition Risks*) muestra que el FMI está encerrando a los países en riesgos de transición. Esto se basa en el análisis de los 595 Artículos IV para los 190 países miembros del FMI entre la firma del Acuerdo de París en diciembre de 2015 y marzo de 2021. Esa investigación señala:

- **Asesoramiento sobre infraestructuras de combustibles fósiles.** El FMI ha menoscabado la acción climática mundial al promover la expansión de los combustibles fósiles a través de su asesoramiento de política, encerrando a los países en desarrollo en una dependencia de los combustibles fósiles que está perjudicando a sus economías y al planeta. En más de la mitad de los países miembros (105), el asesoramiento de política del FMI ha apoyado la expansión de las infraestructuras de combustibles fósiles. De este modo, los países corren el riesgo de quedarse con ‘activos inmovilizados’, como centrales de carbón que pierden su valor debido a la competencia de las energías limpias, al tiempo que se establece una senda contaminante contraria a los objetivos climáticos mundiales y a una transición justa hacia las energías renovables.
- **Asesoramiento sobre empresas estatales.** El FMI ha promovido la privatización generalizada en el sector energético. En un tercio de los países (69), el FMI ha abogado, directa o indirectamente, por la privatización de empresas estatales de energía o electricidad. El consejo en torno a la privatización de las empresas estatales se dio casi siempre en aras de la sostenibilidad fiscal, a menudo como parte de las medidas de consolidación fiscal, como por ejemplo para apoyar la reducción del gasto salarial en el sector público. Las menciones neutras o positivas de cualquier tipo de empresa estatal fueron escasas y las mismas se describen casi invariablemente

como un riesgo fiscal en los informes del Artículo IV. La privatización a menudo vincula a los gobiernos a acuerdos de largo plazo con inversores extranjeros y les dificulta acabar con la energía fósil. En un contexto en el que se requiere el liderazgo de los gobiernos para implementar acciones urgentes y audaces por el bien de las personas y del planeta, y en el que se exige a los gobiernos que actúen como parteras de una transición justa, se requiere un mayor escrutinio de los supuestos del Fondo en los que se basa este asesoramiento.

- **Subsidios energéticos.** Se recomendó a un tercio de los países que pusieran fin a los subsidios energéticos como parte de la consolidación fiscal, lo que probablemente repercutirá negativamente en los ciudadanos de los países de ingresos bajos y medios y tendrá escaso impacto en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero si no se invierte paralelamente en alternativas de energía limpia.

El informe hace hincapié en la mayor promoción de políticas de austeridad por parte del FMI en muchos países que corren el riesgo de enfrentar una ‘década perdida’ tras la pandemia de Covid-19, y muestra cómo la acción climática y una transición energética justa podrían ser algunas de las víctimas de este enfoque perjudicial. Una recomendación clave es que el FMI reevalúe su asesoramiento sobre la privatización de las empresas estatales, que hacen parte del proyecto más amplio de reducción del Estado y que a veces se desencadenan por las restricciones del gasto salarial en el sector público, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos de compensación por reclamos de activos de combustibles fósiles varados por parte de inversores privados. En su lugar, **el FMI debería apoyar a los gobiernos a fortalecer las instituciones públicas, los servicios públicos y la protección social, de modo que puedan responder eficazmente al cambio climático.** Invertir en servicios públicos es una inversión más ecológica que invertir en infraestructura y, por ende, los servicios públicos deben ser fundamentales para una transición justa, por lo que los recortes o restricciones salariales en el sector público son contrarios a una transición justa. El FMI debe reevaluar en profundidad el papel de los servicios públicos a la luz del COVID-19 y de la crisis climática y reconocer las limitaciones de las respuestas del sector privado.

TESTIMONIO DE PRIMERA LÍNEA EN NEPAL: SUMAN GIRI SHRESTHA, ENFERMERA



‘Estudí Enfermería por mi cuenta e intenté ser feliz con mi profesión. Pero cuando oigo hablar del FMI, me siento frustrada. Reducir el presupuesto del sector sanitario es como cocinar sin sal. La reducción del financiamiento público en la salud repercute en los sueldos y salarios de los trabajadores sanitarios, así como en sus competencias y servicios. Es un error deducirlo del presupuesto. Quiero pedir al FMI que tenga en cuenta que el sector salud es el corazón de los servicios públicos, por lo que no debe presionar al Gobierno para que reduzca el financiamiento de este sector’.

Testimonio recabado por PSI

6. UN CULTO Y UNA IDEOLOGÍA EN RETROCESO

El FMI y los Ministerios de Finanzas utilizan las restricciones generales del gasto salarial en el sector público de forma contundente e ineficaz. No se ha presentado ninguna base creíble para establecer el porcentaje del PIB que debe destinarse al gasto salarial en el sector público, pero se insta a los países de forma sistemática y repetida a recortar, incluso cuando sus gastos salariales están muy por debajo de los promedios mundiales y regionales. Las consecuencias previstas de los recortes o los congelamientos son muy cuestionables y las consecuencias imprevistas son alarmantes, ya que hacen retroceder los avances en materia de igualdad de género, los ODS, los derechos humanos e incluso menoscaban las medidas contra la crisis climática. Entonces, ¿por qué siguen siendo una parte tan rutinaria de los acuerdos alcanzados por los Ministerios de Finanzas y el FMI a puertas cerradas?

Las puertas cerradas son la clave. No son diálogos transparentes abiertos al escrutinio público o parlamentario.

Son discusiones entre un cierto cuadro de privilegiados que normalmente han ido a las mismas universidades y tienen las mismas trayectorias profesionales y que rara vez han experimentado los efectos de los recortes que promueven. Se insta a los Jefes de Estado a nombrar Ministros de Finanzas que mantengan contentos a los mercados y al FMI. Los altos funcionarios ascienden en los ministerios de finanzas siendo coherentes con la visión hegemónica del mundo, aceptando e interiorizando la ideología dominante de los últimos cuarenta años. Esto está tan arraigado que ya no se percibe como ideología, sino que se trata como una verdad absoluta. Sin embargo, esta estrecha visión de la economía se construyó como un proyecto ideológico²²⁸ que desacreditó y borró las alternativas, en particular las de los países del Sur²²⁹.

En el mundo de la economía en general, existe una creciente diversidad de pensamiento a medida que la gente reacciona ante la serie de crisis financieras que han puesto de manifiesto los fallos fundamentales del actual sistema mundial. **No resolveremos las crisis múltiples e interconectadas con más de lo mismo, puesto esto sólo producirá otra década perdida**²³⁰. Afortunadamente, vemos una creciente diversidad de pensamiento en universidades, publicaciones, periódicos, revistas, conferencias, asociaciones y sindicatos profesionales, movimientos feministas, seminarios web y convocatorias en línea, movimientos juveniles y estudiantiles, parlamentos, grupos de reflexión, la sociedad civil de todo el mundo, e incluso en el liderazgo y los equipos de política e investigación de la propia sede del FMI en Washington. No obstante, esto no penetra en el FMI y sus equipos de cara a los países, ni en las puertas cerradas de los pasillos del poder financiero en la mayoría de los países.

Es hora de que el gobierno replantee radicalmente las políticas económicas neoliberales que implementa y el uso de las restricciones del gasto salarial en el sector público en particular. Y existe una sólida red de la sociedad civil dispuesta a ayudar a explorar alternativas.

Ya sea que lo llamemos culto de la austeridad o culto del neoliberalismo, se está reduciendo. Es un sistema en decadencia que no puede resistir perturbaciones importantes (y con la crisis climática se avecinan más)²³¹. Ha ayudado a los ricos a enriquecerse (incluso durante el Covid-19) y a los pobres a empobrecerse, a medida que el capital engulle cada vez más y la mano de obra gana cada vez menos. La base académica e intelectual se ha venido abajo. **Algunos países ricos se están alejando de la austeridad, entre ellos Estados Unidos, al reconocer que frena el crecimiento y el desarrollo.** Pero la creencia sigue siendo fuerte detrás de las barricadas, dentro de las salas cerradas donde se celebran las reuniones del Artículo IV y negocian el FMI y los Ministerios de Hacienda. En estos espacios exclusivos se mantienen con vida los referentes de la fe moribunda. El mayor objetivo es seguir sirviendo la deuda. El peor pecado es la inflación. El mayor riesgo es un sector público hinchado. Y cualquier aspiración al desarrollo (que a su vez se define estrechamente como crecimiento del PIB), a corto o largo plazo, sólo puede perseguirse dentro de estos parámetros.

El secretismo es ahora una herramienta en la lucha por preservar esta ideología fracasada. Los documentos del FMI citados son supuestamente coautoría entre el FMI y los Ministerios de Finanzas, pero no publican las fuentes de los datos en los que se basan en sus propios documentos y, en la mayoría de los casos, no hacen referencia a ellos. Si se expusieran a la luz, la mayoría de los gobiernos, parlamentos y sociedad civil encontrarían motivos para cuestionarlos. Pero el secretismo tiene otra finalidad: permite a los gobiernos culpar al FMI y al FMI culpar a los gobiernos. En definitiva, se trata de una cómoda farsa de negación plausible. Las políticas problemáticas pueden achacarse a la otra parte sin que nadie se entere. De hecho, los gobiernos pueden imponer políticas profundamente impopulares y, si hay protestas, pueden achacarle la culpa a la otra parte, arrojarla a las puertas del FMI, muy lejos,

en Washington. **Esta falta de rendición de cuentas hace imposible que la sociedad civil controle las decisiones tomadas en torno a las finanzas públicas.**

Estos son los signos de que el culto de la austeridad está muriendo. Sin embargo, este sigue ejerciendo un inmenso poder y las hegemonías en declive pueden causar daños inmensos en su carrera por mantener el poder. El FMI y las élites de los países del Norte que se benefician de este sistema neocolonial de opresión y extracción de riqueza lo imponen y mantienen. Y el sistema se sustenta en ideologías obsoletas y desacreditadas. Necesitamos que los ciudadanos del Sur y del Norte se opongan a la austeridad, que la población se convierta en pueblo y se levante para exhortar a sus gobiernos a resistirse a esta ideología moribunda antes de que cause más daño. Y también necesitamos que se alce la voz del sector público (lo público en oposición a lo privado), el baluarte contra la austeridad, que ha sobrevivido casi intacto a cuarenta años de ataques. Necesitamos que estos dos grupos se unan para reimaginar y reinventar el futuro: en primer lugar, para exigir aumentos drásticos y sostenidos de la inversión en servicios públicos y, en segundo lugar, para hacer que esos servicios rindan cuentas y recuperen la confianza de los ciudadanos. Esa es la esencia de una Asociación Pública-Pública que puede y debe derribar por fin los muros que protegen a los últimos seguidores del triste culto de la austeridad.



Rajkumari Chaudhary es una agente de policía de 23 años en el distrito nepalí de Doti. Las mujeres policías pueden desempeñar un papel transformador, pero cambiar el perfil tradicional de los funcionarios públicos que trabajan en distintos servicios es todo un reto cuando se congelan las nuevas contrataciones.
FOTO: ACTIONAID

CUADRO 17: LA ALIANZA MACROECONÓMICA FEMINISTA DE MALAWI, OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE

Durante décadas, las economistas y activistas feministas y las organizaciones y movimientos por los derechos de las mujeres han imaginado, desarrollado, defendido y aplicado modelos, marcos, estrategias y enfoques económicos como formas de organizar las economías y participar en la actividad económica como alternativas a los enfoques convencionales y ortodoxos. En Malawi, por ejemplo, ActionAid apoya la Alianza Macroeconómica Feminista, que defiende una sólida campaña a favor de políticas macroeconómicas justas con un fuerte enfoque feminista en la prestación de servicios públicos en los sectores de la salud, la educación y la agricultura. Esta alianza incluye a ActionAid Malawi, NGO Gender Coordination Network, Malawi Human Rights Resource Centre, MHub, For Equality, Activista Youth Network, Care Malawi y Her Liberty.

La necesidad de revisar el marco de la gestión económica en Malawi es urgente. A pesar de las múltiples reformas estructurales, institucionales y políticas basadas en el marco económico neoliberal dominante, la economía y la sociedad malawianas son cada vez más disfuncionales, ya sea a nivel macroeconómico o sectorial, o en general los resultados del desarrollo han sido en gran medida subóptimos. En muchos casos, el retroceso ha sido causado o exacerbado por la aplicación de instrumentos neoliberales de política y reformas. Los efectos de las restricciones del gasto salarial en el sector público han sido especialmente pronunciados en los sectores de la agricultura, la educación y la salud y las mujeres han sido las más afectadas.

Restricción del gasto salarial en el sector público	Agricultura	Educación	Salud
Congelar la contratación	Escaso personal, especialmente en la dirección de extensión (por debajo del 60%); el acceso de los agricultores a los servicios de extensión, limitado por un modelo basado en la demanda	Elevado porcentaje maestro/alumno en secundaria y primaria; resultados educativos de baja calidad; bajos índices de finalización de estudios, especialmente entre las niñas.	Relaciones muy malas de personal sanitario-población; personal sobrecargado de trabajo que hace turnos de 24 horas sin parar; éxodo de médicos y enfermeros formados por el gobierno a otros países cuando la demanda local es alta.
Mantener salarios bajos	Elevada rotación de personal hacia organizaciones no gubernamentales.	Profesores desmotivados que hacen lo mínimo; Altos índices de absentismo, ya que los profesores dedican tiempo a otras actividades para complementar sus ingresos; Enseñanza privada en centros públicos, tanto en primaria como en secundaria, lo que crea incentivos perversos.	Pluriempleo; trabajadores sanitarios que hacen turnos en centros privados a expensas del servicio en centros públicos; trabajadores sanitarios que dirigen empresas privadas para complementar sus ingresos; cultura de los subsidios (<i>locum</i>); preferencia por los talleres y seminarios en los que se conceden subsidios.
Congelación de incrementos salariales y ascensos	Personal desmoralizado; cultura de los subsidios que desvía recursos de las actividades básicas.	Profesores desmotivados que permanecen en los mismos grados durante más de diez años, estancados en la barra de la estructura salarial sin ascensos ni incrementos salariales a la vista.	Rotación de personal al sector privado; fuga de cerebros al marcharse a trabajar al extranjero en busca de mejores salarios y condiciones de servicio.

7. DE CARA AL FUTURO

El mundo enfrenta una serie de crisis interconectadas y para responder a ellas será necesario dejar de hacer las cosas como siempre, o al menos como se ha hecho en las últimas cuatro décadas. Cuarenta años de neoliberalismo han contribuido a crear o agravar las crisis a las que ahora nos enfrentamos.

- **La búsqueda de un crecimiento sin fin (y cada vez más sin empleo)** ha perturbado la biodiversidad y los sistemas naturales, desplazando a la fauna salvaje hasta el punto de hacer más probable la transmisión de Covid-19 de animales a humanos, y muchos países han estado mal preparados para responder a la pandemia debido a décadas de subfinanciamiento de los sistemas de salud pública.
- **Los continuos ciclos de crisis de la deuda** en el Sur del planeta, facilitados por el sistema financiero desregulado, la deuda denominada en divisas extranjeras y la falta de una solución estructural, como un mecanismo de renegociación de la deuda, han hecho que los gobiernos tengan que elegir entre el reembolso de la deuda y el gasto social básico.
- El FMI ha contribuido a perpetuar **la dependencia de los combustibles fósiles** y a intensificar la extracción de recursos mientras no invierte en alternativas, apoyando la privatización de los recursos naturales que podría obstaculizar seriamente los esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales por responder a la crisis climática.
- **Las desigualdades han aumentado exponencialmente a medida que se han desmantelado los sistemas fiscales progresivos** a favor de impuestos regresivos que trasladan la carga a las personas que viven en la pobreza, mientras se mantiene el flujo de riqueza que sale de África y del Sur del planeta hacia el Norte²³².
- **Las desigualdades de género se han perpetuado** porque la falta de inversión en servicios públicos sensibles al género impide la lucha contra el patriarcado y aumenta la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que asumen las mujeres.

De un modo u otro, los ataques contra el sector público son el hilo conductor de todas estas crisis, y una reevaluación fundamental del sector público debe estar en el centro de la solución. Necesitamos **reformas sistémicas de las políticas y paradigmas de la arquitectura financiera internacional** y de los gobiernos nacionales para abordar las desigualdades y los desequilibrios a todos los niveles y lograr un cambio estructural a largo plazo.

Ahora es el momento de revisar y reclamar el papel redistributivo esencial de los Estados, apoyando a “la mayoría” e impidiendo que sigan siendo captados para servir a los intereses de “unos pocos”. Para ello debe ser **fundamental una nueva concepción de los servicios públicos: financiados y prestados públicamente, adaptados a las necesidades humanas y a las necesidades de los ciudadanos**²³³. Necesitamos alejarnos de las economías extractivas e insostenibles basadas en el mito de las fronteras ilimitadas y el crecimiento perpetuo y dependientes del invisible (en términos del PIB) trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que asumen principalmente las mujeres. Tenemos la oportunidad de construir sociedades y economías más solidarias e igualitarias, economías que puedan cuidar verdaderamente tanto de las personas como del planeta. Como llevan décadas señalando la sociedad civil, los activistas, los sindicatos y las economistas feministas del Sur del planeta, la batalla de las ideas y las narrativas tendrá que ganarse en todos y cada uno de los países, con la participación de los gobiernos empujados por la gente, instándoles a ir más allá del pensamiento y la acción cerrados y sectarios y a abrirse a alternativas feministas, justas y ecológicas.

La inversión en servicios públicos y en los trabajadores del sector público están en el centro de toda visión progresista de una transición feminista y justa, de reconstruir (o avanzar) mejor²³⁴. Y estas ideas ya no están al margen. El multimillonario paquete de medidas de recuperación de Joe Biden se centra en la infraestructura, pero la redefine para considerar a los trabajadores de primera línea del sector público como parte de la infraestructura básica del país²³⁵. Esto parece tener sentido para la mayoría de la población. ¿Qué es un edificio escolar sin un maestro? ¿Qué es un hospital sin un médico y una enfermera? La observación de Elizabeth Warren capta un nuevo sentido común: *‘Construimos infraestructuras como carreteras y puentes y sistemas de comunicaciones para que la gente pueda trabajar. Es hora de reconocer que el cuidado de los niños es parte de la infraestructura básica de esta nación. Es una infraestructura para las familias*²³⁶. Durante décadas, el FMI ha defendido el aumento de la inversión en infraestructura, incluso en plena recesión, pero se ha negado a tratar a los trabajadores del sector público como parte integral de esa infraestructura²³⁷. Esto debe cambiar, y rápido. La marea se está moviendo y los Ministerios de Finanzas que sigan apegados a dogmas del pasado quedarán rezagados. Es hora de tomarse en serio **la evidencia de que la inversión en servicios públicos contribuye activamente con el crecimiento y el desarrollo**²³⁸.

CUADRO 18: ALTERNATIVAS ECONÓMICAS FEMINISTAS

El actual sistema económico patriarcal y neoliberal sirve tanto para explotar como para exacerbar la posición relativa de exclusión económica, social y política de las mujeres. El patriarcado, el racismo y el neoliberalismo funcionan conjuntamente como sistemas de opresión que conforman el poder y el privilegio. Esto da forma a nuestras sociedades y ha cambiado las leyes, desregulando los derechos laborales, privatizando los recursos naturales y los servicios básicos, liberalizando el comercio, la inversión y los flujos financieros y facilitando la extracción de riqueza y recursos de las personas y el planeta en forma de beneficios empresariales.

El “desarrollo” económico se mide en PIB, ignorando los ciclos de recuperación del medio ambiente y la reproducción social. El valor de los seres humanos no puede reducirse a su contribución al PIB, mientras se ignoran todas las demás formas en que las personas viven y se sostienen entre sí, a las comunidades, las sociedades y los ecosistemas. Los **cuidados y el trabajo doméstico no remunerados (parte de la reproducción social) no se contabilizan en el PIB**, que conducen a decisiones políticas perjudiciales, por lo que es preciso reconocer su valor social y económico, recompensarlo con igualdad salarial y trabajo digno, y redistribuirlo, especialmente a los servicios públicos de asistencia (leer *Care Manifesto: Rebuilding the social organization of care*).

Las economistas feministas, las activistas, las organizaciones y los movimientos por los derechos de las mujeres llevan décadas ofreciendo modelos para organizar las economías y participar en la actividad económica centrados en las personas y basados en los derechos humanos, la igualdad y la solidaridad como alternativas a los enfoques dominantes, ortodoxos y neoliberales. Cualquier enfoque debe corregir las desigualdades de género a nivel nacional, así como los desequilibrios de poder entre el Norte y el Sur²³⁹.

Las respuestas al Covid-19 en muchos países han revelado tanto lo mejor como lo peor de los sectores público y privado. El financiamiento público fue fundamental para acelerar el descubrimiento y la difusión inicial de las vacunas²⁴⁰, pero la no suspensión de los derechos de propiedad intelectual ha permitido que los beneficios privados triunfen sobre el bien mundial²⁴¹. El aumento de la demanda de equipos de protección personal y respiradores hizo que se adjudicaran enormes sumas de dinero público, sin los procesos de licitación adecuados, a empresas que tenían poca credibilidad, experiencia o competencia. Ha habido escándalos de amiguismo político y corrupción²⁴², historias de graves ineficiencias en el sector privado y de compromiso heroico y abnegación por parte de los trabajadores de primera línea en el sector público²⁴³. Mientras que las tasas de mortalidad han aumentado de forma alarmante, los multimillonarios se han dirigido a las estrellas. Da la sensación de que se está produciendo un cambio, con una creciente relegitimación del papel del Estado que va mucho más allá de ser un mero facilitador del mercado capitalista y sus especuladores²⁴⁴.

No cabe duda de que la crisis climática nos obliga a replantearnos el papel del sector público y su financiamiento.

Una acción mundial significativa durante la conferencia sobre el clima que se celebrará en Glasgow en noviembre de 2021 y en el futuro dependerá de que nos enfrentemos a la industria de los combustibles fósiles²⁴⁵ (las empresas más grandes y poderosas) de que acabemos con todos los subsidios estatales y de que usemos todos los poderes del Estado para adoptar las energías renovables y lograr un futuro sostenible²⁴⁶. **Esto implica aumentar el presupuesto público estatal mediante impuestos progresivos y un trabajo conjunto más eficaz para regular al poder corporativo.** Aunque defectuoso en su diseño, el acuerdo del G7 para fijar una tasa mínima mundial de impuesto corporativo fue una señal positiva de que los países poderosos reconocen que el status quo en materia de abusos fiscales de las empresas no puede continuar (ver Cuadro 3). La mayoría de las propuestas progresistas para una fiscalidad climática de financiamiento redistributivo que están ahora sobre la mesa reconocen que, para reparar la injusticia histórica, pagar por las pérdidas y los daños²⁴⁷ y apoyar la adaptación, hay dos ingredientes esenciales: el compromiso de invertir en protección social universal²⁴⁸ y unos servicios públicos de calidad. Unos trabajadores del sector público mejor dotados de recursos será esencial para construir Estados más resilientes, capaces de avanzar en la calidad de género y de hacer frente a los retos climáticos que se avecinan²⁴⁹.

Hacia mucho tiempo que no se hablaba tanto de los ciclos positivos de la inversión en servicios públicos²⁵⁰.

Cuando un gobierno crea un puesto de trabajo en el sector público, a menudo retira a alguien de la seguridad social, lo que reduce la factura de la asistencia social. A menudo es el sector público el que proporciona los periodos de prácticas y aprendizaje que crean una cantera de trabajadores cualificados para el sector privado. Cada trabajador

del sector público paga impuestos, lo que supone una importante contribución al PIB, del porcentaje de su propio salario. Cada ampliación de un servicio público puede reducir la carga de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados que, de otro modo, recae injustamente en su mayoría sobre las mujeres, permitiéndoles a éstas ser más activas y productivas económica y políticamente. Un personal más sano y mejor formado es más productivo en general, lo que aumenta el desarrollo económico y el bienestar. Como señaló la Comisión de Salud, Empleo y Crecimiento Económico: *‘El crecimiento y el desarrollo económicos dependen de una población sana. Se calcula que alrededor de una cuarta parte del crecimiento económico entre 2000 y 2011 en los países de ingresos bajos y medios obedece al valor de las mejoras sanitarias. Se calcula que el retorno sobre la inversión en salud es de 9 a 1. La inversión específica en sistemas sanitarios, incluido el personal sanitario, fomenta el crecimiento económico por otras vías: producción económica, protección y cohesión social, innovación y seguridad sanitaria’*²⁵¹. Las imágenes negativas, los prejuicios y los círculos viciosos del pasado deben dar paso a un círculo virtuoso desencadenado por una actitud positiva hacia la inversión en los trabajadores del sector público²⁵².

Como afirmó Daniel Bertossa del PSI: *‘A pesar de la percepción pública, muchas de las extraordinarias innovaciones recientes, como medicinas avanzadas y la tecnología detrás de los teléfonos inteligentes, son más producto del gasto, investigación y desarrollo público que de la ingenuidad del sector privado. Por otro lado, las fallas relativamente bajas del sector público son promovidas incansablemente como una señal de que el gobierno es incapaz de brindar soluciones. Si se aplicara este mismo estándar a los emprendimientos, que exhiben una clara tasa de fallas, se consideraría a la empresa privada en su totalidad como un fallo no resuelto’*²⁵³.

Así pues, ha llegado el momento **de revitalizar masivamente los servicios públicos**²⁵⁴. Necesitamos un **aumento sostenido y significativo del financiamiento público si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos existentes**, mermada en muchos países tras décadas de recortes y congelamientos. Esto requerirá más trabajadores de primera línea del sector público en servicios existentes con salarios y condiciones de trabajo decentes. Si queremos servicios públicos de calidad, no podemos esperar ni exigir que los funcionarios trabajen por salarios de miseria. Quienes trabajan por el bien público merecen tener condiciones de trabajo decentes, dignidad y respeto. Todos ganamos cuando las personas que enseñan a nuestros hijos o tratan nuestra salud reciben una remuneración justa. **Un aumento de un solo punto del gasto salarial en el sector público como porcentaje del PIB puede ser transformador. Sólo en los 15 países estudiados, eso equivaldría a casi ocho millones de nuevos trabajadores de primera línea del sector público** (ver Tabla 2).

También es necesaria una nueva y enorme inyección de financiamiento para ampliar los servicios públicos a nuevas zonas críticas, garantizando la atención a lo largo de la vida para todos, independientemente de su situación laboral o migratoria. La atención, la educación y el desarrollo de la primera infancia son tan transformadores que deben concebirse y prestarse como un servicio público y no como algo que dependa de la oferta privada y de la capacidad de pago de los padres (los mayores beneficios los obtienen los niños de las familias más desfavorecidas, y actualmente son los que menos pueden acceder a ellos en la mayoría de los países)²⁵⁵. La atención social a las personas mayores es otro ámbito fundamental que hay que reimaginar, para determinar el papel adecuado de la intervención de los servicios públicos y garantizar que el Estado tenga la capacidad de definir y cumplir unas normas y reglamentos mínimos. Estas funciones asistenciales, ya sean para los más jóvenes, los ancianos o las personas con discapacidad, son muy demandantes para los trabajadores, por lo que el gasto salarial del sector público tendrá que aumentar significativamente si queremos evitar los crecientes escándalos que se observan en algunos centros de cuidado privados.²⁵⁶ Y si queremos **desafiar al patriarcado, estas funciones asistenciales no pueden seguir infravalorándose**²⁵⁷.

Más allá de reconstruir los servicios públicos existentes y ampliar la participación del Estado en los nuevos servicios públicos, **tenemos que reinventar los servicios públicos para hacerlos más sensibles al género**²⁵⁸ **y responsables**. La tradicional rendición de cuentas ascendente de los servicios públicos, la supervisión profesional y democrática de los servicios locales por parte de las autoridades de distrito, regionales y nacionales, sigue siendo importante, aunque a menudo los recortes han erosionado y socavado niveles intermedios cruciales en los últimos años. Sin embargo, esto debe ir acompañado de un énfasis renovado en la responsabilidad descendente hacia el público, los usuarios de los servicios públicos. Todos los servicios públicos deben aprovechar la tecnología para aumentar la transparencia. No obstante, hay que centrarse menos en incitar a la competencia entre proveedores y más en utilizar los poderes redistributivos del Estado para garantizar que todos los servicios sean de calidad decente.

La crisis climática exige nuevas inversiones masivas del Estado y una revalorización de lo “local” en el servicio público. Es una locura que los ciudadanos tengan que recorrer largas distancias para acceder a servicios decentes, por lo que necesitan confiar en el servicio público de sus propios barrios. **Para ello hay que crear asociaciones públicas-públicas eficaces y equilibrar las responsabilidades hacia arriba y hacia abajo y dar el mismo valor a los usuarios de los servicios públicos y al personal del sector público**.

8. RECOMMENDATIONS

Se supone que el enfoque ortodoxo de austeridad aplicado por el FMI y demasiados Ministerios de Finanzas promueve los estrechos objetivos de la estabilidad financiera y el crecimiento total (del PIB). Pero, en la práctica, esto restringe activamente el margen de maniobra fiscal, dando prioridad al pago de la deuda y bloqueando la inversión pública en servicios públicos y en los trabajadores del sector público, a corto y largo plazo. Las responsabilidades públicas claves y las obligaciones en materia de derechos humanos para proporcionar salud, educación, protección social y otros servicios se trasladan a los hogares (añadiéndose al trabajo no remunerado de las mujeres) o al sector privado (facilitando la acumulación de riqueza mediante la extracción de ganancias)²⁵⁹. El neoliberalismo ha sido demasiado publicitado durante cuarenta años y ha ahogado el mismo crecimiento y desarrollo que se suponía que valoraba²⁶⁰. Ha llegado el momento de una revisión fundamental, un cambio de sistema centrado en la justicia económica.

Los gobiernos, los Ministerios de Finanzas y el FMI tienen que ir más allá de su retórica y mostrar un cambio real en la práctica.

- **Dejar de aplicar políticas de austeridad** frente a las múltiples crisis (sanitaria, económica, de desigualdades y climática), dado que se sabe que la austeridad prolongará las recesiones económicas y socavará la recuperación económica²⁶¹.
- **Reconocer y maximizar la contribución del sector público al crecimiento económico y al desarrollo**, incluidas las transformaciones en el trabajo de cuidados no remunerado y la igualdad de género.
- Fijar **objetivos ambiciosos de reformas fiscales progresivas** y actuar en consecuencia, aumentando la proporción entre impuestos y PIB en al menos 5% para 2030 mediante impuestos progresivos, especialmente sobre la riqueza y las empresas.
- **Apoyar programas más ambiciosos de cancelación y reprogramación de la deuda y ayudar a los gobiernos a reestructurar sus deudas** para que puedan dar prioridad a las inversiones en servicios públicos de calidad.
- **Establecer objetivos ambiciosos para aumentar año tras año el gasto salarial en el sector público**, revitalizar ampliamente los servicios públicos tras décadas de declive, utilizando referencias internacionales para orientar las inversiones como pieza central para la recuperación tras el Covid, el desarrollo humano y una transición ecológica.
- Reconocer a **los trabajadores del sector público como parte de la infraestructura básica** de un país que necesita protección e inversión, incluso (de hecho, especialmente) en plena recesión.
- Reconocer que **será necesario un aumento significativo de los trabajadores del sector público para responder a la crisis climática**.
- **Colaborar con los sindicatos y las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer en el diálogo social y la negociación colectiva** para fijar salarios justos y equitativos para hombres y mujeres en el sector público.
- **Avanzar hacia una planificación económica de largo plazo** orientada al bienestar, que no se limite a medidas estrechas como el crecimiento del PIB y que tenga muy en cuenta los retornos sobre inversión de largo plazo en los servicios públicos en los planes de medio plazo.
- **Investigar activamente y aplicar políticas macroeconómicas alternativas** aprovechando el aprendizaje de partes interesadas como la UNCTAD²⁶², la OIT²⁶³ y macroeconomistas feministas²⁶⁴.
- **Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas** en todos los debates económicos nacionales, ya sea con el FMI o con cualquier otro actor mundial. Publicar todos los datos y fuentes y ampliar la participación parlamentaria y popular.
- **Rechazar el culto de la austeridad** y asegurarse de que se denuncia a todos los miembros de dicho culto.

En concreto, el FMI debería:

- Realizar una **evaluación del impacto sobre los derechos humanos y el género** de cualquier política que afecte a los trabajadores del sector público y del impacto sobre los derechos humanos y los objetivos nacionales de desarrollo. Llevar a cabo sistemáticamente evaluaciones *previas* del impacto distributivo y de género de todos los objetivos fiscales, garantizando que se aborde cualquier impacto perjudicial y se consideren alternativas.
- Llevar a cabo una revisión específica de **la Oficina de Evaluación Independiente** sobre el uso que hace el FMI de las restricciones del gasto salarial en el sector público y su posicionamiento más amplio sobre el sector público.
- Revisar la reciente **Revisión de Supervisión Integral** del FMI y asegurarse de que las conclusiones y recomendaciones se reflejen en las orientaciones del personal.
- Mejorar el estatus de la nota del FMI sobre la Operacionalización del género en el trabajo por países, para que sea **obligatorio analizar el impacto de género de las restricciones del gasto salarial en el sector público** (y otras

políticas) y garantizar que el FMI disponga de recursos suficientes para hacerlo.

- Garantizar que cualquier **mecanismo global con potencial para el financiamiento redistributivo** (Derechos Especiales de Giro,²⁶⁵ impuestos sobre el carbono, Pérdidas y Daños, acuerdos de deuda) reconozca y salvaguarde específicamente la importancia estratégica de las inversiones en los trabajadores del sector público.

La opinión pública, la sociedad civil y los movimientos sociales deben maximizar las conexiones entre temas, expresarse en sus críticas colectivas y promover alternativas positivas:

- **Hay que estar preparado para protestar y presionar a los gobiernos** cada vez que el culto de la austeridad aparezca. Los países que lograron ampliar sus plantillas del sector público fueron aquellos que ejercieron una presión sostenida por parte de los sindicatos del sector público y de las protestas callejeras. Hasta que estas políticas sean enviadas a la papelera, tiene que haber una resistencia no violenta activa y vocal y solidaridad internacional con todos los que emprendan esta lucha.
- Después de 40 años de esta ideología, necesitamos **movimientos de amplia base que condenen la austeridad y promuevan alternativas**, vinculando a los movimientos feministas, las organizaciones juveniles y estudiantiles, los sindicatos, los movimientos por la educación, la sanidad y otros movimientos sectoriales, los defensores de la justicia fiscal y tributaria, los pueblos indígenas, los movimientos por el clima y la justicia social, las redes de justicia medioambiental, los defensores de los derechos humanos, etc. Necesitamos alianzas fuertes a escala mundial (como la coalición de la campaña mundial para Acabar con la Austeridad y la Alianza para Combatir la Desigualdad) y en cada país, unidas para presionar a los gobiernos. ¡Este es el momento!
- Aunar aprendizajes y **construir un consenso público más ambicioso sobre alternativas económicas al neoliberalismo**, apoyando y reforzando instituciones y actores que puedan ofrecer un asesoramiento alternativo creíble a los países que estén dispuestos a romper moldes aplicando enfoques feministas, justos y verdes del desarrollo.
- **Tenemos que trabajar juntos para reimaginar con osadía el sector público** como motor de crecimiento y desarrollo, revalorizar a los trabajadores del sector público y reconstruir la confianza pública en que los servicios de calidad pueden financiarse de forma sostenible. Debemos consolidar una nueva visión de las PPP como asociaciones públicas-públicas, en que los servicios públicos sean verdaderamente responsables ante los ciudadanos. El afán de lucro y la privatización deben cuestionarse en todos los servicios públicos.

El Dr. Ahmad Muhanna, director del hospital Al-Awda de Gaza, habló en mayo de 2021 de los extraordinarios retos a los que se enfrenta. "Recibimos diferentes casos derivados de la explosión de edificios, como quemaduras y heridas, incluidas cojeras y quemaduras entre niños y mujeres. El personal sanitario de todos los hospitales gubernamentales necesita apoyo psicológico.

FOTO: PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL



Referencias

- Ostry, J. et al. (2016) "Neoliberalism: Oversold?" Finance and Development Vol. 53, No. 2 <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.htm>
- Una definición útil y clara para entender el neoliberalismo se encuentra en: *Feminist critiques, policy alternatives and calls for systemic change to an economy in crisis*, de Natalie Raaber y Diana Aguiar. Association for Women's Rights in Development (AWID 2012) https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IAFFE2011&paper_id=262. 'The underlying neoliberal rationale [is] of aggressive search for profits that puts human and social needs at the service of capital benefits.'
- ActionAid (2020) *Who Cares for the Future: Finance gender responsive public services!* páginas 57-61, <https://actionaid.org/publications/2020/who-cares-future-finance-gender-responsive-public-services>
- Aunque la evidencia muestra que las PPP no funcionan. Ver Eurodad (2020) "Why public-private partnerships are still not delivering" https://d3n8a8pro7vnm.cloudfront.net/eurodad/pages/1912/attachments/original/1607952619/PPPs_EN.pdf?1607952619
- Ortiz, I. y Cummins, M. (2019) *Austerity: the New Normal*. <http://policydialogue.org/files/publications/papers/Austerity-the-New-Normal-Ortiz-Cummins-6-Oct-2019.pdf>
- OMS (2020) *State of the World's Nursing*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331673/9789240003293-eng.pdf>
- Existen otros factores involucrados, profesionales sanitarios muy calificados que emigran en busca de un mejor salario.
- OMS (2020) *State of the World's Nursing*, página 10. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331673/9789240003293-eng.pdf>
- Instituto de Estadísticas de la UNESCO (2016) <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs39-the-world-needs-almost-69-million-new-teachers-to-reach-the-2030-education-goals-2016-en.pdf>
- Por ejemplo, ver GADN (2018) *Submission to the Independent Expert on foreign debt and human rights on the links and the impact of economic reforms and austerity measures on women's human rights* <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/IEDebt/WomenAusterity/GenderDevelopmentNetwork.pdf>
- ActionAid (2020) páginas 3-30.
- El FMI también puede verse como un cómplice de estos grandes retrocesos, según Detraz, N., y Peksen, D. (2016). 'The effect of IMF programs on women's economic and political rights'. *International Interactions*, 42(1), 81-105. <https://doi.org/10.1080/03050629.2015.1056343> 'Postulamos que las reformas de política y recortes del gasto público inducidos por el FMI y la creciente represión política e inestabilidad tras la implementación de programas del FMI socavan la capacidad y la voluntad del gobierno de proteger los derechos económicos y políticos de las mujeres'.
- Tax Justice Network, Public Services International and the Global Alliance for Tax Justice (2020) *The State of Tax Justice 2020*. Este informe muestra cómo ingresos no percibidos podrían financiar salarios de enfermeros "Los países están perdiendo un total de \$427 mil millones cada año fiscal por el abuso tributario de corporaciones internacionales y la evasión fiscal privada, lo que cuesta a los países, juntos, el equivalente a cerca de los salarios anuales de 34 millones de enfermeros cada año – o un salario anual de cada enfermera por segundo". <https://www.globaltaxjustice.org/en/latest/427-billion-lost-tax-havens-every-year>
- Ver datos sobre desigualdad de Oxfam: <https://www.oxfam.org/en/tags/inequality> and the Fight Inequality Alliance <https://www.fightinequality.org/about>.
- 500 organizaciones firmaron una declaración condenando el uso de austeridad del FMI en octubre de 2020: https://www.eurodad.org/over_500_organisations_call_on_imf_to_stop_promoting_austerity_coronavirus
- Ver por ejemplo el encuentro especial de Rapporteurs de la ONU que dice 'Enough is Enough' en 2020 <https://www.gi-escr.org/latest-news/enough-is-enough-privatisation-and-public-services-a-well-attended-conversation-with-current-and-former-un-special-rapporteurs>
- ActionAid (2007) *Confronting the Contradictions: the IMF, Wage Bill Caps and the Case for Teachers*: <https://actionaid.org/publications/2007/confronting-contradictions>.
- ActionAid (2005) *Changing Course: Alternative Approaches to Achieve the MDGs and Fight HIV&AIDS*. <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Changing-Course-Alternative-Approaches-to-Achieve-the-Millennium-Development-Goals-and-Fight-HIV-AIDS.pdf>
- Un factor clave fue que el congreso de EE.UU. tenía una ley en desarrollo (<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-111/hrpt187/pdf/CRPT-111/hrpt187.pdf>) que se oponía a que el FMI impusiera tarifas de usuarios y recortes/limites al gasto salarial de la educación en países de ingresos bajos, oponiéndose a cualquier préstamo, proyecto, acuerdo, memorando, instrumento, plan u otro programa del Fondo para los Países Pobres y Altamente Endeudados que imponga límites o restricciones presupuestarias que no permitan mantener o aumentar el gasto gubernamental en salud y educación. Esto prescribió en los años de Trump, pero podría ser ahora el momento de crear una ley similar (¡o mejor!).
- FMI (2007). *Public Information Notice #07/83: IMF Executive Board Discusses Operational Implications of Aid Inflows for IMF Advice and Program Design in Low-Income Countries*. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn0783>.
- ibid
- Ver por ejemplo: *Evaluating the IMF's Performance in the Global Financial Crisis* (2015) https://www.peio.me/wp-content/uploads/PEIO9/102_80_1443647577194_Gutner30Sept2015.pdf
- Las restricciones del gasto salarial ya no son condiciones de préstamos, pero los consejos y objetivos son muy coercitivos para los Ministerios de Finanzas: un problema que explicamos más detalladamente en 2020, en las páginas 51-52 de ActionAid (2020)
- ActionAid (2020).
- ActionAid (2020a). *The Pandemic and the Public Sector*. <https://actionaid.org/publications/2020/pandemic-and-public-sector>
- El Bretton Woods Project menciona la 'condición de facto' <https://www.brettonwoodsproject.org/2020/10/art-320868/> El lenguaje del FMI sobre los acuerdos de financiamiento y análisis de emergencia del Covid-19 sigue promoviendo un retorno 'rápido' a la consolidación fiscal tan pronto como pase el pico de la crisis.
- Ortiz y Cummings (2021) *Global Austerity Alert*. <https://policydialogue.org/files/publications/papers/Global-Austerity-Alert-Ortiz-Cummins-2021-final.pdf>
- Oxfam (2021) *Adding Fuel to Fire* <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621210/bp-covid-loans-imf-austerity-110821-en.pdf;jsessionid=4896CA0966A03430AB38C5ADF5AD059?sequence=1>
- Ostry, J. et al. (2016).
- La crisis de la deuda ha generado nuevos llamados a un jubileo de la deuda, con muchas organizaciones exigiendo acciones de cara al Covid-19. Ver por ejemplo el amplio rango de firmantes de esta declaración internacional de 2020 'Un jubileo de la deuda para enfrentar la crisis de salud y economía provocada por el Covid-19', por Jubilee Debt Campaign https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/International-statement_English_04.20.pdf - and also Munevar, D. (2021) 'The Debt Pandemic'. Informe Eurodad. <https://d3n8a8pro7vnm.cloudfront.net/eurodad/pages/2112/attachments/original/1622627378/debt-pandemic-FINAL.pdf?1622627378>
- Usamos el término 'neocolonial' porque las potencias occidentales controlan abrumadoramente la toma de decisiones de la Junta Directiva del FMI, mientras sus recomendaciones afectan más profundamente al Sur del planeta.
- Reinsberg et al. (2021) *Compliance, defiance, and the dependency trap: International Monetary Fund program interruptions and their impact on capital markets* <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rego.12422>. Una parte clave del poder del FMI viene del señalamiento de mercados si hay alguna interrupción del programa 'Los países caen en una trampa de dependencia: las prescripciones contenciosas de políticas provocan incumplimiento y reacciones adversas en el mercado que dejan a los países con pocas fuentes de financiamiento que no sea el FMI y los obliga a tocar nuevamente las puertas de la organización para pedir un nuevo préstamo'.

33. De Bhumika Muchhala (2021) El COVID-19 revela todo: las crisis entrelazadas de salud y Economía exigen respuestas urgentes, reformas sistemática y reinversión ideológica de la arquitectura financiera internacional. Third World Network. Recuperado el 3 de septiembre de 2021 de: <https://twm.my/title2/resurgence/2020/343-344/cover02.htm>
34. Ver por ejemplo: Bretton Woods Project (2012) *Revolving doors: staff turnover between IFIs and African governments* <https://www.brettonwoodsproject.org/2012/07/art-570796/>
35. FMI (2020) Fiscal Monitor. El monitor fiscal de abril reveló que el apoyo del Fondo al estímulo fiscal es limitado para las consecuencias inmediatas de la crisis del Covid-19. Cuando la emergencia sanitaria pública disminuya, los países en desarrollo seguirán aplicando sus medidas tradicionales de consolidación fiscal para estabilizar las relaciones de deuda que están en una 'firme trayectoria descendente'. En esencia, las medidas de consolidación fiscal del Fondo que reducen el gasto gubernamental en sistemas públicos y servicios sociales seguirán intactas en el largo plazo. <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020>
36. Ver por ejemplo el análisis de respuestas de política de la OCDE <https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses>.
37. Reuters (2021) 'Spend as much as you can,' IMF head urges governments worldwide <https://www.reuters.com/article/us-russia-imf-idUSKBN29K1XJ>
38. Financial Transparency Coalition (2021) *Towards a People's Recovery – Tracking Fiscal and Social Protection Responses to Covid in the global South* <https://financialtransparency.org/wp-content/uploads/2021/04/FTC-Tracker-Report-FINAL.pdf>
39. El Financial Times declaró esto muy prematuro en 2020 <https://www.ft.com/content/0940e381-647a-4531-8787-e8c7dafbd885>
40. Rowden, R. (2021) *If the Washington Consensus was really over, what would that look like for development strategy?* <https://braveneweuropa.com/rick-rowden-if-the-washington-consensus-was-really-over-what-would-that-look-like-for-development-strategy>
41. DAWN (2020) *Call on IMF to stop promoting austerity in the Coronavirus recovery period*. <https://dawnnet.org/2020/10/imf-stop-promoting-austerity/>
42. A veces ser una voz realmente progresista, por ejemplo, alertar sobre la inequidad de la vacuna y los peligros de una recuperación de dos vías. Ver, por ejemplo, el blog de Kristalina Georgieva (2021) <https://blogs.imf.org/2021/07/07/urgent-action-needed-to-address-a-worsening-two-track-recovery/>
43. Ver, por ejemplo, Bhumika Muchhala (2020).
44. Como anunció la UNCTAD: COVID-19: 'UNCTAD advierte una 'década perdida' si los países adoptan la austeridad' (2020) <https://unctad.org/news/covid-19-unctad-warns-lost-decade-if-countries-adopt-austerity>
45. Ver solicitudes a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2021 por 350 organizaciones de la sociedad civil: https://www.eurodad.org/global_economic_solutions_now.
46. Ortiz y Cummings (2017). Fiscal space for social protection and the SDGs: Options to expand social investments in 187 countries. ILO, UNICEF and UN Women. https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?sessionId=BVEXMcSdf7XSpd4JYjPsnmUnBcqiyiUEZ0ro_J2A8sjXnQUYod7l-1491252213?id=51537 ; Ortiz et al. (2019). *Fiscal space for social protection: A Handbook for Assessing Financing Options. ILO and UN Women*. <https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55694>
47. Ver: Munevar, D. (2021)
48. Ver la declaración de Global Alliance for Tax Justice sobre este trato del G7: https://docs.google.com/document/d/1wh1eGXxwseVNIEdP5hToA_ZnLBb-ifUexW4i4g_zN3Y/edit
49. Un resumen útil de reacciones del trato del G7 en: <https://taxjustice.net/2021/06/01/%F0%9F%94%B4-live-blog-global-minimum-tax-rate-at-g7/>
50. Ver ActionAid (2021) *Mission Recovery: How Big Tech's tax bill could kickstart a fairer recovery*. https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Mission%20Recovery_ActionAid%20Tax%20Report%202021.pdf
51. Ver, por ejemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_current_account_balance - though of course being able to service the debt is the key.
52. Cassidy, J. (2018) *The Real Cost of the 2008 Financial Crisis*. <https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/17/the-real-cost-of-the-2008-financial-crisis>. Aunque facilitar el curso cuantitativo no es tan probable que produzca inflación excesiva en economías estables de Occidente, pues se da en economías más frágiles y fluctuantes en el Sur.
53. Ver respuestas de política de la OCDE al Covid-19 <https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses?keyword=covid-19>
54. Hay opciones de movilizar recursos adicionales resumidas en el Cuadro 1, con base en la obra de Isabel Ortiz.
55. Hay, por supuesto, otros ingresos disponibles para algunos gobiernos, como regalías sobre recursos naturales. Estos son ingresos menos predecibles y permanentes que los impuestos, pero pueden agregar ingresos importantes al gobierno como un porcentaje del PIB.
56. FMI (2019) *Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investment for the SDGs* <https://blogs.imf.org/2019/01/31/mind-the-gap-in-sdg-financing/>.
57. ActionAid (2020) Tabla 10, página 93
58. ActionAid (2020) Tabla 8, página 77
59. Ver, por ejemplo, Royal College of Nursing (2020) *Public support for pay rise 'overwhelming'* <https://www.rcn.org.uk/news-and-events/news/uk-public-support-for-pay-rise-overwhelming-says-rcn-241120>
60. Tax Justice Network (2020) *The State of Tax Justice 2020* <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
61. Si el mundo económico hubiera escuchado al Phyllis Deane de 23 años en 1940: <https://theconversation.com/womens-unpaid-work-must-be-included-in-gdp-calculations-lessons-from-history-98110>
62. Todo el conjunto de Informes de Impuestos Progresivos de ActionAid's se encuentra en: <https://actionaid.org/publications/2018/progressive-taxation-briefings>.
63. Global Alliance for Tax Justice, Womankind Worldwide y Akina Mama wa Afrika (2021). *Framing Feminist Taxation: Making taxes work for women*. <https://www.globaltaxjustice.org/en/latest/framing-feminist-taxation-making-taxes-work-women>
64. La creación de un ente fiscal en Naciones Unidas está ganando apoyo: Tax Justice Network (2021) *Heads of state launch historic UN plan to stamp out global tax abuse* <https://taxjustice.net/press/heads-of-state-launch-historic-un-plan-to-stamp-out-global-tax-abuse/>
65. FMI (2013) *Beyond the Annual Budget: Global Experiences with MTEFs*. <https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/fiscalpolicy/pdf/brumby.pdf>
66. El promedio global es que los maestros son 30% del gasto salarial del sector público <https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2019/05/21/worldwide-bureaucracy-indicators-dashboard>.
67. Dichas medidas estándar estrechas son empero problemáticas en sí mismas y deben bastar para valorar que los niños vayan a la escuela en términos de respeto de derechos humanos, reducción de trabajo doméstico y cuidado no remunerado de las mujeres, etc.
68. Ver, por ejemplo, Psacharopoulos y Patrinos (2004) *Returns to investment in education: a further update. Education economics*, 12(2), 111-134. Este es un caso citado frecuentemente por Gordon Brown <https://educationcommission.org/updates/financing-education-by-gordon-brown/>
69. Gaspar, V (2019) *Medium-term Revenue Strategies: taxation and development*. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/28/sp102919-medium-term-revenue-strategy> and Mullins, P (2020) *Medium-Term Revenue Strategies: Are They Realistic for Developing Countries?* CGD: <https://www.cgdev.org/sites/default/files/medium-term-revenue-strategies-are-they-realistic-developing-countries.pdf>.
70. Global Alliance for Tax Justice, Womankind y Akina Mama wa Afrika (2021)
71. Ver sección 5.5 por una defensa de los burócratas.
72. La imposición fiscal feminista es un rumbo clave para lograr este estado redistributivo. Ver Global Alliance for Tax Justice, Womankind y Akina Mama wa Afrika (2021).

73. Transparency International <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
74. Informe de investigación del Banco Mundial 9643 'Increasing the wages of public officials could help reduce corruption in countries with low public sector wage inequality' <https://documents1.worldbank.org/curated/en/387481619624669061/pdf/Effects-of-Public-Sector-Wages-on-Corruption-Wage-Inequality-Matters.pdf>
75. Para una revisión útil de formas de corrupción en educación, consulte Transparency International (2013) *Global corruption report: Education* (pp. 94-97). Routledge https://images.transparencycdn.org/images/2013_GCR_Education_EN.pdf. No es claro cómo las restricciones del gasto salarial ayudarán a resolver los ejemplos que destacan. Ver también Romero, M. J. (2018) 'History RePPeated' <https://www.eurodad.org/historyrepppeated>. Eurodad. y Bayliss y Romero (2021) 'Rebuilding better, but better for whom?' https://www.eurodad.org/rebuilding_better
76. En algunos países, los soldados también son una categoría importante del gasto salarial en el sector público y tendrían sentido acciones orientadas a reducir sus números y costos. Sin embargo, en contextos inestables, esto puede aumentar los riesgos. El ejército nunca se menciona en los documentos del FMI.
77. PSI ofrece un resumen útil de diversos sectores entre los empleados públicos. Ver: <https://publicservices.international/resources/page/sectors?id=941&lang=en>
78. Ver, por ejemplo, ActionAid USA *Safe Cities for Women and Girls* <https://www.actionaidusa.org/work/safe-cities/>
79. CESR (2019) *Dismantling the Dogma*: https://www.cesr.org/sites/default/files/Dismantling%20Dogmas_Online.pdf
80. Ortiz y Cummings (2021).
81. Otros como CESR llaman a 'Desmantelar los dogmas de la austeridad y la injusticia fiscal': ver https://www.cesr.org/sites/default/files/Dismantling%20Dogmas_Online.pdf
82. The Bolsa Família (Brasil) y programas similares en México y Argentina tuvieron "poder redistributivo destacable" Lustig et al (2012). *Declining Inequality in Latin America in the 2000s: the Cases of Argentina, Brazil, and Mexico*. <http://www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2012-266.pdf>
83. Entre 2001 y 2015, el salario mínimo brasileño aumentó en 72,84% en términos reales.
84. UNDP (2020) indicó que Brasil bajó cinco puestos en la clasificación mundial de HDI (índice de desarrollo humano). Pasó del puesto 79 al 84, entre 189 países.
85. Ver, por ejemplo: (FMI) 2020. *Brazil: 2020 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Brazil*. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/01/Brazil-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49927>
86. Ibid.
87. FMI (2018) *Rightsizing Brazil's Public-Sector Wage Bill* <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/10/08/Rightsizing-Brazils-Public-Sector-Wage-Bill-46194>
88. ActionAid (2005) y ActionAid (2007) contribuyó al cambio de posición de la Junta del FMI sobre los techos salariales. Ver FMI (2007)
89. ActionAid (2020) Tabla 7, página 66,
90. Artículo IV es la evaluación de "supervisión" anual de economías nacionales ordenada por la constitución del FMI. Estos informes publicados son muy consultados por inversionistas internacionales y gobiernos para orientar sus decisiones de ayuda e inversión. Los consejos de estos informes pueden tener un gran efecto coercitivo. No pusimos una nota final individual cada vez que nos referimos a un Artículo IV, pero mencionamos el nombre y la fecha. Puede acceder a ellos en las páginas de información de país del FMI: <https://www.imf.org/en/Countries>.
91. Los documentos de préstamo incluyen la Facilidad de Crédito Extendido, que reemplazó a la Facilidad de Reducción de Pobreza y Crecimiento. Puede acceder a ellos en la base de datos del FMI de compromisos de préstamo: <https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr1.aspx>.
92. Esto incluye llamados específicos a discutir nuestro estudio con economistas senior del FMI del 22 de junio de 2020 y 22 de abril de 2021, así como discusiones en eventos anuales de política de la sociedad civil en primavera, interacciones con la Oficina de Evaluación Independiente del FMI y llamados ligados con la Revisión Exhaustiva de Supervisión.
93. De hecho, los préstamos del FMI también deben ser temporales y aun así muchos países del Sur han participado en programas consistentes por décadas. Esto muestra claramente que sus programas no funcionan, incluso según sus propias medidas de éxito.
94. Kenia, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Vietnam (consejo de recortar y/o congelar por seis años), Brasil, Senegal y Zimbabue (consejo de recortar y/o congelar por cinco años).
95. Esto incluye a Brasil, según análisis del nivel federal de gasto salarial en el sector público. A nivel estatal y municipal, el último consejo llevará a un aumento del salario en el sector público a mediano plazo.
96. Este análisis no fue posible para Senegal y Vietnam, pues las tablas no incluyen cifras reales de salarios del sector público para comparar las directrices presupuestarias más recientes.
97. FMI. (2016). *Sierra Leone: 2016 Article IV Consultation and Fifth Review Under the Extended Credit Facility and Financing Assurances Review and Request for an Extension of the Extended Credit Facility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sierra Leone*. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Sierra-Leone-2016-Article-IV-Consultation-and-Fifth-Review-Under-the-Extended-Credit-44098>
98. Ibid.
99. La nota al pie reza: "La contratación solo fue restringida en el sector de la educación en vista de la política de educación primaria y secundaria gratuita y de calidad recientemente adoptada".
100. El informe del Artículo IV de 2019 también muestra el reciente impulso para contratar 5.000 maestros y aumentar en 30% sus salarios para ayudar a mejorar la calidad de la educación (mientras acepta que los salarios están en niveles de pobreza y frente a un escenario de incremento del costo de la vida).
101. La única excepción del objetivo de 6% del presupuesto fue la Solicitud de Desembolso de 2020 bajo la Facilidad de Crédito Rápido, donde la directriz de medio plazo era lograr un gasto salarial en el sector público de 6,4% para el Año Fiscal 2025. Este objetivo ligeramente más alto no se explica en el documento, pero probablemente haya sido influido por un aumento en el gasto salarial del sector público como un porcentaje del PIB debido a la pandemia del Covid-19. No obstante, esto viene junto con una directriz presupuestaria de hacer un recorte neto del gasto salarial de 0,5 punto porcentual por seis años. La Solicitud de Desembolso de 2021 bajo la Facilidad de Crédito Rápido asigna 677 mil millones adicionales para fortalecer el sector de la salud, incluyendo contratar a 10.000 trabajadores sanitarios adicionales y seguir incentivando que el personal médico luche contra el Covid-19. Sin embargo, existe una directriz presupuestaria adicional de recortar el gasto salarial en el sector público en 1,9 punto porcentual en cuatro años (para alcanzar 6% del PIB nuevamente) y luego congelarlo por dos años.
102. Esto es el salario mínimo para que una familia de cinco pueda cubrir las condiciones básicas de vida en el caso de los maestros con los salarios más bajos.
103. FMI (2021) Sierra Leone
104. Ibid.
105. Sepúlveda, M (ed) (2017) *The Obligation to Mobilise Resources: Bridging Human Rights, Sustainable Development Goals, and Economic and Fiscal Policies*. International Bar Association https://www.researchgate.net/publication/327755947_The_Obligation_to_Mobilise_ResourcesBridging_Human_Rights_Sustainable_Development_Goals_and_Economic_and_Fiscal_Policies
106. FMI (2016) *Managing Government Compensation And Employment— Institutions, Policies, And Reform Challenges*. Página 34 <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Managing-Government-Compensation-and-Employment-Institutions-Policies-and-Reform-Challenges-PP5044>
107. TJNA (2011) *Tax us if you Can – Why Africa should stand up for tax justice*. Este texto da algunas razones convincentes para los impuestos progresivos "... Los ingresos fiscales son necesarios para que cualquier Estado cubra las necesidades básicas de sus ciudadanos. En África, los ingresos fiscales serán esenciales para establecer Estados independientes con ciudadanos libres, menos dependientes de la ayuda externa y los caprichos del capital extranjero". https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/tuyc_africa_final.pdf

108. Oxfam (2021)
109. Incluso Christine Lagarde, exdirectora ejecutiva del FMI, destacó, en una editorial abierta del Financial Times en 2019 que 'Una revisión del sistema fiscal internacional ya no puede esperar' <https://www.ft.com/content/9c5a1aa4-3ff2-11e9-9499-290979c9807a>
110. Bretton Woods Project (2017) *The IMF, Gender Equality and Expenditure*, página 6 – referencia a Bundgaard et al. IMF 2009. <https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2017/09/The-IMF-Gender-Equality-and-Expenditure-Policy-CESR-and-BWP-Sept-2017.pdf>
111. Hay otras fuentes, como la OCDE y la base de datos de UN WIDER, que pueden ser más precisas para países específicos, pero menos integrales. A pesar de las limitaciones de datos, confiamos en las conclusiones que podamos extraer del patrón en diferentes países. El Banco Mundial y el FMI deben hacer esfuerzos serios por mejorar sus datos en esta área.
112. FMI (2019) *Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investment for the SDGs*, - <https://blogs.imf.org/2019/01/31/mind-the-gap-in-sdg-financing/>
113. Bangladesh, Kenia, Liberia, Senegal y Zimbabwe.
114. Ghana, Sierra Leona, Tanzania, Uganda y Vietnam.
115. Este es en realidad un umbral mínimo para un Estado funcional; otros demandarían un mayor porcentaje.
116. Ver por ejemplo: FMI (2018). *Finance & Development* (Vol 55, publicado el 2 de diciembre de 2018). *Creating Fiscal Space. D Coady*. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0055/004/article-A007-en.xml> IMF (2016). IMF Working Paper. Tax Capacity and Growth : Is there a Tipping Point? (Dec 2016) <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Tax-Capacity-and-Growth-Is-there-a-Tipping-Point-44436> Otros arguyen que se necesita una relación impuestos-PIB mínima de 20% para lograr los objetivos de desarrollo.
117. Bangladesh, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Tanzania, Uganda, Vietnam y Zimbabwe.
118. Se necesita más investigación para determinar un umbral mínimo adecuado de impuestos-PIB, sin olvidar lo requerido para cumplir con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo. Un mínimo más realista es quizá de al menos 20%.
119. Por supuesto, hay otros factores que pueden afectar drásticamente el margen de maniobra fiscal, como el nivel de servicio de la deuda, que ha crecido rápidamente en muchos países los últimos años. Este informe no se enfoca en acciones urgentes necesarias para atender esta crisis en aumento, pero lo tratamos en el Cuadro 2. Además, apoyamos los llamados por una acción multilateral más ambiciosa sobre cancelación y renegociación de la deuda que involucre a todos los acreedores y países sobreendeudados.
120. Ortiz y Cummings (2021)
121. Oxfam (2021).
122. La austeridad dista mucho de ser nueva. Ver: Raaber y Aguiar (2011) *Feminist critiques, policy alternatives and calls for systemic change to an economy in crisis Association for Women's Rights in Development* https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IAFFE2011&paper_id=262.
123. Hay que mejorar urgentemente los datos, con una reevaluación de asunciones, mayor claridad de lo que se incluye y excluye y más atención a diferentes niveles de gobierno.
124. Antes de 2014, el costo de la canasta para una familia típica de cinco era usado para medir la línea de pobreza. Sin embargo, desde 2014, ZIMSTAT marca la línea de pobreza por persona, pero nosotros usamos la comparación de los ingresos promedios mensuales de los trabajadores de la salud y la educación, así como la línea de pobreza alimentaria promedio para una familia típica de cinco en el periodo de 2010 a 2020.
125. Usando la tasa de cambio del mercado paralelo y la tasa oficial, respectivamente.
126. Desde noviembre de 2020, ZIMSTAT reporta dos medidas llamadas línea de pobreza alimentaria y línea de pobreza de consumo total.
127. Aunque esto mejoró en 2020, esto solo era 86% (con base en el promedio de dos tasas) de lo que ganaban una década atrás en 2010 y 30% de lo que ganaban cuando terminó la dolarización en 2018. En noviembre de 2020, se reportó que, luego de muchas negociaciones, el Gobierno acordó asignar un 40% de aumento salarial a los empleados públicos, lo cual produjo que los maestros compraran viviendas de ZWL\$18.237. Artículo en línea, 'Zimbabwe: Salary Increment a One Sided Affair – Teachers' en el sitio web <https://allafrica.com/stories/202011120735.html> accessed 17 July 2021.
128. Esto fue confirmado por salarios reales, que solo fueron negativos en 2019, lo que mostró que la situación era contenible sin los retos de devaluación de la moneda y la inflación de 2019. Pero esto también suma a los mayores ingresos y la tasa de inflación.
129. New Zimbabwe (2020) *Thousands Ditch Poor Paying Teaching Profession*, More Expected To Leave <https://www.newzimbabwe.com/thousands-ditch-poor-paying-teaching-profession-more-expected-to-leave/>
130. OIM Zimbabwe (2010) *The Impact of the Brain Drain on Health Service Delivery in Zimbabwe: A Response Analysis*. https://publications.iom.int/system/files/pdf/zimbabwe_health_workers_survey_15_dec.pdf
131. Reuters (2021) *World Bank Kills Business Climate Report*. <https://www.reuters.com/business/sustainable-business/world-bank-kills-business-climate-report-after-ethics-probe-cites-undue-pressure-2021-09-16/>
132. 51% de los maestros son permanentes. Ahora hay 100.000 maestros permanentes en Nepal.
133. Tomado de la encuesta laboral de Nepal.
134. 94% de los trabajadores de desarrollo de la primera infancia en Nepal son mujeres.
135. Esto era hasta hace poco solo NR 8.000. Existe una propuesta de aumentarlo a NR 15.000 (apenas unos US\$ 130), de los cuales solo la mitad es cubierta por el Gobierno Federal y el resto por gobiernos locales. Pero el Gobierno Federal solo ofrece aún NR800.
136. La única excepción es el Artículo IV de 2019 para Zimbabwe que usa la comparación con otros países para mostrar progreso al recortar el gasto salarial. Esto muestra que el gasto salarial del sector público ha pasado de estar por encima del promedio de África subsahariana a por debajo del mismo en 2019.
137. FMI (2019) *Liberia : 2019 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Liberia*. June 19 2019. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/06/19/Liberia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-47002>
138. ActionAid (2020), página 66.
139. Ha habido un declive progresivo en la asignación total del ingreso a los trabajadores (en comparación con los dueños del capital) documentado por la OIT <https://ilostat.ilo.org/topics/labour-income/>. Ver también: *ILO Department of Statistics (2019) The Global Labour Income Share And Distribution Data Production and Analysis Unit, Key Findings* https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_712232.pdf
140. Ver Hanoi Times (2020) <http://hanoitimes.vn/nearly-89-of-vietnam-population-covered-by-health-insurance-312803.html>
141. Investigaciones sobre los costos de vida en estas dos ciudades hallaron que el costo promedio de vida en Hanoi para una persona es de 10.000.000 VND, mientras en Ho Chi Minh City es 11.000.000 VND <https://thanhvien.vn/doi-song/phi-sinh-hoat-o-viet-nam-tang-5-bac-tphcm-thanh-noi-dat-do-nhat-nuoc-1251778.html>.
142. Ver estos artículos (en vietnamita) <https://vnexpress.net/luong-benh-vien-tu-cao-gap-nhieu-lan-khien-bac-si-nhay-viec-3893424.html> and <https://vnexpress.net/bac-si-dong-nai-thoi-viec-10-nam-kinh-nghiem-luong-chi-15-trieu-dong-3892870.html>
143. Esto se medirá frente a la región con el mayor salario promedio para superar algunos de los más altos costos de vida en ciudades.
144. El FMI ha recomendado consistentemente a Vietnam recortar o racionalizar el gasto salarial en el sector público. Entre 2016 y 2020, los documentos del Artículo IV incluyen el consejo explícito de reducir y/o racionalizar el gasto salarial, que está caracterizado como grande y alto comparado con otros países.
145. FMI (2016)
146. El salario promedio de las mujeres es 86% del de los hombres en el sector público, comparado con 76% del salario de hombres en el sector formal privado. Banco Mundial (2019) *Five facts about gender equality in the public sector* <https://blogs.worldbank.org/>

governance/five-facts- about-gender-equality-public-sector

147. Ver, por ejemplo: Fabrizio et al. (2020) *Women in the Labor Force: The Role of Fiscal Policies*. Staff Discussion Note: IMF
148. Bretton Woods Project (2021) *Latest IMF gender research: Making the economy work for women, or women work for the economy?* <https://www.brettonwoodsproject.org/2021/07/latest-imf-gender-research-making-the-economy-work-for-women-or-women-work-for-the-economy/>
149. Ver el blog Economics (2019) *Private Sector vs Public Sector* <https://www.economicshelp.org/blog/2634/economics/private-sector-vs-public-sector/>
150. En particular, aumentar la carga del trabajo doméstico y cuidado no remunerado de las mujeres. Ver Bretton Woods Project (2019a) *IMF's recognition of unpaid care work undermined by its own harmful policy advice* <https://www.brettonwoodsproject.org/2019/12/imfs-recognition-of-unpaid-care-work-undermined-by-its-own-harmful-role/>
151. Ver: Revisión ECF para Ghana de 2019: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/04/05/Ghana-Seventh-and-Eighth-Reviews-Under-the-Extended-Credit-Facility-Arrangement-and-Request-46737> Nigeria 2018 Article IV: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/07/Nigeria-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45699> Uganda 2020 RCF Request: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/14/Uganda-Request-for-Disbursement-under-the-Rapid-Credit-Facility-Press-Release-Staff-Report-49427>
152. OIT (2018) *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. <https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Women%20and%20Men%20in%20the%20Informal%20Economy%203rd%20Edition%202018.pdf>
153. Ver artículo de Reuters (2021) *Hundreds of Nigerian union members protest over possible minimum wage change* <https://www.reuters.com/article/uk-nigeria-economy-protests-idUSKBN2B21T5>
154. Curiosamente, nuestro estudio mostró que en 2019 esto era cerca de 70% del presupuesto gubernamental; cerca del promedio entre el ingreso a pares regionales (es decir, esto es 71% en Kenia, 85% en India y 92% en Sudáfrica).
155. Ver su sitio web mundial: <https://theirworld.org/explainers/teachers-and-learning>
156. En 2015 estimaron que, para 2020, esto sería 1,3 millones. Sanulbii y Aputou (2015) *The Nigeria education system and vision 20: 2020: A critical development planning perspective*. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, Vol. 7(2), pp. 26-38.
157. El FMI parece recurrir mucho más a los datos y el consejo de su organización hermana, el Banco Mundial, donde una ideología compartida implica que la información proporcionada coincide más ampliamente. Esto parece ser el caso de lo que puede llamarse un sesgo de confirmación estructural.
158. OMS (2016) *Health Workforce Requirements For Universal Health Coverage And The Sustainable Development Goals* <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250330/9789241511407-eng.pdf;sequence=1>
159. UNESCO (2015) *The Challenge of Teacher Shortage and Quality* <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232721>
160. Ver OCDE (sin fecha) *The Education For All Fast-Track Initiative (EFA-FTI)* <https://www.oecd.org/dac/37819963.pdf>
161. CEDAW ha hecho algunos comentarios útiles sobre cómo los Estados deben prestar servicios públicos para asegurar derechos humanos específicos y promover la participación económica de las mujeres. También ha destacado que los recortes en los servicios públicos “han tenido un impacto negativo y desproporcionado en las mujeres en todas las esferas de la vida” “Comité CEDAW (2017) *Concluding observations on the seventh periodic report of Italy*” <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2F%2BgWnU4%2Fln%2BZiHvEZQc5SEWgcHa%2F%2BgSomFFrulyt%2FajkB5IO3%2FHDJ86%2FVRXmK72WeXGB9aYXQX5DqYUGqKWwW>
162. Bretton Woods Project (2019) *The IMF and Gender Equality: Operationalising Change*: <https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2019/02/Operationalising-Change.pdf>; Bretton Woods Project (2019a); and Womankind (2019) *Working towards a just feminist economy*. <https://www.womankind.org.uk/>
- wp-content/uploads/2019/03/working-towards-a-just-feminist-economy-final- web.pdf.
163. Ver artículo de la UNESCO (sin fecha): *UNESCO study shows Africa and Arab States are worst hit by teacher shortage* <https://en.unesco.org/news/unesco-study-shows-africa-and-arab-states-are-worst-hit-teacher-shortage>. A menos que haya una mejora, el déficit de maestros de escuela primaria será peor en 2030 que hoy debido a la creciente población estudiantil.
164. Aunque Nigeria también aumentó 3,4% del PIB de ingresos no fiscales (como petróleo) en 2019. Ver OCDE (2019) *Revenue Statistics in Africa 2020 - Nigeria*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-africa-nigeria.pdf>
165. Hay muchos mayores retos para el modelo del FMI, tanto interna como externamente. Por ejemplo, Ostry et al. (2016) se preguntan si el neoliberalismo ha sido demasiado publicitado, ya que los impactos negativos en el desempleo y la desigualdad no han sido tan mostrados y hay un círculo vicioso que frena el crecimiento, justamente lo que el FMI intenta impulsar.
166. Obviamente hay algunos ejemplos de personas empleadas por el sector público que no están involucradas en los servicios públicos o el desarrollo productivo (quizá los soldados son los más destacados) de acción objetiva o específica para reducir sus números.
167. Banco Mundial (2006) *Schooling Access to Learning Outcomes*: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/370901468154169343/pdf/372650Schooling0Access01PUBLIC1.pdf>
168. Oxfam (2020b) *Catastrophe to Catalyst*, página 25: <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621113/bp-catastrophe-catalyst-world-bank-covid-19-041220-en.pdf>
169. Ver Oxfam (2020) *Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis* <https://www.oxfam.org/en/research/time-care>
170. Aunque el documento de política excluyó los sectores de salud y educación, ha habido un control más estricto de la contratación en esos sectores; uno es que ninguna institución sanitaria o educativa puede contratar sin la aprobación financiera del Ministerio de Finanzas y el ministerio correspondiente.
171. Luego de una enorme protesta de trabajadores organizados y un rechazo de organizaciones de la sociedad civil, hubo un aumento modesto de 4% del salario público en 2021 contra un promedio proyectado de tasa de inflación de 8%. Modern Ghana (2021) *4% Pay Rise for 2021: The Weakest Negotiations Ever by Organized Labour* <https://www.modernghana.com/news/1091718/4-pay-rise-for-2021-the-weakest-negotiations.html>
172. Ver el artículo web de Joy Online (2021) *Don't expect huge wage increment because there's no money to pay* – Technical Adviser at Finance Ministry to public sector workers <https://www.myjoyonline.com/dont-expect-huge-wage-increment-because-theres-no-money-to-pay-technical-adviser-at-finance-ministry-to-public-sector-workers/>
173. Salarios y otros incentivos, incluyendo pensiones.
174. Así como el límite de país específico de 18% del FMI para Ghana.
175. El Servicio de Salud de Ghana necesitaba 105.440 trabajadores sanitarios para cumplir sus requisitos mínimos de personal para mayo de 2018, con respecto a sus 61.756 trabajadores en funciones, lo cual los dejó, en consecuencia, escasos de personal.
176. Ver artículos en línea del Ghana Summary (2020) *Over 41,000 graduate nurses are currently unemployed* <https://ghanasummary.com/asepanews/203975/over-41000-graduate-nurses-are-currently-unemployed> y del GhanaWeb (2019) *Over 41,000 graduate nurses are currently unemployed* <https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Over-41-000-graduate-nurses-are-currently-unemployed-792886>
177. Women's Budget Group (2020) *A care-led response to Coronavirus* <https://wbg.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/Care-led-recovery-final.pdf>
178. Bretton Woods Project (2018) - *The impacts of IMF-backed austerity on women's rights in Brazil* <https://www.brettonwoodsproject.org/2018/03/impacts-imf-backed-austerity-womens-rights-brazil/>
179. George Monbiot (2021) *We Can't Build our Way out of the Environmental Crisis*: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/01/build-environmental-crisis-infrastructure-pandemic-concrete>

180. Ibid.
181. Ver plan de emergencia del Gobierno de Senegal (sin fecha) <https://www.sec.gouv.sn/dossiers/plan-s%C3%A9n%C3%A9gal-emergent-pse>
182. Ver La COSYDEP Sénégal (Coalition des Organisations en SYnergie pour la Défense de l'Éducation Publique) (sin fecha) <http://cosydep.org/>
183. Banco Mundial: *Maximising Finance for Development is all about 'leveraging the private sector' to 'bolster scarce public resources'*. Ver World Bank (sin fecha) Maximizing Finance for Development (MFD) <https://www.worldbank.org/en/about/partners/maximizing-finance-for-development>
184. Esta lógica de reducir el riesgo del sector privado se muestra claramente en este blog de junio de 2021 del FMI (2021) *How to Attract Private Finance to Africa's Development* <https://blogs.imf.org/2021/06/14/how-to-attract-private-finance-to-africas-development/>
185. FMI (2021) *Private Finance for Development* <https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/14/Private-Finance-for-Development-50157>
186. La definición de un 'estado más eficiente' parece ser la de uno que protege e impulsa los intereses de negocios por encima de las personas.
187. Kimani tenía 84 años cuando asistió a la escuela por primera vez: Una historia contada en la película *The First Grader* - <https://www.imdb.com/title/tt0938304/>.
188. Ver documentos sobre la eliminación de tarifas a usuarios en África: Banco Mundial (2009) *Abolishing School Fees in Africa: Lessons from Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, and Mozambique* <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2617?locale-attribute=en>
189. Ver, por ejemplo: Romero, M. J. (2018).
190. FMI (2021) *'Mastering the Risky Business of Public-Private Partnerships in Infrastructure'* muestra que hay un reconocimiento de la sede principal de los riesgos, pero esto no se traslada a los consejos dados a países. <https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/10/Mastering-the-Risky-Business-of-Public-Private-Partnerships-in-Infrastructure-50335>
191. Romero y Brunswijk (2019) *The IMF and PPPs: A master class in double-speak* https://www.eurodad.org/the_imf_and_ppps
192. Romero, M. J. (2018)
193. Gender and Development Network (GADN) (2020) *The impact of PPPs on gender equality and women's rights* <https://gadnetwork.org/gadn-resources/the-impact-of-ppps-on-gender-equality-and-womens-rights>
194. B. Reinsberg (2019) *How privatization increases corruption in the developing world*. Bernhard Reinsberg Centre for Business Research, Universidad de Cambridge.
195. Ver por ejemplo Center for Economic and Social Rights (CESR) (2020) *Public financing of public services*: https://www.cesr.org/sites/default/files/Public%20financing%20of%20public%20services%20-%20FINAL_0.pdf; and ActionAid (2018).
196. Esto se opone abiertamente a la evidencia creciente de que el servicio público funciona más eficientemente. Ver, por ejemplo: GL-ESCR et al (2021) Informe de investigación *'Public Education Works'*: <https://www.gi-escr.org/publications/working-paper-public-education-works-lessonsfrom-five-case-studies-inlow-and-middle-income-countries>
197. OMS (2019) *Financing for Universal Health Coverage: Dos and Don'ts HEALTH FINANCING GUIDANCE NOTE NO 9* <https://p4h.world/system/files/2019-09/WHO19-01%20health%20financing%20complete%20low%20res%200922.pdf>.
198. Estadísticas de la OIT sobre membresía a sindicatos <https://ilostat.ilo.org/topics/union-membership/>.
199. Datos de Sindicatos del OCDE <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD>.
200. FMI (2015) *Finance and Development*. Marzo de 2015. Vol 52, No.1 <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/jaumotte.htm> IMF (2015b) *'Inequality and Labour Market Institutions* <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf>
201. Malawi : Solicitud de Desembolso bajo la Facilidad de Crédito Rápido- Comunicado de Prensa; Informe del Personal y Declaración del Director Ejecutivo para Malawi, octubre de 2020 <https://www.imf.org/en/Publications%E2%80%8C/CR/Issues/2020/10/20/Malawi-Request-for-Disbursement-Under-the-Rapid-Credit-Facility-Press-Release-Staff-Report-49831>.
202. A pesar del hecho de que algunos en el FMI reconocen en importante rol de los sindicatos para reducir la desigualdad – ver Nota de Discusión del Personal (2015) *Inequality and Labor Market Institutions* <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf>
203. Ver Índice Global de Derechos ITUC (2020) *2020 ITUC Global Rights Index: violations of workers' rights at seven-year high* <https://www.ituc-csi.org/violations-workers-rights-seven-year-high>.
204. Reinsberg et al. (2019) *The political economy of labour market deregulation during IMF interventions*: https://bernhardreinsberg.files.wordpress.com/2019/01/ii_manuscript_final.pdf
205. Ver último llamado de ITUC a reformar el FMI para una recuperación resiliente. ITUC (2021) *Reforming the IMF for a resilient recovery* https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/reforming_the_imf_for_a_resilient_recovery_v2.pdf
206. Reinsberg et al. (2021). *Compliance, defiance, and the dependency trap: International Monetary Fund program interruptions and their impact on capital markets. Regulation & Governance*. <https://doi.org/10.1111/rego.12422>. Stubbs et al. (2020). *How to evaluate the effects of IMF conditionality. The Review of International Organizations*, 15(1), 29-73. https://theconversation.com/lots-of-imf-programmes-are-never-completed-because-theyre-unworkable-161905?msdynttrid=tEaZF7LWgTmGEf-LOApi5iBmzXPVfowvAK3x_k3L1JM.
207. Hay muchos más libros académicos que celebran el rol de los burócratas. Por ejemplo, Ho, C. J. (2021) *'Bureaucrats with technical expertise – technocrats – can play a defining role, deploying international pressure to court executive support and orchestrate policy change'*. Próximamente en American Political Science Review https://www.carmenjacquelineho.com/uploads/6/9/4/1/69414019/carmen_jacqueline_ho_benevolent_policies_manuscript.pdf
208. Ver por ejemplo Mirror Mirror (2014) *Comparing Health Systems across Countries* <https://www.commonwealthfund.org/publications/cross-reports/2014/jun/mirror-mirror-wall-2014-update-how-us-health-care-system>
209. Ver por ejemplo artículo de política del gobierno del Reino Unido (2021): *Data saves lives: reshaping health and social care with data (draft)* <https://www.gov.uk/government/publications/data-saves-lives-reshaping-health-and-social-care-with-data-draft>. 'Encontramos que la calidad del diseño de políticas mejora significativamente cuando los hacedores de políticas no están vinculados con altas restricciones institucionales y, más importante, respaldada por burocracias bien equipadas.' *Studying Policy Design Quality in Comparative Perspective* publicado en línea por Cambridge University Press: 2021 <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/studying-policy-design-quality-in-comparative-perspective/30612CC213BFD22A7A3D357990E4A51B>
210. 'Los servicios públicos fueron debilitados también tras una década de presiones presupuestarias en que bajaron la calidad, el personal se redujo, los edificios tuvieron poco mantenimiento y no se compró equipo vital.' *How Fit were Public Services for Coronavirus?* Institute of Government, UK 2020.
211. Ver por ejemplo EPSU *Public Services and Adaptation to Climate Change* https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/2_EPSU%20Public%20services%20and%20adaptation%20to%20climate%20change%20for%20reading.pdf
212. ICTD (2017) *How Can Governments of Low Income Countries collect More Tax Revenue*. <https://www.ictd.ac/publication/how-can-governments-of-low-income-countries-collect-more-tax-revenue/>
213. Tomado del discurso sobre presupuesto de 2009 del Ministro de Finanzas Pranab Mukherjee <https://www.indiatoday.in/business/budget/story/full-text-of-pranabs-budget-speech-51516-2009-07-06>
214. Brasil, Kenia, Liberia, Malawi, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Vietnam, Zimbabue
215. UNICEF apoyó fuertemente y desde el principio la necesidad de proteger a los trabajadores de la salud y la educación, como se discutió en el artículo de UNICEF (2010): *Policy and Practice*

Working Paper. "Protecting Salaries of Frontline Teachers and Health Workers," https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1745486

216. Informe sobre las obligaciones de invertir el máximo de los recursos disponibles: https://www.cesr.org/sites/default/files/CESR_COVID_Brief_1.pdf
217. CESR (2021b) Informe sobre los derechos humanos y la respuesta del FMI a Covid <https://www.cesr.org/sites/default/files/Brief%2012%20-%20IMF%20FINAL%20PDF.pdf>
218. Ibid.
219. Los ODS tienen más tirón en el FMI que los tratados y convenios de derechos humanos. Esto es problemático, pero es mejor que nada. Ver el blog del FMI (2021) *Achieving the Sustainable Development Goals Will Require Extraordinary Effort by All* <https://blogs.imf.org/2021/04/29/achieving-the-sustainable-development-goals-will-require-extraordinary-effort-by-all/>
220. FMI (2018a) How to Note on Gender: <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/13/pp060118howto-note-on-gender>.
221. Oxfam (2020). Time to Care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis; y OIT (2019) Care Work and Care Jobs., <https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/care-for-fow/lang-en/index.htm>
222. Bretton Woods Project (2017) *Womankind* (2019) Bretton Woods Project (2020a) article: <https://www.brettonwoodsproject.org/2020/04/un-committee-holds-pakistan-to-account-for-imf-programme-impacts-on-women/PSI> (2018) Advancing Women's Human Rights through Gender Responsive Public Services <http://www.world-psi.org/en/advancing-womens-human-rights-through-gender-responsive-public-services>
223. WWW (2021) Artículo sobre el Informe Mundial del FEM sobre la Brecha de Género: <https://www.wherewomenwork.com/Career/3248/World-Economic-Forum-Global-Gender-Gap-Report-2021>
224. Stromquist, N. (2018) *Global Status of Teachers and the Teaching Profession, Education International* http://ei-ie-a.org/sites/default/files/docs/2018_ei_research_statusofteachers_eng_final.pdf
225. Ver los Indicadores de Trabajo Decente elaborados por la OIT https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang-en/index.htm
226. Banco Mundial (2019)
227. Ver, por ejemplo *PSI on Privatisation and Women's Human Rights* https://world-psi.org/uncsw/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/FactSheetCSW63_Privatisation.pdf
228. George Monbiot ofrece una útil introducción a este proyecto ideológico detrás del neoliberalismo <https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot>.
229. Ver Rosa Luxemburg Stiftung sobre alternativas decoloniales y feministas de Bhumika Muchhala (2020) Towards a Decolonial and Feminist Global Green New Deal <https://www.rosalux.de/en/news/id/43146/towards-a-decolonial-and-feminist-global-green-new-deal>
230. UNCTAD (2020) *Trade and Development Report* señala que "existe un peligro muy real de que el déficit arrastre a los países a otra década perdida, acabando con cualquier esperanza de hacer realidad la ambición de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". <https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2020>
231. Aunque en muchas ocasiones es capaz de aprovechar los shocks para acelerar los procesos de privatización - como documenta Naomi Klein en la Doctrina del Shock <https://tsd.naomiklein.org/shock-doctrine.html>.
232. Por ejemplo, ver el Grupo Mbeki sobre Flujos Financieros Ilícitos. UNECA (2015) Illicit financial flows: report of the High Level Panel on flujos financieros ilícitos procedentes de África <https://repository.uneca.org/handle/10855/22695>
233. El enfoque de ActionAid sobre los servicios públicos sensibles al género se articula aquí: <https://actionaid.org/publications/2018/framework-2018-gender-responsive-public-services>
234. Ver, por ejemplo, Reconstruir mejor: A call for Courage, octubre de 2020 https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/5d208cd0-3108-4f87-ae26-4a8f5572a817_BBB_Publication_Online_1_1.pdf
235. Ver, por ejemplo: The New York Times (2021) Biden Infrastructure Plan (paywall) <https://www.nytimes.com/2021/03/31/business/economy/biden-infrastructure-plan.html> y South China Morning Post (2021) Biden's US\$2.25 trillion infrastructure plan boldly recognises public sector role <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3128165/bidens-us225-trillion-infrastructure-plan-boldly-recognises-public>
236. Werber (2020) "The case for treating childcare like essential economic infrastructure" <https://qz.com/work/1894505/childcare-is-infrastructure-for-families-elizabeth-warren-says/>
237. Hay algunos cambios en el lenguaje que observamos que podrían ofrecer un camino a seguir. Por ejemplo, en Senegal hay un cambio evidente desde el Artículo IV de 2017 que observa: "La inversión pública [incluye] el gasto público en sueldos y salarios del personal de primera línea en educación y salud, ambos considerados como inversión en capital humano". Reconocer los salarios del sector público como una inversión y no solo como un coste es un primer paso clave.
238. Ver, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel sobre Salud, Empleo y Crecimiento Económico. Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo (ICTD) (2017) How Can Governments of Low-Income Countries Collect More Tax Revenue? <https://www.ictd.ac/publication/how-can-governments-of-low-income-countries-collect-more-tax-revenue/>
239. Ver más sobre el avance de una economía feminista: *Womankind* (2019); ActionAid Netherlands (2019) Advancing feminist economic alternatives for a fair, green, gender equal world <https://actionaid.nl/2020/11/19/feminist-economy/>; y aquí <https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/Framing%20Feminist%20Taxation%20-%20VF%20two%20page.pdf>.
240. Ver, por ejemplo: The Guardian (2021) Oxford/AstraZeneca Covid vaccine research 'was 97% publicly funded' <https://www.theguardian.com/science/2021/apr/15/oxfordastrazeneca-covid-vaccine-research-was-97-publicly-funded>; y Scientific American (2020) For Billion-Dollar COVID Vaccines, Basic Government-Funded Science Laid the Groundwork <https://www.scientificamerican.com/article/for-billion-dollar-covid-vaccines-basic-government-funded-science-laid-the-groundwork/>
241. Ver People's Vaccine Alliance <https://peoplesvaccine.org/>.
242. Ver, por ejemplo, el análisis de Transparencia Internacional (2020) COVID-19 HA CREADO CONDICIONES EN LAS QUE LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN SANITARIA PUEDE PROSPERAR. ASÍ ES COMO OPEN LA CONTRATACIÓN AYUDARÍA <https://www.transparency.org.uk/covid-19-has-created-conditions-which-corruption-health-procurement-can-flourish-heres-how-open-and-open-democracy> (2020) Politically connected firms were given 'high priority' for government COVID contracts, official report finds <https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/national-audit-office-investigating-uk-government-covid-contracts-after-cronyism-accusations/>
243. Ver, por ejemplo, este análisis de las Naciones Unidas: UN/DESA Policy Brief #79: (2020) The role of public service and public servants during the COVID-19 pandemic <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-des-a-policy-brief-79-the-role-of-public-service-and-public-servants-during-the-covid-19-pandemic/>
244. Por ejemplo, Mariana Mazzucato ha realizado un interesante trabajo sobre la reimaginación del Estado: <https://marianamazzucato.com/books/mision-economy>.
245. Ver Greenpeace (2019) 8 reasons why we need to phase out the fossil fuel industry <https://www.greenpeace.org/usa/research/8-reasons-why-we-need-to-phase-out-the-fossil-fuel-industry/>
246. Ver Trade Unions for Energy Democracy 'Preparing a Public Pathway' (2017) <http://unionsforenergydemocracy.org/resources/tued-publications/tued-working-paper-10-preparing-a-public-pathway/> o <https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article43682>
247. Sobre pérdidas y daños, ver el Mecanismo de Varsovia: UNFCCC (sin fecha) Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts (WIM) <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage-id/warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-associated-with-climate-change-impacts-wim>
248. ActionAid (2021) *Avoiding the Climate Poverty Spiral: Social protection to avoid climate-induced loss & damage*. <https://actionaid.org/publications/2021/avoiding-climate-poverty-spiral-social-protection-avoid-climate-induced-loss>

249. Cada vez más reconocido en Estados Unidos por la administración Biden, véase el blog del NRDC (2020) Public Sector and Healthcare Essential to Climate Resilience <https://www.nrdc.org/experts/juanita-constible/public-sector-and-healthcare-essential-climate-resilience>
250. Existe un movimiento creciente para reimaginar los servicios públicos, y un amplio grupo de organizaciones colabora con los relatores especiales de la ONU y otros organismos para impulsar un nuevo manifiesto de servicios públicos (véase, por ejemplo, <https://www.tni.org/en/futureispublic>).
251. Ver, por ejemplo, el ciclo positivo para otros ODS generado por la inversión en el personal sanitario. OMS (2016) Health Workers - a proven return on investment https://www.who.int/images/default-source/health-topics/health-workforce/hrh-sdg_infographic_jan2016.png?sfvrsn=6aa5577d_.
252. Ver, por ejemplo, el ciclo positivo para otros ODS generado por la inversión en el personal sanitario https://www.who.int/images/default-source/health-topics/health-workforce/hrh-sdg_infographic_jan2016.png?sfvrsn=6aa5577d_.
253. Bertossa, D. (2020) 'Building Back Better Requires the Courage to Recognise the Value of Public sector Work' por in Building Back Better: A call for Courage. https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/5d208cd0-3108-4f87-ae26-4a8f5572a817_BBB_Publication_Online_1_.pdf.
254. Ibid.
255. Los más beneficiados son los niños de las familias más desfavorecidas, que actualmente son los que menos pueden acceder a ella en la mayoría de los países.
256. Ver, por ejemplo, CICTAR (2021) Darkness at Sunrise - a shocking report on UK care homes shifting profits offshore <https://cictar.org/darkness-at-sunrise-uk-care-homes-shifting-profits-offshore/>.
257. OIT (2019) Care Work and Care Jobs. <https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/care-for-fow/lang--en/index.htm>.
258. ActionAid (2018)
259. Bretton Woods Project (2017)
260. Ostry, J. et al. (2016).
261. Como documenta el propio departamento de investigación del FMI - Ostry, J. et al., 2016.
262. Ver, por ejemplo, la sección final del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2021 "Hacia un nuevo acuerdo económico" https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2021_en.pdf.
263. Ver los programas emblemáticos de la OIT sobre mejor trabajo, pisos de protección social, empleos para la paz y la resiliencia, etc. <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/flagships/lang--en/index.htm>.
264. Como el Informe Spotlight 2020 de DAWN: *Shifting Policies for Systemic Change* <https://dawnnet.org/publication/spotlight-report-2020-shifting-policies-for-systemic-change/>
265. Ver FMI (2021) *IMF Governors Approve a Historic US\$650 Billion SDR Allocation of Special Drawing Rights* <https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights>

ActionAid is a global movement of people working together to achieve greater human rights for all and defeat poverty. We believe people in poverty have the power within them to create change for themselves, their families and communities. ActionAid is a catalyst for that change.

<http://actionforglobaljustice.actionaid.org>

International Registration number: 27264198

Website: www.actionaid.org
Telephone: +27 11 731 4500
Fax: +27 11 880 8082
Email: mailjhb@actionaid.org

ActionAid International Secretariat,
Postnet Suite 248, Private Bag X31, Saxonwold 2132,
Johannesburg, South Africa.

October 2021